

45ª REUNION — Continuación de la 2ª SESION EXTRAORDINARIA — DICIEMBRE 10 DE 1954

Presidencia del doctor Antonio J. Benítez, del señor José V. Tesorieri
y de los doctores Oscar R. Albrieu y Juan Ramón Degreef

Secretarios: doctores Rafael V. González y Eduardo T. Oliver

Prosecretario: doctor Enrique A. Pardo

DIPUTADOS PRESENTES:

ACOSTA, Policarpo
ACUÑA, Judith Elida
AGÜERO, Teodomiro de la Luz
ALBARELLOS, Juan
ALBERTELLI, Pedro A. F.
ALBRIEU, Oscar E.
ALENDE, Oscar Eduardo
ALONSO, José
ALVAREDO de BLANCO SILVA, Obdulio
ÁLVAREZ, Magdalena
ARGUMEDO de PEDROZA, Celfa
ARIAS, Jesús Pablo
ASTORGANO, José
BALEI, Almar A.
BELNICOFF, Manuel
BENITEZ, Antonio J.
BIDEGAIN, Oscar R.
BIONDI, Josefa
BLASI, Héctor A.
BRIGADA de GÓMEZ, Josefa Dominga
BRIZUELA, Juan Francisco
BUSTOS FIERRO Raúl C.
CAMPANO, Guillermo M.
CAMPORA, Héctor J.
CAMUS, E. P.
CANTORE, Luis
CARBALLIDO, Dorindo
CARRERAS, Ernesto
CARRIZO, Francisco Isidro
CASTAGNINO, Héctor
CASTRO, Orlando
CASUCCIO, María Elena
CLEMENT, Fernando Abel
CHALUT, Hugo del Valle
DACUNDA, Angélica E.
DA ROCHA, Alejandro J.
DEGLIUMINI de PARODI, Delia D.
DEGREEF, Juan Ramón
DELMUNDO, Antonio J. C.
DEL RÍO, Arturo R.
DE PRISCO, Guillermo
DÍAZ DE VIVAR, Joaquín
DISKIN, David
D'JORGE, Luis
DOMÍNGUEZ, Carlos Joaquín
DOMÍNGUEZ, Roberto
DUSSAUT, Santiago
ESPEJO de RAMOS, Juana Alicia
FASSI, Santiago Carlos
FERNÁNDEZ, Expédito
FERNÁNDEZ, Hernán S.
FERRER ZANCHI, Alfredo G.
FLORES, Francisca A.
FONTANA, Alfredo
FORTEZA, Eduardo J.
GALLO, Luis M.

GARCIA, Juan C.
GIANOLA, Jorge N.
GOBELLO, José
GOITIA, Carlos Inocencio
GÓMEZ, Manuel Vicente
GOMIS, Pedro A. J.
GONZÁLEZ, Antonio F.
GONZÁLEZ, Ventura
GRAMAJO, Rodolfo
GRO, Carlos
HERMIDA, Antonio
IDOMANICO, Humberto
LABANCA, Enrique V.
LANFOSSI, Adolfo
LANNES, Héctor L.
LATELLA FRIAS, Donato
LÓGUERCIO, Dante N.
LÓPEZ, Gerardo
LÓPEZ, Noé
LÓPEZ, Pablo
LÓPEZ, Plácido Guillermo
LUNA, Pedro Antonio
MACABATE, Manuel E.
MACRI, Ana Carmen
MAESTRO, José Ángel
MARCÓ, Teodoro E.
MARTÍNEZ, Darwin
MATTIS, Eduardo
MERLO, Patrocinio
MESSINA, Bernardo R. A.
MIE, ASQUÍA, Ángel J.
MIGUEL de TUBIO, Josefa
MONTES, Abel
MORESCHI, Humberto P.
MOYA, Isaac Osvaldo
MUSACCHIO, Miguel
NUDELMAN, Santiago I.
ORDÓÑEZ PARDAL, Pedro A.
ORLANDI, Rómulo E.
OSELLA MUÑOZ, Enrique
PALLANZA, Adolfo
PARINO, Edmundo
PELLERANO, Jorge S.
PERALTA, Ángel Enrique
PERETTE, Carlos H.
PÉREZ OTERO, Tito V.
PERICAS, Luis
PICERNO, José E.
PIOVANO de DE CASTRO, Mafalda
POSADA, José B.
PRACANICO, Zulema N.
PRESTA, José
PRESTE, Pascual N. H.
RABANAL, Francisco
RINALDI, Luis
ROCAMORA, Alberto L.
ROCHE, Luis Armando

RODRIGUEZ, Manuel Félix
RODRÍGUEZ de COPA, Seferina del C.
ROUGGIER, Valerio S.
RUMBO, Eduardo L.
SAINZ, Héctor Agustín
SALABER, Carmen
SALVO, Hilario F.
SANTUCHO, Oscar D.
SCANDONE, Eduardo Ernesto
SIBOLDI, Agustín
SPACHESSI, Modesto A. E.
TEJADA, Beato Miguel
TEJADA, María Urbelina
TESORIERI, José V.
TOFANELLI, Oreste
TOMMASI, Victorio M.
TORTEROLA de ROSELLI, Isabel A.
ULLOA, José Manuel
VERGARA, Amando
VILLAFANE, José María
VILLA MACIEL de CANO, Otilia
WEIDMANN, Rodolfo A.
ZERECA, Oreste A.

AUSENTES, CON LICENCIA:

DI BERNARDO, Almerindo D.
GAETA de ITURBE, Dora Matilde
RODRÍGUEZ, Celina E.
VILLARREAL, Pedro

AUSENTES, CON AVISO:

AGUILAR de MEDINA, Generosa D.
ARGAÑA, José María
ATALA, Luis
CARENA, Ezio Armando
CAVIGLIA de BOEYKENS, María C.
COBELLI, Francisco
MORENO, Silverio
OTERO, Pedro Ramón
PAZ Edvino Alfredo
PÉREZ, José C.

DELEGADOS PRESENTES:

BARRERA, Néctar A.
ESCARDÓ de COLOMBO BERRA, P.
FADUL, Esther M.
FERNICOLA, Elena A.
MARINO, Ramón
MONTAÑA, Agapito
PAROLIN, Orlando L.
POLO, Antenor
RÍOS, Octavio A.
RODRÍGUEZ GALLARDO, Alberto
SAN MARTÍN, Pedro J.

SUMARIO

1.—**Consideración del despacho de la Comisión de Legislación Agraria en el proyecto de ley de colonización.** (Página 2644.) Se sanciona.

2.—**Apéndice:**

I.—**Sanciones de la Honorable Cámara.** (Página 2707.)

II.—**Asuntos entrados:**

I.—**Comunicaciones del Honorable Senado.** (Página 2714.)

II.—**Despachos de comisión.** (Página 2714.)

III.—**Proyectos de resolución y de declaración en la mesa de la Honorable Cámara:**

Del señor diputado **Ferrer Zanchi:**
pedido de **informes** relativos a la
detención de estudiantes universi-
tarios. (Página 2714.)

—En Buenos Aires, a los diez días del
mes de diciembre de 1954, a la hora 8 y 15:

1

COLONIZACION

Sr. Presidente (Benítez). — Continúa la sesión.

Corresponde considerar el despacho de la Comisión de Legislación Agraria en el proyecto de ley de colonización, venido en revisión del Honorable Senado.

Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Legislación Agraria ha considerado el proyecto de ley venido en revisión sobre ley de colonización; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su sanción.

Sala de la comisión, 9 de diciembre de 1954.

Victorio M. Tommasi. — **Agustín Siboldi.** — **Guillermo M. Campano.**
— **Ernesto Carreras.** — **Miguel Musacchio.** — **José Manuel Ulloa.**

En disidencia parcial:

Rodolfo A. Weidmann.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

CAPÍTULO I

Del objeto

Artículo 1º — El Estado, con el objeto de promover la colonización atento a la presente ley, fiscalizará la distribución y utilización del campo e intervendrá, con el fin de desarrollar e in-

crementar su rendimiento racional en interés de la comunidad, facilitando a los trabajadores agrarios la posibilidad de convertirse en propietarios de las tierras que cultiven.

La propiedad privada tiene una función social y está sometida a las obligaciones que se determinan en esta ley acorde con el bien común.

La organización de la riqueza agropecuaria y su explotación tienen por fin el bienestar del pueblo, dentro de un orden económico conforme a los principios de la justicia social.

CAPÍTULO II

De los organismos de aplicación y asesoramiento

Art. 2º — La aplicación de la presente ley, estará a cargo del Banco de la Nación Argentina, con la participación directa de un consejo coordinador, integrado por representantes de departamentos de Estado vinculados a la materia y por auténticos productores.

Las atribuciones y el funcionamiento del consejo se determinarán por reglamentación del Poder Ejecutivo, quien designará sus miembros entre personas de reconocida capacidad en problemas agrarios. La presidencia la ejercerá el presidente del banco.

CAPÍTULO III

De las funciones y deberes de los organismos de aplicación y asesoramiento

Art. 3º — El banco, a los fines de esta ley, tendrá las funciones y deberes que se indican:

- a) Administrar el fondo general y los bienes, transferir y enajenar los inmuebles, así como realizar las demás operaciones vinculadas con sus fines;
- b) Estructurar planes de colonización con el asesoramiento del consejo coordinador;
- c) Convenir con los organismos públicos nacionales, provinciales y municipales, la incorporación de inmuebles de su propiedad al régimen de la presente ley, en las condiciones que se estipulen;
- d) Adquirir inmuebles del dominio privado mediante convenio, licitación o remate público;
- e) Proponer al Poder Ejecutivo la expropiación de inmuebles cuando no pudiera adquirirlos por los medios indicados en el inciso anterior;
- f) Promover la participación de las cooperativas en el proceso colonizador y especialmente en la redistribución de la tierra;
- g) Aplicar en las colonias el crédito agrario planificado, impulsando planes de promoción en procura de máximas y mejores producciones agropecuarias que

satisfagan el consumo interno y proporcionen convenientes saldos exportables;

- h) Conceder préstamos especiales de habitación e instalación a plazos convenientes, para la construcción de la vivienda rural y toda mejora económicamente necesaria; comercialización e industrialización de los productos y compra de elementos indispensables para las explotaciones agrarias;
- i) Colaborar en la instrucción que se imparta en las escuelas de las colonias, a fin de que se oriente hacia la capacitación técnica de los agrarios y sus hijos;
- j) Procurar el aprovechamiento de las aguas superficiales y subterráneas para el riego conveniente de las tierras;
- k) Propender a la electrificación de las colonias para satisfacer las necesidades que exige el bienestar de sus productores y en particular el desarrollo de sus actividades económicas;
- l) Promover la aplicación del seguro agrícola en las colonias;
- m) Propugnar el uso de la maquinaria agrícola con vistas a su rendimiento económico y máxima utilización técnica;
- n) Celebrar, con aprobación del Poder Ejecutivo, convenios con grupos de familias de agricultores residentes en el extranjero, para radicarlos en colonias mediante contratos sujetos a las estipulaciones de esta ley. También podrá establecer relaciones con instituciones internacionales, de las que sea signatario el país, a fin de convenir la mejor manera de radicar en zonas de colonización a productores rurales inmigrantes, con intervención de las autoridades nacionales pertinentes;
- ñ) Proponer al Poder Ejecutivo los reglamentos necesarios para la aplicación de esta ley;
- o) Contar permanentemente con un organismo técnico especializado para la aplicación de esta ley;

Art. 4º — En toda adquisición de tierras con vistas al cumplimiento de esta ley, el banco recabará el pronunciamiento del consejo coordinador.

CAPÍTULO IV

De los planes de colonización

Art. 5º — Los planes de colonización promoverán el ordenamiento racional de la tierra agraria en base a los siguientes factores ponderados para cada zona del país:

- a) Consumo regional y demanda de los mercados nacional e internacional;

- b) Economía de los transportes;
- c) Ecología zonal.

Art. 6º — Los planes de colonización prevén:

I. En cuanto a su orientación:

- a) Las zonas de riego creadas o a crearse mediante el cumplimiento de obras hidráulicas estatales;
- b) Las tierras de propiedad fiscal;
- c) Los latifundios que no cumplan con la función social de la propiedad;
- d) Las zonas de erosión actuales o en potencia, en base a un ordenamiento tecnológico de las unidades de explotación en salvaguardia del patrimonio suelo.

II. En cuanto a sus finalidades:

- a) Incorporar nuevas tierras para la explotación agropecuaria e incrementar la producción correspondiente;
- b) Transformar a los productores arrendatarios o aparceros en propietarios de la tierra que trabajan;
- c) Explotar científicamente las tierras que se subdividan;
- d) Conservar los recursos naturales del agro argentino;
- e) Elevar el índice de vida y la seguridad social del agro;
- f) Promover la expansión de centros poblados con vistas a la colonización;
- g) Facilitar el acceso de los hijos argentinos de los actuales productores, a la actividad y propiedad agrarias;
- h) Orientar la radicación de familias campesinas de origen inmigratorio.

CAPÍTULO V

De las tierras colonizables

Art. 7º — Para los fines de esta ley se utilizarán los siguientes inmuebles:

- a) Las tierras incultas o irracionalmente explotadas que estén bajo influencia de obras hidráulicas estatales;
- b) Las fiscales que se consideren aptas;
- c) Las del dominio privado que no cumplan con su función social;
- d) Las que estén en poder de los ministerios, de los bancos del sistema oficial, o cualquiera de las otras reparticiones públicas nacionales y que no se utilicen para otros fines del Estado o para los especiales que determinaron su adquisición, o que en adelante pasen a su poder;

- e) Las del dominio privado o de las provincias o municipalidades que sean ofrecidas para ser incorporadas al régimen de la presente ley;
- f) Las ubicadas en zonas de erosión, o erosionables.

Art. 89. — Será considerado apto para la colonización todo inmueble cuyas características intrínsecas y extrínsecas aconsejan su fraccionamiento mediante el análisis conjunto de los aspectos económicos y sociales que la técnica agrícola y vida rural modernas señalen.

CAPÍTULO VI

De la valuación de las tierras colonizables y sus mejoras

Art. 90. — El precio de la tierra tendrá en cuenta los rendimientos físicos de los últimos diez años y será fijado conforme el valor productivo promedio del último quinquenio, relacionado con la valuación fiscal y valores venales promedios para terrenos similares de la zona, en igual período. Asimismo, se computará el valor de mejoras económicamente necesarias.

Art. 10. — El valor de las mejoras económicamente innecesarias, que por seguir al inmueble como accesorio se deban adquirir junto con la tierra, será justipreciado por separado. Cuando en un inmueble estas mejoras tengan un valor superior al 30 % del precio atribuido al mismo, conforme a las normas del artículo anterior, se requerirá para su adquisición, la autorización del Poder Ejecutivo, siempre que su ubicación, proximidad a centros poblados, industriales o puertos, así lo aconsejaren.

CAPÍTULO VII

De las normas para adquirir tierras colonizables

Art. 11. — La adquisición de las tierras se hará por convenio, licitación o en remate público.

Art. 12. — En la adquisición de inmuebles, deberá hacerse previamente la determinación de su aptitud y valuación, mediante inspecciones y tasaciones efectuadas por no menos de dos ingenieros agrónomos, con sujeción a lo dispuesto en esta ley.

Art. 13. — Las reparticiones públicas nacionales e instituciones crediticias del sistema oficial estarán obligadas a transferir al banco las tierras que estén en su poder y que les requiera para ser colonizadas.

El valor de transferencia será el de adquisición registrado en el patrimonio de dichas reparticiones e instituciones, o se fijará a propuesta del banco y por acuerdo de partes, en base a la productividad calculada con sujeción a las normas del artículo 90, sometiendo cualquier diferencia a la decisión inapelable del Tribunal de Tasaciones de la Nación. Podrán también entregar las tierras que encuadren en las previsiones de esta ley, para que el banco proceda

a colonizarlas acorde con las estipulaciones de la misma, mediante el cobro de gastos que por tal concepto se realicen y una comisión a convenirse en cada caso.

Art. 14. — Las provincias, territorios nacionales y municipalidades podrán convenir la venta o entrega de los inmuebles de su propiedad en las condiciones señaladas en el artículo anterior.

CAPÍTULO VIII

Del régimen de expropiaciones

Art. 15. — En caso de que no se pudiera adquirir tierra suficiente por los medios indicados en el artículo 11, el Poder Ejecutivo solicitará la autorización del Congreso Nacional para expropiar la que sea necesaria incluir en los planes de colonización, siempre que no fuera objeto de explotación agraria racional.

Art. 16. — A los fines de esta ley y con el propósito de asegurar y mejorar el abastecimiento de alimentos protectores, se entenderá que un inmueble no es objeto de explotación agraria racional cuando próximo a centros urbanos, no dediquen hasta un 30 % de su superficie apta, a producción hortícola, granjera o tampera. La proximidad y el porcentaje aludido, se reglamentarán según ubicación de las zonas, magnitud y aptitudes de los inmuebles, conforme a las necesidades de los centros urbanos.

Art. 17. — Para facilitar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior, dentro del período que se fije reglamentariamente, el banco a solicitud de los propietarios comprendidos, otorgará créditos agrarios para la adquisición de todos los elementos necesarios.

Art. 18. — Para evitar que se contenga la expansión de centros urbanos y satisfacer esta exigencia del perfeccionamiento social, el Poder Ejecutivo solicitará la autorización del Congreso Nacional para expropiar las tierras necesarias a tal fin, sin la limitación del artículo 15.

Art. 19. — El precio de la tierra que se expropie en cumplimiento de esta ley, se fijará con sujeción a las normas estatuidas en los artículos 90 y 10.

CAPÍTULO IX

De las colonias

Art. 20. — Las colonias serán organizadas acorde con los dictados de la economía social, técnica y ciencia agrícola modernas, en procura de mayores riquezas y una superior cultura.

Art. 21. — Las tierras adquiridas a los fines de la presente ley, serán subdivididas en lotes que constituyan unidades económicas de explotación.

Se entenderá por tal, el predio que por su superficie, calidad de la tierra, ubicación, mejoras y demás condiciones de explotación, racionalmente trabajado por una familia agraria que aporte la mayor parte del trabajo necesario,

permita subvenir a sus necesidades y a una evolución favorable de la empresa.

Art. 22. — El banco introducirá en cada inmueble adquirido las mejoras generales y particulares que estime económicamente necesarias, para una racional explotación.

En cuanto a las mejoras particulares, el banco facilitará su asesoramiento técnico y créditos de fomento a largos plazos, asimilados preferentemente al lapso de amortización de la tierra, para su implantación por cuenta de los productores.

Art. 23. — En cada colonia podrán hacerse reservas indispensables para calles, centro cívico, instalación de escuelas de orientación agraria, institutos de investigaciones, chacras experimentales y demostrativas, estaciones zootécnicas, cooperativas o cualquier otro fin de interés común. La investigación y experimentación agropecuaria se coordinará con el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación y con las universidades nacionales en cumplimiento del artículo 37 constitucional.

La construcción, entre otros, de los edificios generales que fueran convenientes para la administración de las colonias, así como los destinados a escuelas, salas de primeros auxilios, consultorios médicos y alojamiento del personal, podrá el banco ejecutarla directamente o con la colaboración de las reparticiones públicas pertinentes. A estos efectos, queda autorizado a donar, vender, arrendar o conceder en usufructo o comodato, las fracciones y construcciones necesarias.

Art. 24. — El banco promoverá la formación de colonias hortícolas, tamberas y granjeras, en las proximidades de centros poblados, atento a las previsiones determinadas en la presente ley.

Igualmente, impulsará las producciones aludidas, organizando colonias extensivas y especializadas en tierras que alejadas de los mercados de consumo, acorten sus distancias por adecuados medios de comunicación.

Art. 25. — El banco propenderá a que en cada colonia se organicen cooperativas agropecuarias.

Si próxima a cada colonia existieran en funcionamiento cooperativas adecuadas para su servicio, auspiciará la organización de los productores en éstas.

Art. 26. — Si al efectuarse la subdivisión quedaran fracciones sobrantes que no constituyeran unidades económicas, o no fueran aconsejables sus anexiones a lotes vecinos, o que por mejoras costosas o inadecuadas no sea posible realizar una explotación eficiente o bien que sean convenientes para la instalación de cooperativas, industrias, comercios y otras actividades sociales y culturales, relacionadas con la colonia y su zona, queda el banco autorizado para venderlas en remate público, o en forma directa si lo aconsejare conveniencias de orden social.

Art. 27. — Cuando en un inmueble adquirido se considere conveniente destinar parte del mismo a la creación o ampliación de un pueblo, se efectuará el trazado respectivo acorde con las disposiciones locales vigentes y con las previsiones de la técnica urbanística.

Art. 28. — El banco estimulará el parcelamiento de tierras suburbanas destinadas a radicar obreros que deseen explotar tierras con su trabajo personal y/o el de su familia en forma subsidiaria o substitutiva de su actividad habitual.

CAPÍTULO X

De la adjudicación de unidades económicas

Art. 29. — El banco adjudicará las unidades económicas a los productores que reúnan los siguientes requisitos básicos:

- a) Ser productor agropecuario de profesión o hijo de productor agropecuario que colabore o haya colaborado en tareas rurales. Se considera que satisfacen este requisito los que acrediten haber actuado directamente en trabajos similares a la explotación proyectada, durante un período no menor de cinco años, y los técnicos agrícolas egresados de las universidades nacionales, de las escuelas de ganadería y agricultura de la Nación o de otros establecimientos de orientación agraria, que capaciten para el trabajo rural;
- b) Tener por lo menos 20 años de edad;
- c) Contar con buenos antecedentes personales;
- d) No ser propietario, como tampoco su cónyuge, de inmuebles que representen una unidad económica en los términos de esta ley;
- e) No padecer enfermedades crónicas ni defectos físicos que incapaciten para el trabajo rural.

Art. 30. — Dentro de los que reúnan las condiciones básicas anteriores, se preferirán a quienes:

- a) Tengan familia numerosa y apta para colaborar en el trabajo del predio, entendiéndose por familia: el cónyuge, ascendientes, descendientes y colaterales de segundo grado, que vivan y colaboren con el productor;
- b) Sean de nacionalidad argentina, o extranjeros con residencia mayor de cinco años;
- c) Estén domiciliados en la región;
- d) Fuesen egresados de las facultades de Agronomía y Veterinaria dependientes de las universidades nacionales, de escuelas de agricultura y ganadería de la Nación o provincias o de otros estable-

cimientos de orientación agraria, que capaciten para el trabajo especializado, siempre que cultiven la tierra directamente, y aunque no reúnan las condiciones especificadas en los incisos anteriores. A tales efectos, en todas las colonias se destinará un porcentaje de predios;

- e) Cuenten con implementos agrarios, en relación con las exigencias de las actividades a encarar;
- f) Sean socios de cooperativas agropecuarias.

Art. 31. — Los arrendatarios, aparceros, medieros y toda otra forma de colonato, que hubieran trabajado personalmente el inmueble a adjudicar, por lo menos desde tres años agrícolas antes a la toma de posesión por parte del banco, tendrán derecho a que se les adjudiquen directamente las unidades agrarias en que se subdivida, siempre que reúnan los requisitos básicos señalados en el artículo 29.

Si el número de ocupantes fuese superior al de las unidades económicas estructuradas se realizará entre ellos un concurso de selección, aplicando las preferencias del artículo anterior. El excedente de ocupantes gozará de preferencia en primer grado para la adjudicación de tierras disponibles en otras colonias.

Los ocupantes que carezcan de capital de explotación y de eficiente aptitud de trabajo, podrán ser considerados en reservas especialmente habilitadas, donde se les capacitará con la ayuda económica, social y técnica del Estado para que puedan aspirar a la adjudicación de una unidad económica.

Art. 32. — Los arrendatarios o aparceros que hubiesen sido exceptuados de las prórrogas legales de sus contratos gozarán de privilegios en la adjudicación de unidades económicas. A los efectos de su selección tendrá en cuenta las causales que motivaron la excepción y subsidiariamente las preferencias del artículo 30. Estos privilegios afectarán un porcentaje determinado de unidades económicas en cada colonia y cederán frente al de los ocupantes.

Art. 33. — Los contratos de arrendamientos o aparcerías rurales vigentes en el momento en que se adquiriera un campo para los fines de esta ley quedarán automáticamente rescindidos, y se les otorgará preferencia en las adjudicaciones a los productores titulares de las explotaciones. Queda facultado el banco para trasladar a los ocupantes dentro de la colonia si la ubicación del predio que trabajen impide efectuar el fraccionamiento racional de la tierra.

En caso de traslados o desalojos el banco indemnizará las mejoras con sujeción a las normas de la ley de arrendamientos y aparcerías rurales, como así también los daños probados.

Art. 34. — La adjudicación de lotes se hará por concurso de selección, conforme a las pre-

visiones de esta ley, en la forma que determine la reglamentación.

Art. 35. — El banco podrá reservar en tierras de colonización hasta el 25 % de las unidades económicas para adjudicarlas a inmigrantes campesinos que lleguen al país, en virtud de los tratados que se celebren de conformidad con lo dispuesto en la presente ley.

Art. 36. — El banco, a los fines del artículo anterior, colaborará con las autoridades nacionales pertinentes en la selección por aptitud profesional de corrientes migratorias rurales con destino a tierras de colonización, y dará preferencia en las adjudicaciones a los inmigrantes campesinos que introduzcan capitales y equipos mecanizados para la explotación adecuada del suelo agrícola.

Art. 37. — No se adjudicará más de una unidad económica a una misma persona ni a sus hijos o padres, a menos que éstos formen otra familia agraria. No obstante, toda persona que contara con seis hijos de cualquier sexo o cuatro varones, mayores de catorce años, que vivan o colaboren con ella, podrá solicitar tantos predios adicionales como veces reúnan este requisito.

Art. 38. — Las tierras situadas dentro de zonas de frontera y de seguridad serán adjudicadas, previa conformidad de las autoridades competentes, atento a las disposiciones en vigor.

Art. 39. — Las adjudicaciones serán notificadas a los beneficiarios, quienes, dentro del plazo que fije el banco, deberán formalizar el respectivo contrato. De no hacerlo así, la adjudicación quedará sin efecto y el predio se adjudicará al solicitante que le siga en orden de mérito.

CAPÍTULO XI

De los derechos y obligaciones de los adjudicatarios

Art. 40. — Los adjudicatarios gozarán, mientras cumplan con las obligaciones a su cargo, de las ventajas y beneficios acordados por esta ley, y en especial:

- a) Posesión inmediata y pacífica del predio adjudicado;
- b) Préstamos de fomento para instalación, vivienda y habilitación;
- c) Reconocimiento del valor de las mejoras necesarias y útiles que hubieren introducido con aprobación del banco;
- d) Asesoramiento técnico en cuanto a la explotación del predio, racionalización de los cultivos, industrialización y comercialización de sus frutos, entre otros;
- e) Inembargabilidad de los elementos y animales de trabajo, maquinarias, muebles, enseres, ropas y útiles domésticos, rodados, semillas y otros bienes necesarios para la explotación del predio, dentro de los límites que se fijen reglamentariamente.

El beneficio de la inembargabilidad no rige en contra del vendedor en su reclamación del precio de las cosas declaradas inembargables, ni contra el banco;

f) Reducción del 5 % del precio de venta del predio por el nacimiento de cada hijo del adjudicatario, de acuerdo con el artículo 43, inciso c);

g) Ampliación de la adjudicación a razón de un lote adicional, conforme al artículo 37, quedando condicionado este derecho a la capacidad de trabajo del productor y su familia, como así a la productividad económica del predio adjudicado y a las disponibilidades de tierra. Cuando uno de los hijos constituya un nuevo núcleo familiar económicamente independiente, el predio podrá ser adjudicado a nombre del hijo o yerno del adjudicatario que reúna las condiciones estatuidas en el artículo 29.

Si no se dispone en la colonia de reservas a tal fin, se ofrecerá traslado a otra de similares posibilidades de explotación;

h) Extensión del título de dominio del predio adjudicado, en las condiciones y oportunidad determinadas en esta ley.

Art. 41. — Serán obligaciones de los adjudicatarios:

- a) Residir en el predio con su familia y trabajarlo personalmente, a cuyo efecto deberán construir la vivienda rural, en la forma que estipula esta ley, siempre que el banco no procediera a su directa construcción;
- b) Efectuar los pagos correspondientes en los plazos y formas establecidas en el capítulo XII;
- c) Realizar la explotación con sujeción a leyes y reglamentos agrícolas y ganaderos, cumpliendo con las normas de explotación que establezca el banco, a fin de que especialmente en el cultivo y manejo del suelo sean aplicados los procedimientos científicos;
- d) Conservar en buen estado las mejoras existentes en el lote y requerir la autorización pertinente para introducir otras, siendo responsables de todo daño o deterioro ocasionados por su culpa o negligencia;
- e) Acatar las disposiciones y orientaciones que se impriman con referencia a trabajos comunes de bien general para las colonias, especialmente con vistas a la conservación de caminos;
- f) Plantar dentro de los cinco primeros años a partir de la posesión del predio y cuidar permanentemente, dos árboles forestales por hectárea, hasta 300 como

máximo, si no los hubiere al ocupar la tierra, sin derecho a retribución alguna;

- g) No arrendar, ni ceder sus derechos sobre el lote, sin consentimiento previo del banco;
- h) Participar en el movimiento cooperativo de productores agropecuarios.

CAPÍTULO XII

De la venta y forma de pago de las unidades económicas

Art. 42. — El precio de venta de las unidades económicas, sus cuotas de amortización y tasa de interés, observarán directa relación con el real valor de productividad, a fin de que en armonía con el tipo de explotación prevista, el productor pueda atender la deuda con normalidad y mediante su trabajo habitual.

Art. 43. — El precio de venta de las unidades económicas será abonado:

- a) Con un servicio anual de hasta el 5 %, incluyendo amortización e interés, a determinarse en función de las características de productividad de cada colonia;
- b) Con amortizaciones extraordinarias que podrán efectuarse en cualquier época;
- c) Con la reducción de un 5 % del valor inicial del lote, por cada hijo del adjudicatario que naciera con posterioridad a la toma de posesión del predio.

Art. 44. — Los servicios se abonarán en cuotas semestrales o anuales, según se estimare más conveniente. El servicio inicial y la escala total de pagos se relacionarán directamente con el proceso productivo de las unidades económicas adjudicadas. Los vencimientos se fijarán en las épocas de mayores ingresos.

Art. 45. — Al establecerse la escala total de pagos prevista en el artículo anterior, se tendrá en cuenta que los adjudicatarios deberán abonar, además, en los casos pertinentes: impuestos, canon de riego, cuotas de préstamos otorgados, porcentaje por gastos de administración y por construcción o conservación de mejoras generales.

Art. 46. — El banco queda facultado para suspender los pagos de las sumas que deban abonar los adjudicatarios, ante pérdidas total o parcial de cosechas, en el porcentaje y condiciones que establezca la reglamentación, debidas a caso fortuito o de fuerza mayor que implique riesgos inasegurables, excepto si las pérdidas resultaran compensadas con el producido de las cosechas precedentes. Los servicios atrasados se correrán al vencimiento siguiente, sin acumularse y sin interés punitivo.

Art. 47. — Excepto en los casos del artículo anterior, toda deuda de plazo vencido devengará un interés del 6 % anual, a favor del banco, salvo disposición expresa en contrario.

CAPÍTULO XIII

Del fondo de ahorro

Art. 48. — Cuando resultados favorables de la explotación lo permitiera, el banco podrá imponer a cada adjudicatario la entrega en depósito de una suma variable para constituir el «fondo de ahorro», que se hará efectiva con el pago de los servicios de amortización e interés.

Art. 49. — El banco fijará, anualmente y en cada región, el monto de las sumas que los adjudicatarios deberán ingresar en el fondo de ahorro, exonerándolos de dicha obligación según los resultados económicos de la explotación del predio.

Art. 50. — Las sumas que ingresen al fondo de ahorro, se depositarán en el banco, a nombre de cada adjudicatario, y devengarán el interés correspondiente a los depósitos de caja de ahorro.

Art. 51. — El fondo de ahorro se destinará para:

- a) Servir como reserva ante las contingencias agrícolas;
- b) Solventar gastos de asistencia médica del productor y familiares a su cargo;
- c) Acelerar la amortización del saldo de precio del lote, en la forma que el banco determine.

CAPÍTULO XIV

De la vivienda rural

Art. 52. — El banco asegurará a cada adjudicatario una vivienda adecuada, higiénica, confortable y económica. Para ello, procederá a su directa construcción u otorgará préstamos de edificación hasta por el valor total de la obra, a amortizarse en igual forma que el precio de la tierra.

Art. 53. — Para hacer uso del préstamo de edificación, el adjudicatario ajustará al asesoramiento técnico y gratuito del banco, que tendrá en cuenta:

- a) Las previsiones del crecimiento familiar;
- b) Las características de construcción según zonas rurales;
- c) La necesidad de facilitar la construcción por los interesados y por obreros no especializados;
- d) El empleo de los materiales locales más eficientes y económicos;
- e) Las normas generales de seguridad, higiene y comodidad necesarias para el bienestar y la salud.

Igualmente, el banco proporcionará, sin cargo, la inspección de las obras.

CAPÍTULO XV

De la conclusión de las adjudicaciones

Art. 54. — Las adjudicaciones podrán concluir:

- a) Por rescisión de mutuo acuerdo entre el banco y el adjudicatario;
- b) Por caducidad dispuesta por el banco por incumplimiento de cualquiera de las disposiciones de esta ley, su reglamentación o contrato de adjudicación;
- c) Por fallecimiento del adjudicatario.

Art. 55. — En caso de rescisión, el banco devolverá al adjudicatario las sumas amortizadas y el saldo de su fondo de ahorro e indemnizará las mejoras económicamente necesarias que hubiere introducido con su aprobación, previa deducción de todo monto que adeudare.

Art. 56. — En los supuestos de caducidad, el adjudicatario sólo tendrá derecho al reembolso del valor de las mejoras económicamente necesarias que hubiere introducido con aprobación del banco y de las sumas acumuladas en concepto de fondo de ahorro, previa deducción de todo monto que adeudare y del equivalente del 3,25 % sobre el precio de venta de la unidad económica en concepto de arrendamiento anual.

Art. 57. — El justiprecio de las mejoras será fijado por el banco con audiencia del interesado, teniéndose en cuenta el tiempo de uso, su vida útil, estado de conservación y valor de reposición.

Art. 58. — En caso de fallecimiento del adjudicatario el banco podrá según las circunstancias:

- a) Continuar la adjudicación con los herederos del causante, siempre que entre ellos exista por lo menos uno apto en las condiciones de esta ley, para hacerse cargo de la explotación del predio. En este caso, se declarará transmitida la adjudicación, a nombre de la sucesión e instituyendo a uno de los herederos para que la represente en sus relaciones con el banco;
- b) Rescindir la adjudicación, si no hubiere heredero apto o ninguno quisiera continuar con la explotación del predio. En este supuesto, el banco depositará a nombre de la sucesión respectiva, el importe de las devoluciones e indemnizaciones que correspondieran, según las normas de esta ley.

CAPÍTULO XVI

Del título de propiedad y sus caracteres

Art. 59. — El otorgamiento del título, acreditando la propiedad del predio a favor del adjudicatario, tendrá lugar cuando concurren las siguientes condiciones:

- a) Cumplimiento satisfactorio de todas las obligaciones a cargo del adjudicatario;
- b) Transcurso del término de 10 años, desde la posesión del lote.

Art. 60. — Se declara inembargable e inejecutable el dominio de los predios de colonización y las medidas precautorias que se tomen contra el adjudicatario, no podrán afectar el normal desarrollo de la explotación del predio.

Art. 61. — En todos los títulos de propiedad que otorgue el banco, deberán insertarse las siguientes cláusulas especiales prohibitivas de:

- a) Subdividir la unidad económica otorgada en propiedad, la que será indivisible en el tiempo y en el espacio. No obstante, el banco podrá autorizar la división cuando, a su juicio, fundadas razones de orden técnico lo aconsejaren;
- b) Constituir derecho real alguno sobre la parcela adjudicada sin consentimiento del banco;
- c) Transmitir o enajenar el dominio a terceros, sin autorización previa del banco, quien la acordará cuando éstos reunieren los requisitos exigidos por la presente ley.

La autorización se considerará tácitamente otorgada si no se la denegase expresamente dentro de 90 días a contar de la fecha de presentación de la respectiva solicitud.

Art. 62. — Las transmisiones de dominio contrarias a las disposiciones de esta ley estarán afectadas de nulidad absoluta. En las escrituras traslativas de dominio deberá dejarse constancia de la autorización expresa o tácita para transferir.

El escribano que autorice una escritura en la que se omita esa constancia incurrirá en falta cuya sanción y aplicación será conforme a la ley 12.990.

Art. 63. — Otorgado el título de dominio, el propietario deberá mantener el predio en grado racional de productividad. Esta obligación regirá para los sucesivos adquirentes sin término de prescripción. En su defecto, las tierras podrán ser expropiadas por el banco, con aprobación del Poder Ejecutivo, a cuyo fin se las declara de utilidad pública.

Art. 64. — En el supuesto de transmisión de la propiedad por fallecimiento, no se admitirá la subdivisión de las unidades económicas, y el banco designará en defecto de acuerdo el heredero que continuará como titular del predio. El banco estimará los valores del caso a los fines de determinar las alícuotas de los herederos y acordará créditos especiales para que el heredero adjudicatario desinterese a los excluidos. Los jueces no aprobarán tasación, partición ni adjudicación de bienes comprendidos en esta ley, ni los escribanos autorizarán escrituras, sin observar estas prescripciones.

CAPÍTULO XVII

Del régimen financiero

Art. 65. — Ingresarán al patrimonio del banco, en una cuenta especial que se denominará «Fondo de Colonización»:

- a) Los bienes adquiridos en función de la ley 12.636, de las leyes especiales de colonización a cargo del banco y los que se adquieran por la presente ley;
- b) Los bienes legados o donados que sean aceptados por el banco;
- c) El producido de los arrendamientos y pastajes de las tierras adquiridas, mientras no fuesen adjudicadas;
- d) Los reembolsos que hagan los adjudicatarios por los préstamos para mejoras, acordados de acuerdo con esta ley;
- e) El producido de la venta de los predios colonizados, de los materiales sobrantes y de las cosechas de las tierras adquiridas;
- f) Los intereses y comisiones que deban satisfacer los adjudicatarios;
- g) Todo otro ingreso no previsto especialmente en la presente enumeración.

Art. 66. — Para el cumplimiento de esta ley, el banco utilizará los recursos que fije el Ministerio de Finanzas.

Art. 67. — Cuando para la incorporación de determinadas zonas a la riqueza nacional sean imprescindibles inversiones extraordinarias de fomento, éstas serán realizadas por el Estado en el porcentaje que permita al auténtico productor recibir la tierra en tal grado económica que pueda abonarla con el producido de su trabajo normal en los plazos y condiciones estipulados en la presente ley.

En dichos casos excepcionales, el banco someterá al Poder Ejecutivo, para su debida aprobación, el pertinente plan integral de labor.

CAPÍTULO XVIII

De la colonización con las provincias y territorios nacionales

Art. 68. — Las provincias y territorios nacionales que se acojan al régimen de la presente ley gozarán de la participación financiera del Banco para sus obras de colonización.

Art. 69. — El acogimiento al régimen de la presente ley comporta correlativamente las siguientes obligaciones:

- a) Coordinar con el banco para su aprobación, los planes de colonización que se sujetarán a las normas de esta ley;
- b) Establecer con el banco la unidad de concepción necesaria para unificar la aplicación de los preceptos constitucionales en cuanto a la extinción de latifundios;

- c) Conceder toda exención impositiva al banco, en función de la presente ley, por los actos que realice, contratos que celebre, sellado en actuaciones judiciales o administrativas, inscripciones y actos complementarios;
- d) Conceder la exoneración de impuestos territoriales por los inmuebles que posea y adquiera el banco a los fines de esta ley, mientras permanezcan en su poder;
- e) Disponer la exoneración de impuestos territoriales por el término de cinco años a los adjudicatarios de lotes bajo el régimen de las presentes normas, a partir del otorgamiento de la posesión; y a todos los agricultores que con posterioridad a la ley respectiva adquieran tierras incultas en extensión no mayor de cien hectáreas con destino a explotaciones hortícolas granjeras o tamberas, y que vivan en ellas con su familia, trabajándolas directamente, por cuenta propia;
- f) Facilitar la instalación de justicia de paz, policía y escuelas en las colonias, si no las hubiere en la zona o no fueren fácilmente accesibles;
- g) Colaborar en la construcción y conservación de caminos.

CAPÍTULO XIX

De la colonización privada

Art. 70. — Los propietarios que desearan fraccionar sus campos para la venta en unidades económicas a sus ocupantes, con asistencia del crédito oficial, sujetos a la ley de arrendamientos y aparcerías rurales, deberán someter al banco los estudios técnicos y económicos respectivos, suscritos por un profesional, ingeniero agrónomo.

Las operaciones que se realicen conforme a este artículo quedarán exentas de todo impuesto de sellado e inscripción.

Art. 71. — De conceder el banco los créditos previstos en el artículo anterior, tanto las tierras a colonizar como los productores adquirentes quedarán incluidos automáticamente en el régimen de la presente ley.

Art. 72. — El banco auspiciará la colonización privada en campos libres de ocupantes, adquiriendo las tierras conforme a las prescripciones de esta ley e incorporándolas a su régimen.

Art. 73. — Los particulares o entidades privadas que colonizaren por su cuenta, no podrán adjudicar más del 25 % de las unidades económicas en que fraccionen sus campos, a extranjeros.

CAPÍTULO XX

De las disposiciones generales

Art. 74. — El banco procederá a instituir en las colonias, consejos locales agrarios presididos por su gerente de zona o de sucursal e integrados por el administrador técnico de aquéllas, los mejores productores elegidos entre los mismos adjudicatarios, el agrónomo regional y el presidente de una cooperativa de la zona.

Art. 75. — Los consejos locales agrarios tendrán por objeto coadyuvar la acción colonizadora, en procura de la elevación del nivel de vida social, material y cultural de la población rural de las colonias, consolidando el hogar campesino, estimulando la cordial armonía entre todos los participantes del trabajo rural —productores y obreros—, bases esenciales de la economía agraria, a fin de lograr una máxima y mejor producción.

Art. 76. — El banco está exento de todo impuesto nacional en las operaciones que realice conforme a las previsiones de esta ley, quedando libre de derechos de aduana, las maquinarias, equipos, rodados, semillas, abonos, materiales y demás elementos necesarios para la colonización. A estos fines, el Banco Central de la República Argentina acordará preferencia al otorgamiento de las divisas necesarias.

Art. 77. — Los adjudicatarios de lotes quedan exonerados del pago de todo impuesto nacional que grave la propiedad raíz por el término de cinco años a contar desde la fecha en que se les otorgue la posesión.

Art. 78. — El banco gestionará de las municipalidades la exoneración de gravámenes por los inmuebles, construcciones, rodados, semovientes, contratos o actuaciones que realice, en función de la presente ley, mientras permanezcan aquéllos en su poder. Asimismo, solicitará que la exención alcance la construcción o ampliación de la vivienda rural que realicen los adjudicatarios.

Art. 79. — Facúltase al banco a proceder sin forma alguna de juicio, al embargo de hasta el 33 % de la renta bruta de cada predio para aplicarla a los pagos que injustificadamente se le adeudaren.

Art. 80. — El banco queda autorizado a recurrir a la vía de apremio para obtener el cobro de sus créditos.

Art. 81. — El producido de la venta y arrendamiento con opción a compra de los inmuebles adquiridos en función de la ley 12.636, y el reembolso de los préstamos autorizados en virtud de la misma, quedarán afectados a la amortización de las sumas anticipadas de acuerdo con el decreto 6.341/48.

Asimismo, la recaudación por concepto de los servicios financieros que abonen las adquirentes de predios de las leyes 12.355 y 13.592 y decreto 18.341/49, se depositarán con destino a cancelar

el precio de adquisición de los mismos, y si hubiere remanente, quedará como recurso del banco, con destino al «Fondo de Colonización».

Art. 82. — Declárase de orden público las prescripciones de esta ley, quedando derogadas las leyes 12.636; 12.355 en sus artículos 2º, 4º y 9º; el régimen de fomento especial de colonización del banco y demás normas legales que se opongan a la presente.

Las adjudicaciones sujetas a las leyes y normas que se derogan, continuarán rigiéndose por éstas, con excepción de las disposiciones de los artículos 61, 62, 63 y 64 que regirán para todos aquellos adjudicatarios que no hubieren recibido del banco el título de propiedad respectivo, a la fecha de promulgación de la presente ley.

Art. 83. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

ANTECEDENTES

Buenos Aires, 21 de septiembre de 1954.

Al Honorable Congreso Nacional.

El Poder Ejecutivo somete a la consideración de vuestra honorabilidad el proyecto de ley que tiende a actualizar las normas jurídicas vigentes en materia de colonización sobre tierras de origen privado.

En efecto, es menester adecuar las disposiciones que estatuye la ley 12.636, del año 1940, a las nuevas concepciones de la Constitución Justicialista y a las previsiones del segundo Plan Quinquenal.

Se parte del principio de que la propiedad privada tiene una función social y, en consecuencia, sometida a las obligaciones que se determinan en este proyecto, con vistas al bien común. Ello, en procura de incrementar el rendimiento racional de tierras agrícolas, atento al interés de la sociedad, facilitando a cada labriego o familia labriega la posibilidad de convertirse en propietario de la tierra que cultive. De tal modo, la organización de la riqueza agropecuaria y su explotación han de observar el bienestar del pueblo, dentro de un orden económico conformado por principios de justicia social.

Sin entrar a analizar comparativamente las disposiciones que se aconsejan abrogar con las nuevas normas proyectadas, se significa que el Poder Ejecutivo ha dedicado preferente y especial atención a la financiación de sus planes colonizadores, desde que ha sido necesario ratificar en los hechos las declaraciones teóricas en procura de fórmulas prácticas y disponerse al encuentro de las dificultades para solucionarlas.

Subrayando lo expuesto, es evidente que la principal dificultad registrada para hacer obra colonizadora mediante la ley 12.636, ha consistido, desde un principio y fundamentalmente, en el régimen de financiación, en detrimento del avance ilusorio que significó su letra al tiempo de su sanción.

Como es de conocimiento de vuestra honorabilidad, el Poder Ejecutivo se vió precisado a dotar a la colonización estatal de los medios financieros adecuados, y, por tal circunstancia, confió la obra pertinente al Ministerio de Finanzas por intermedio del Banco de la Nación Argentina —con la participación de un Consejo Coordinador de Colonización—, integrado por los departamentos de Estado vinculados al problema.

La experiencia recogida al respecto en años de intensa labor y evidenciada en la registración esta-

dística referente a la entrega efectiva de tierras labrables, ratifica el acierto de las medidas adoptadas oportunamente por el gobierno.

Asimismo, cabe señalar que el presente proyecto se ajusta a los objetivos del segundo Plan Quinquenal y, en un todo, a nuestra Doctrina Nacional.

De la enunciación de las finalidades del proyecto surgen los beneficios que se derivarán de su integral aplicación, desde que se persigue, entre otros fundamentales objetivos, que las tierras sean cultivadas por quienes se interesen en hacerlas producir, y que al cultivo y manejo del suelo agrícola sean aplicados los procedimientos científicos. Al respecto, es interesante significar que la «promoción agropecuaria» y los «problemas de la alimentación» se encaran bajo una sola concepción, a fin de concretar en tierras de colonización la doble función social que le compete: la tierra para quien la trabaja y los frutos que se logren para las demandas del pueblo y del mercado exterior.

Observamos que se impulsa la entrega de la tierra al trabajador rural, juntamente con la vivienda digna, funcional, adecuada y económica, a efectos de satisfacer las necesidades de la familia campesina en procura del afincamiento real de la población agraria.

Además, ha merecido consideración el principio constitucional referente al desarrollo de la «pequeña propiedad agrícola en explotación», adecuándose a que «pequeña propiedad no ha de significar pequeña economía, sino independencia económica» para el productor y su familia, interpretación que precisa el concepto de unidades económicas.

En cuanto al régimen de expropiación del proyecto, cabe significar que el mismo se ajusta a las normas que caracterizan el derecho agrario peronista, desde que se desplaza el concepto unilateral de magnitud, en cuanto a superficies, para conjugar integralmente, en cada caso, los distintos factores que concurren a definir el régimen conveniente de la propiedad en explotación con sentido social. Es el respeto a la propiedad individual racionalmente trabajada.

Por otra parte, atento a la necesidad de promover el abastecimiento de alimentos protectores a centros poblados de consumo interno, se propicia particularmente la incrementación de dichos productos, al asegurar a los propietarios de predios aptos, la asistencia del crédito agrario oficial y, a los aspirantes a colonos, la adquisición de inmuebles en zonas periurbanas.

Un importante aspecto que también concurre a innovar en la materia, significa la participación financiera prevista para obras de colonización coordinadas con las provincias o territorios, de acogerse sus gobiernos al régimen que se somete a consideración de vuestra honorabilidad.

Por cierto, no se descuida la colonización privada, tanto en predios ocupados como libres de ocupantes, a cuyo fin se prevé la adquisición de tierras conforme a las prescripciones que se proyectan, para incorporarlas al régimen colonizador.

Igualmente ha merecido atención el problema de las subdivisiones en el tiempo, con el propósito de evitar la desintegración de unidades económicas de colonización, para contener el minifundio.

No se descuida el aspecto de la perpetuación de la familia agricultora en el campo, brindando inmediatas posibilidades a los hijos de los productores, a fin de que sigan las actividades de sus padres.

Es el caso mencionar consideraciones referentes a ciertos tipos específicos de colonización, como ser la colonización «Obrera» o «Suburbana» que se prevé.

Este tipo de colonización surge como derivada del nuevo ritmo que adquiere la vida económica en los distintos países civilizados del mundo, considerando la agricultura no ya como actividad exclusiva, sino como auxiliar de otras actividades en algunos casos, o como punto de partida para la transformación de «elemento urbano» en «elemento agricultor».

Obreros de fábricas en centros industriales y obreros rurales de pueblos de campaña, constituyen un deseado elemento para ser colonizado, pues es una forma efectiva de consolidar en el tiempo la plena ocupación o atenuar el paro forzoso como consecuencia de la actividad estacional en el caso de los trabajadores rurales, manteniéndolos vinculados a la tierra.

Este sistema constituye el mejor recurso para estabilizar la población obrera de la campaña evitando su nomadismo y asegurando una permanente fuente de brazos en las distintas zonas del agro.

Por último, se subraya que de ser este proyecto sancionado por vuestra honorabilidad, se verán cumplidos los principios que informan la política agraria justicialista: «aumentar el número de los propietarios es el camino mejor para aumentar el número de los satisfechos».

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

JUAN PERÓN.

Carlos A. Hogan. — Miguel Revestido.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

CAPÍTULO I

Del objeto

Artículo 1º—El Estado, con el objeto de promover la colonización atento a la presente ley, fiscalizará la distribución y utilización del campo e intervendrá, con el fin de desarrollar e incrementar su rendimiento racional en interés de la comunidad, facilitando a los trabajadores agrarios la posibilidad de convertirse en propietarios de las tierras que cultiven.

La propiedad privada tiene una función social y está sometida a las obligaciones que se determinan en esta ley acorde con el bien común.

La organización de la riqueza agropecuaria y su explotación tienen por fin el bienestar del pueblo, dentro de un orden económico conforme a los principios de la justicia social.

CAPÍTULO II

De los organismos de aplicación y asesoramiento

Art. 2º—La aplicación de la presente ley estará a cargo del Banco de la Nación Argentina, con la participación directa de un consejo coordinador, integrado por representantes de departamentos de Estado vinculados a la materia y por auténticos productores.

Las atribuciones y el funcionamiento del consejo se determinarán por reglamentación del Poder Ejecutivo, quien designará sus miembros entre personas de reconocida capacidad en problemas agrarios. La presidencia la ejercerá el presidente del banco.

CAPÍTULO III

De las funciones y deberes de los organismos de aplicación y asesoramiento

Art. 3º—El banco, a los fines de esta ley, tendrá las funciones y deberes que se indican:

- a) Administrar el fondo general y los bienes, transferir y enajenar los inmuebles, así como realizar las demás operaciones vinculadas con sus fines;
- b) Estructurar planes de colonización con el asesoramiento del consejo coordinador;
- c) Convenir con los organismos públicos nacionales, provinciales y municipales, la incorporación de inmuebles de su propiedad al régimen de la presente ley, en las condiciones que se estipulen;
- d) Adquirir inmuebles del dominio privado mediante convenio, licitación o remate público;
- e) Proponer al Poder Ejecutivo la expropiación de inmuebles cuando no pudiera adquirirlos por los medios indicados en el inciso anterior;
- f) Promover la participación de las cooperativas en el proceso colonizador y especialmente en la redistribución de la tierra;
- g) Aplicar en las colonias el crédito agrario planificado, impulsando planes de promoción en procura de máximas y mejores producciones agropecuarias que satisfagan el consumo interno y proporcionen convenientes saldos exportables;
- h) Conceder préstamos especiales de habilitación e instalación a plazos convenientes, para la construcción de la vivienda rural y toda mejora económicamente necesaria; comercialización e industrialización de los productos y compra de elementos indispensables para las explotaciones agrarias;
- i) Colaborar en la instrucción que se imparta en las escuelas de las colonias, a fin de que se oriente hacia la capacitación técnica de los agrarios y sus hijos;
- j) Procurar el aprovechamiento de las aguas superficiales y subterráneas para el riego conveniente de las tierras;
- k) Propender a la electrificación de las colonias para satisfacer las necesidades que exige el bienestar de sus productores y en particular el desarrollo de sus actividades económicas;
- l) Promover la aplicación del seguro agrícola en las colonias;
- m) Propugnar el uso de la maquinaria agrícola con vistas a su rendimiento económico y máxima utilización técnica;
- n) Celebrar, con aprobación del Poder Ejecutivo, convenios con grupos de familias de agricultores residentes en el extranjero, para radicarlos en colonias mediante contratos sujetos a las estipulaciones de esta ley. También podrá establecer relaciones con instituciones internacionales, de las que sea signatario el país, a fin de convenir la mejor manera de radicar en zonas de colonización a productores rurales inmigrantes, con intervención de las autoridades nacionales pertinentes;
- ñ) Proponer al Poder Ejecutivo los reglamentos necesarios para la aplicación de esta ley;
- o) Contar permanentemente con un organismo técnico especializado para la aplicación de esta ley.

Art. 4º—En la elaboración de los planes de colonización en toda adquisición de tierras con vistas al cumplimiento de esta ley, el banco recabará el pronunciamiento del consejo coordinador.

CAPÍTULO IV

De los planes de colonización

Art. 5º — Los planes de colonización promoverán el ordenamiento racional de la tierra agraria en base a los siguientes factores ponderados para cada zona del país:

- a) Consumo regional y demanda de los mercados nacional e internacional;
- b) Economía de los transportes;
- c) Ecología zonal.

Art. 6º — Los planes de colonización preverán:

I. En cuanto a su orientación:

- a) Las zonas de riego creadas o a crearse mediante el cumplimiento de obras hidráulicas estatales;
- b) Las tierras de propiedad fiscal;
- c) Los latifundios que no cumplan con la función social de la propiedad;
- d) Las zonas de erosión actuales o en potencia, en base a un ordenamiento tecnológico de las unidades de explotación en salvaguardia del patrimonio suelo.

II. En cuanto a sus finalidades:

- a) Incorporar nuevas tierras para la explotación agropecuaria e incrementar la producción correspondiente;
- b) Transformar a los productores arrendatarios o aparceros en propietarios de la tierra que trabajan;
- c) Explotar científicamente las tierras que se subdividan;
- d) Conservar los recursos naturales del agro argentino;
- e) Elevar el índice de vida y la seguridad social del agro;
- f) Promover la expansión de centros poblados con vistas a la colonización;
- g) Facilitar el acceso de los hijos argentinos de los actuales productores con familia constituida, a la actividad y propiedad agrarias;
- h) Orientar la radicación de familias campesinas de origen inmigratorio.

CAPÍTULO V

De las tierras colonizables

Art. 7º — Para los fines de esta ley se utilizarán los siguientes inmuebles:

- a) Las tierras incultas o irracionalmente explotadas que estén bajo influencia de obras hidráulicas estatales;
- b) Las fiscales que se consideren aptas;
- c) Las del dominio privado que no cumplan con su función social;
- d) Las que estén en poder de los ministerios, de los bancos del sistema oficial, o cualquiera de las otras reparticiones públicas nacionales y que no se utilicen para otros fines del Estado o para los especiales que determinaron su adquisición, o que en adelante pasen a su poder;

- e) Las del dominio privado o de las provincias o municipalidades que sean ofrecidas para ser incorporadas al régimen de la presente ley;
- f) Las ubicadas en zonas de erosión, o erosionables.

Art. 8º — Será considerado apto para la colonización todo inmueble cuyas características intrínsecas y extrínsecas aconsejan su fraccionamiento mediante el análisis conjunto de los aspectos económicos y sociales que la técnica agrícola y vida rural modernas señalen.

CAPÍTULO VI

De la valuación de las tierras colonizables y sus mejoras

Art. 9º — El precio de la tierra tendrá en cuenta los rendimientos físicos de los últimos diez años y será fijado conforme el valor productivo promedio del último quinquenio, relacionado con la valuación fiscal y valores venales promedios para terrenos similares de la zona, en igual período. Asimismo, se computará el valor de las mejoras económicamente necesarias.

Art. 10. — El valor de las mejoras económicamente innecesarias, que por seguir al inmueble como accesorio se deban adquirir junto con la tierra, será justipreciado por separado. Cuando en un inmueble estas mejoras tengan un valor superior al 30 % del precio atribuido al mismo, conforme a las normas del artículo anterior, se requerirá para su adquisición la autorización del Poder Ejecutivo, siempre que su ubicación, proximidad a centros poblados, industriales o puertos, así lo aconsejaren.

CAPÍTULO VII

De las normas para adquirir tierras colonizables

Art. 11. — La adquisición de las tierras se hará por convenio, licitación o en remate público.

Art. 12. — En la adquisición de inmuebles, deberá hacerse previamente la determinación de su aptitud y valuación, mediante inspecciones y tasaciones efectuadas por no menos de dos ingenieros agrónomos con sujeción a lo dispuesto en esta ley.

Art. 13. — Las reparticiones públicas nacionales e instituciones crediticias del sistema oficial estarán obligadas a transferir al banco las tierras que estén en su poder y que les requiera para ser colonizadas.

El valor de transferencia será el de adquisición registrado en el patrimonio de dichas reparticiones e instituciones, o se fijará a propuesta del banco y por acuerdo de partes, en base a la productividad calculada con sujeción a las normas del artículo 9º, sometiéndolo cualquier diferencia a la decisión, inapelable del Tribunal de Tasaciones de la Nación. Podrán también entregar las tierras que encuadren en las previsiones de esta ley, para que el banco proceda a colonizarlas acorde con las estipulaciones de la misma, mediante el cobro de gastos que por tal concepto se realicen y una comisión a convenirse en cada caso.

Art. 14. — Las provincias, territorios nacionales y municipalidades podrán convenir la venta o entrega de los inmuebles de su propiedad en las condiciones señaladas en el artículo anterior.

CAPÍTULO VIII

Del régimen de expropiaciones

Art. 15. — En caso de que no se pudiera adquirir tierra suficiente por los medios indicados en el artículo 11, el Poder Ejecutivo solicitará la autorización del Congreso Nacional para expropiar la que sea necesaria incluir en los planes de colonización, siempre que no fuera objeto de explotación agraria racional.

Art. 16. — A los fines de esta ley y con el propósito de asegurar y mejorar el abastecimiento de alimentos protectores, se entenderá que un inmueble no es el objeto de explotación agraria racional cuando próximo a centros urbanos, no dediquen hasta un 30 % de su superficie apta, a producción hortícola, granjera o tampera. La proximidad y el porcentaje aludido se reglamentarán según ubicación de las zonas, magnitud y aptitudes de los inmuebles, conforme a las necesidades de los centros urbanos.

Art. 17. — Para facilitar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior, dentro del período que se fije reglamentariamente, el banco, a solicitud de los propietarios comprendidos, otorgará créditos agrarios para la adquisición de todos los elementos necesarios.

Art. 18. — Para evitar que se contenga la expansión de centros urbanos y satisfacer esta exigencia del perfeccionamiento social, el Poder Ejecutivo solicitará la autorización del Congreso Nacional para expropiar las tierras necesarias a tal fin, sin la limitación del artículo 15.

Art. 19. — El precio de la tierra que se expropie en cumplimiento de esta ley, se fijará con sujeción a las normas estatuidas en los artículos 9º y 10.

De los perjuicios que el expropiado probara y que fueran consecuencia forzosa de la ocupación se excluirán en todos los casos los valores especulativos, efectivos, los daños y las ganancias hipotéticas. El valor total de los perjuicios en ningún caso excederá del 20 % del precio atribuido a la tierra y sus mejoras. En todo lo demás se regirá por la ley general de expropiaciones, debiéndose integrar el tribunal de tasaciones con un representante de cada una de las partes.

CAPÍTULO IX

De las colonias

Art. 20. — Las colonias serán organizadas acorde con los dictados de la economía social, técnica y ciencia agrícola modernas, en procura de mayores riquezas y una superior cultura.

Art. 21. — Las tierras adquiridas a los fines de la presente ley, serán subdivididas en lotes que constituyan unidades económicas de explotación.

Se entenderá por tal, el predio que por su superficie, calidad de la tierra, ubicación, mejoras y demás condiciones de explotación, racionalmente trabajado por una familia agraria que aporte la mayor parte del trabajo necesario, permita subvenir a sus necesidades y a una evolución favorable de la empresa.

Art. 22. — El banco introducirá en cada inmueble adquirido las mejoras generales y particulares que estime económicamente necesarias, para una racional explotación.

En cuanto a las mejoras particulares, el banco facilitará su asesoramiento técnico y créditos de fomento a largos plazos, asimilados preferentemente

al lapso de amortización de la tierra, para su implantación por cuenta de los productores.

Art. 23. — En cada colonia podrán hacerse reservas indispensables para calles, centro cívico, instalación de escuelas de orientación agraria, institutos de investigaciones, chacras experimentales y demostrativas, estaciones zootécnicas, cooperativas o cualquier otro fin de interés común. La investigación y experimentación agropecuaria se coordinará con el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación y con las universidades nacionales en cumplimiento del artículo 37 constitucional.

La construcción, entre otros, de los edificios generales que fueran convenientes para la administración de las colonias, así como los destinados a escuelas, salas de primeros auxilios, consultorios médicos y alojamiento del personal, podrá el banco ejecutarla directamente o con la colaboración de las reparticiones públicas pertinentes. A estos efectos, queda autorizado a donar, vender, arrendar o conceder en usufructo o comodato, las fracciones y construcciones necesarias.

Art. 24. — El banco promoverá la formación de colonias hortícolas, tamperas y granjeras, en las proximidades de centros poblados, atento a las previsiones determinadas en la presente ley.

Igualmente impulsará las producciones aludidas, organizando colonias extensivas y especializadas en tierras que alejadas de los mercados de consumo, acorten sus distancias por adecuados medios de comunicación.

Art. 25. — El banco propenderá a que en cada colonia se organicen cooperativas agropecuarias.

Si próxima a cada colonia existieran en funcionamiento cooperativas adecuadas para su servicio, auspiciará la organización de los productores en éstas.

Art. 26. — Si al efectuarse la subdivisión quedaran fracciones sobrantes que no constituyeran unidades económicas, o no fueran aconsejables sus anexiones a lotes vecinos, o que por mejoras costosas o inadecuadas no sea posible realizar una explotación eficiente o bien que sean convenientes para la instalación de cooperativas, industrias, comercios y otras actividades sociales y culturales, relacionadas con la colonia y su zona, queda el banco autorizado para venderlas en remate público, o en forma directa si lo aconsejaren conveniencias de orden social.

Art. 27. — Cuando en un inmueble adquirido se considere conveniente destinar parte del mismo a la creación o ampliación de un pueblo, se efectuará el trazado respectivo acorde con las disposiciones locales vigentes y con las previsiones de la técnica urbanística.

Art. 28. — El banco estimulará el parcelamiento de tierras suburbanas destinadas a radicar obreros que deseen explotar tierras con su trabajo personal y/o el de su familia en forma subsidiaria o substitutiva de su actividad habitual.

CAPÍTULO X

De la adjudicación de unidades económicas

Art. 29. — El banco adjudicará las unidades económicas a los productores que reúnan los siguientes requisitos básicos:

- a) Ser productor agropecuario de profesión o hijo de productor agropecuario que colabore o haya colaborado en tareas rurales. Se considera que

satisfacen este requisito los que acrediten haber actuado directamente en trabajos similares a la explotación proyectada, durante un período no menor de cinco años, y los técnicos agrícolas egresados de las universidades nacionales, de las escuelas de ganadería y agricultura de la Nación o de otros establecimientos de orientación agraria, que capaciten para el trabajo rural;

- b) Tener por lo menos 20 años de edad;
- c) Contar con buenos antecedentes personales;
- d) No ser propietario, como tampoco su cónyuge, de inmuebles que representen una unidad económica en los términos de esta ley;
- e) No padecer enfermedades crónicas que incapaciten para el trabajo rural.

Art. 30. — Dentro de los que reúnan las condiciones básicas anteriores, se preferirán a quienes:

- a) Tengan familia numerosa y apta para colaborar en el trabajo del predio, entendiéndose por familia: el cónyuge, ascendientes, descendientes y colaterales de segundo grado, que vivan y colaboren con el productor;
- b) Sean de nacionalidad argentina, o extranjeros con residencia mayor de cinco años;
- c) Estén domiciliados en la región;
- d) Fuesen egresados de las facultades de Agronomía y Veterinaria dependientes de las universidades nacionales, de escuelas de agricultura y ganadería de la Nación o provincias o de otros establecimientos de orientación agraria, que capaciten para el trabajo especializado, siempre que cultiven la tierra directamente, y aunque no reúnan las condiciones especificadas en los incisos anteriores. A tales efectos, en todas las colonias se destinará un porcentaje de predios;
- e) Cuenten con implementos agrarios, en relación con las exigencias de las actividades a encarar;
- f) Sean socios de cooperativas agropecuarias.

Art. 31. — Los arrendatarios, aparceros, medieros y toda otra forma de colonato, que hubieran trabajado personalmente el inmueble a adjudicar, por lo menos desde tres años agrícolas antes a la toma de posesión por parte del banco, tendrán derecho a que se les adjudiquen directamente las unidades agrarias en que se subdivide, siempre que reúnan los requisitos básicos señalados en el artículo 29.

Si el número de ocupantes fuese superior al de las unidades económicas estructuradas se realizará entre ellos un concurso de selección, aplicando las preferencias del artículo anterior. El excedente de ocupantes gozará de preferencia en primer grado para la adjudicación de tierras disponibles en otras colonias.

Los ocupantes que carezcan de capital de explotación y de eficiente aptitud de trabajo, podrán ser considerados en reservas especialmente habilitadas, donde se les capacitará con la ayuda económica, social y técnica del Estado para que puedan aspirar a la adjudicación de una unidad económica.

Art. 32. — Los arrendatarios o aparceros que hubiesen sido exceptuados de las prórrogas legales de sus contratos gozarán de privilegios en la adjudicación de unidades económicas. A los efectos de su selección tendrá en cuenta las causales que motivaron la excepción y subsidiariamente las preferencias del

artículo 30. Estos privilegios afectarán un porcentaje determinado de unidades económicas en cada colonia y cederán frente al de los ocupantes.

Art. 33. — Los contratos de arrendamientos o aparcerías rurales vigentes en el momento en que se adquiera un campo para los fines de esta ley quedarán automáticamente rescindidos, y se les otorgará preferencia en las adjudicaciones a los productores titulares de las explotaciones. Queda facultado el banco para trasladar a los ocupantes dentro de la colonia si la ubicación del predio que trabajen impide efectuar el fraccionamiento racional de la tierra.

En caso de traslados o desalojos el banco indemnizará las mejoras con sujeción a las normas de la ley de arrendamientos y aparcerías rurales, como así también los daños probados.

Art. 34. — La adjudicación de lotes se hará por concurso de selección, conforme a las previsiones de esta ley, en la forma que determine la reglamentación.

Art. 35. — El banco podrá reservar en tierras de colonización hasta el 25 % de las unidades económicas para adjudicarlas a inmigrantes campesinos que lleguen al país, en virtud de los tratados que se celebren de conformidad con lo dispuesto en la presente ley.

Art. 36. — El banco, a los fines del artículo anterior, colaborará con las autoridades nacionales pertinentes en la selección por aptitud profesional de corrientes migratorias rurales con destino a tierras de colonización, y dará preferencia en las adjudicaciones a los inmigrantes campesinos que introduzcan capitales y equipos mecanizados para la explotación adecuada del suelo agrícola.

Art. 37. — No se adjudicará más de una unidad económica a una misma persona ni a sus hijos o padres, a menos que éstos formen otra familia agricultora. No obstante, toda persona que contara con seis hijos de cualquier sexo o cuatro varones, mayores de catorce años, que vivan o colaboren con ella, podrá solicitar tantos predios adicionales como veces reúnan este requisito.

Art. 38. — Las tierras situadas dentro de zonas de frontera y de seguridad serán adjudicadas, previa conformidad de las autoridades competentes, atento a las disposiciones en vigor.

Art. 39. — Las adjudicaciones serán notificadas a los beneficiarios, quienes, dentro del plazo que fije el banco, deberán formalizar el respectivo contrato. De no hacerlo así, la adjudicación quedará sin efecto y el predio se adjudicará al solicitante que le siga en orden de mérito.

CAPÍTULO XI

De los derechos y obligaciones de los adjudicatarios

Art. 40. — Los adjudicatarios gozarán, mientras cumplan con las obligaciones a su cargo, de las ventajas y beneficios acordados por esta ley, y en especial:

- a) Posesión inmediata y pacífica del predio adjudicado;
- b) Préstamos de fomento para instalación, vivienda y habilitación;
- c) Reconocimiento del valor de las mejoras necesarias y útiles que hubieren introducido con aprobación del banco;

d) Asesoramiento técnico en cuanto a la explotación del predio, racionalización de los cultivos, industrialización y comercialización de sus frutos, entre otros;

e) Inembargabilidad de los elementos y animales de trabajo, maquinarias, muebles, enseres, ropas y útiles domésticos, rodados, semillas y otros bienes necesarios para la explotación del predio, dentro de los límites que se fijen reglamentariamente.

El beneficio de la inembargabilidad no rige en contra del vendedor en su reclamación del precio de las cosas declaradas inembargables, ni contra el banco;

f) Reducción del 5 % del precio de venta del predio por el nacimiento de cada hijo del adjudicatario, de acuerdo con el artículo 43, inciso c);

g) Ampliación de la adjudicación a razón de un lote adicional, conforme al artículo 37, quedando condicionado este derecho a la capacidad de trabajo del productor y su familia, como así a la productividad económica del predio adjudicado y a las disponibilidades de tierra. Cuando uno de los hijos constituya un nuevo núcleo familiar económicamente independiente, el predio podrá ser adjudicado a nombre del hijo o yerno del adjudicatario que reúna las condiciones estatuidas en el artículo 29.

Si no se dispone en la colonia de reservas a tal fin, se ofrecerá traslado a otra de similares posibilidades de explotación;

h) Extensión del título de dominio del predio adjudicado, en las condiciones y oportunidad determinadas en esta ley.

Art. 41. — Serán obligaciones de los adjudicatarios:

a) Residir en el predio con su familia y trabajarlo personalmente, a cuyo efecto deberán construir la vivienda rural, en la forma que estipula esta ley, siempre que el banco no procediera a su directa construcción;

b) Efectuar los pagos correspondientes en los plazos y formas establecidas en el capítulo XII;

c) Realizar la explotación con sujeción a leyes y reglamentos agrícolas y ganaderos, cumpliendo con las normas de explotación que establezca el banco, a fin de que especialmente en el cultivo y manejo del suelo sean aplicados los procedimientos científicos;

d) Conservar en buen estado las mejoras existentes en el lote y requerir la autorización pertinente para introducir otras, siendo responsables de todo daño o deterioro ocasionados por su culpa o negligencia;

e) Acatar las disposiciones y orientaciones que se impriman con referencia a trabajos comunes de bien general para las colonias, especialmente con vistas a la conservación de caminos;

f) Plantar dentro de los cinco primeros años a partir de la posesión del predio y cuidar permanentemente, dos árboles forestales por hectárea, hasta 300 como máximo, si no los hubiere al ocupar la tierra, sin derecho a retribución alguna;

g) No arrendar, ni ceder sus derechos sobre el lote, sin consentimiento previo del banco;

h) Participar en el movimiento cooperativo de productores agropecuarios.

CAPÍTULO XII

De la venta y forma de pago de las unidades económicas

Art. 42. — El precio de venta de las unidades económicas, sus cuotas de amortización y tasa de interés, observarán directa relación con el real valor de productividad, a fin de que en armonía con el tipo de explotación prevista, el productor pueda atender la deuda con normalidad y mediante su trabajo habitual.

Art. 43. — El precio de venta de las unidades económicas será abonado:

a) Con un servicio anual de hasta el 5 %, incluyendo amortización e interés, a determinarse en función de las características de productividad de cada colonia;

b) Con amortizaciones extraordinarias que podrán efectuarse en cualquier época;

c) Con la reducción de un 5 % del valor inicial del lote, por cada hijo del adjudicatario que naciera con posterioridad a la toma de posesión del predio.

Art. 44. — Los servicios se abonarán en cuotas semestrales o anuales, según se estimare más conveniente. El servicio inicial y la escala total de pagos se relacionarán directamente con el proceso productivo de las unidades económicas adjudicadas. Los vencimientos se fijarán en las épocas de mayores ingresos.

Art. 45. — Al establecerse la escala total de pagos prevista en el artículo anterior, se tendrá en cuenta que los adjudicatarios deberán abonar, además, en los casos pertinentes: impuestos, canon de riego, cuotas de préstamos otorgados, porcentaje por gastos de administración y por construcción o conservación de mejoras generales.

Art. 46. — El banco queda facultado para suspender los pagos de las sumas que deban abonar los adjudicatarios, ante pérdidas total o parcial de cosechas, en el porcentaje y condiciones que establezca la reglamentación, debidas a caso fortuito o de fuerza mayor que implique riesgos inasegurables, excepto si las pérdidas resultaran compensadas con el producido de las cosechas precedentes. Los servicios atrasados se correrán al vencimiento siguiente, sin acumularse y sin interés punitivo.

Art. 47. — Excepto en los casos del artículo anterior, toda deuda de plazo vencido devengará un interés del 6 % anual, a favor del banco, salvo disposición expresa en contrario.

CAPÍTULO XIII

Del fondo de ahorro

Art. 48. — Cuando resultados favorables de la explotación lo permitiera, el banco podrá imponer a cada adjudicatario la entrega en depósito de una suma variable para constituir el fondo de ahorro, que se hará efectiva con el pago de los servicios de amortización e interés.

Art. 49. — El banco fijará, anualmente y en cada región, el monto de las sumas que los adjudicatarios

deberán ingresar en el fondo de ahorro, exonerándolos de dicha obligación según los resultados económicos de la explotación del predio.

Art. 50. — Las sumas que ingresen al fondo de ahorro, se depositarán en el banco, a nombre de cada adjudicatario, y devengarán el interés correspondiente a los depósitos de caja de ahorro.

Art. 51. — El fondo de ahorro se destinará para:

- a) Servir como reserva ante las contingencias agrícolas;
- b) Solventar gastos de asistencia médica del productor y familiares a su cargo;
- c) Acelerar la amortización del saldo de precio del lote, en la forma que el banco determine.

CAPÍTULO XIV

De la vivienda rural

Art. 52. — El banco asegurará a cada adjudicatario una vivienda adecuada, higiénica, confortable y económica. Para ello, procederá a su directa construcción u otorgará préstamos de edificación hasta por el valor total de la obra, a amortizarse en igual forma que el precio de la tierra.

Art. 53. — Para hacer uso del préstamo de edificación, el adjudicatario ajustará al asesoramiento técnico y gratuito del banco, que tendrá en cuenta:

- a) Las previsiones del crecimiento familiar;
- b) Las características de construcción según zonas rurales;
- c) La necesidad de facilitar la construcción por los interesados y por obreros no especializados;
- d) El empleo de los materiales locales más eficientes y económicos;
- e) Las normas generales de seguridad, higiene y comodidad necesarias para el bienestar y la salud.

Igualmente, el banco proporcionará, sin cargo, la inspección de las obras.

CAPÍTULO XV

De la conclusión de las adjudicaciones

Art. 54. — Las adjudicaciones podrán concluir:

- a) Por rescisión de mutuo acuerdo entre el banco y el adjudicatario;
- b) Por caducidad dispuesta por el banco por incumplimiento de cualquiera de las disposiciones de esta ley, su reglamentación o contrato de adjudicación;
- c) Por fallecimiento del adjudicatario.

Art. 55. — En caso de rescisión, el banco devolverá al adjudicatario las sumas amortizadas y el saldo de su fondo de ahorro e indemnizará las mejoras económicamente necesarias que hubiere introducido con su aprobación, previa deducción de todo monto que adeudare.

Art. 56. — En los supuestos de caducidad, el adjudicatario sólo tendrá derecho al reembolso del valor de las mejoras económicamente necesarias que hubiere introducido con aprobación del banco y de las sumas acumuladas en concepto de fondo de ahorro, previa deducción de todo monto que adeudare y del equivalente del 3,25 % sobre el precio de venta de la unidad económica en concepto de arrendamiento anual.

Art. 57. — El justiprecio de las mejoras será fijado por el banco con audiencia del interesado, teniéndose en cuenta el tiempo de uso, su vida útil, estado de conservación y valor de reposición.

Art. 58. — En caso de fallecimiento del adjudicatario el banco podrá según las circunstancias:

- a) Continuar la adjudicación con los herederos del causante, siempre que entre ellos exista por lo menos uno apto en las condiciones de esta ley, para hacerse cargo de la explotación del predio. En este caso, se declarará transmitida la adjudicación, a nombre de la sucesión e instituyendo a uno de los herederos para que la represente en sus relaciones con el banco;
- b) Rescindir la adjudicación, si no hubiere heredero apto o ninguno quisiera continuar con la explotación del predio. En este supuesto, el banco depositará a nombre de la sucesión respectiva, el importe de las devoluciones e indemnizaciones que correspondieran, según las normas de esta ley.

CAPÍTULO XVI

Del título de propiedad y sus caracteres

Art. 59. — El otorgamiento del título, acreditando la propiedad del predio a favor del adjudicatario, tendrá lugar cuando concurren las siguientes condiciones:

- a) Cumplimiento satisfactorio de todas las obligaciones a cargo del adjudicatario;
- b) Transcurso del término de 10 años, desde la posesión del lote.

Art. 60. — Se declara inembargable e inejecutable el dominio de los predios de colonización, y las medidas precautorias que se tomen contra el adjudicatario, no podrán afectar el normal desarrollo de la explotación del predio.

Art. 61. — En todos los títulos de propiedad que otorgue el banco, deberán insertarse las siguientes cláusulas especiales prohibitivas de:

- a) Subdividir la unidad económica otorgada en propiedad, la que será indivisible en el tiempo y en el espacio. No obstante, el banco podrá autorizar la división cuando, a su juicio, fundadas razones de orden técnico lo aconsejaren;
- b) Constituir derecho real alguno sobre la parcela adjudicada, sin consentimiento del banco;
- c) Transmitir o enajenar el dominio a terceros, sin autorización previa del banco, quien la acordará cuando éstos reunieren los requisitos exigidos por la presente ley.

La autorización se considerará tácitamente otorgada si no se la denegase expresamente dentro de 90 días a contar de la fecha de presentación de la respectiva solicitud.

Art. 62. — Las transmisiones de dominio contrarias a las disposiciones de esta ley estarán afectadas de nulidad absoluta. En las escrituras traslativas de dominio deberá dejarse constancia de la autorización expresa o tácita para transferir.

El escribano que autorice una escritura en la que se omita esta constancia incurrirá en falta cuya sanción y aplicación será conforme a la ley 12.990.

Art. 63. — Otorgado el título de dominio, el propietario deberá mantener el predio en grado racional de productividad. Esta obligación regirá para los su-

cesivos adquirentes sin término de prescripción. En su defecto, las tierras podrán ser expropiadas por el banco, con aprobación del Poder Ejecutivo, a cuyo fin, se las declara de utilidad pública.

Art. 64. — En el supuesto de transmisión de la propiedad por fallecimiento, no se admitirá la subdivisión de las unidades económicas y el banco designará en defecto de acuerdo, el heredero que continuará como titular del predio. El banco estimará los valores del caso a los fines de determinar las alícuotas de los herederos y acordará créditos especiales para que el heredero adjudicatario desinterese a los excluidos. Los jueces no aprobarán tasación, partición, ni adjudicación de bienes comprendidos en esta ley, ni los escribanos autorizarán escrituras sin observar estas prescripciones.

CAPÍTULO XVII

Del régimen financiero

Art. 65. — Ingresarán al patrimonio del banco, en una cuenta especial que se denominará «Fondo de colonización»:

- a) Los bienes adquiridos en función de la ley 12.636, de las leyes especiales de colonización a cargo del banco, y los que se adquieran por la presente ley;
- b) Los bienes legados o donados que sean aceptados por el banco;
- c) El producido de los arrendamientos y pastajes de las tierras adquiridas, mientras no fuesen adjudicadas;
- d) Los reembolsos que hagan los adjudicatarios por los préstamos para mejoras, acordados de acuerdo con esta ley;
- e) El producido de la venta de los predios colonizados, de los materiales sobrantes y de las cosechas de las tierras adquiridas;
- f) Los intereses y comisiones que deban satisfacer los adjudicatarios;
- g) Todo otro ingreso no previsto especialmente en la presente enumeración.

Art. 66. — Para el cumplimiento de esta ley, el banco utilizará los recursos que fije el Ministerio de Finanzas.

Art. 67. — Cuando para la incorporación de determinadas zonas a la riqueza nacional sean imprescindibles inversiones extraordinarias de fomento, éstas serán realizadas por el Estado en el porcentaje que permita al auténtico productor recibir la tierra en tal grado económica que pueda abonarla con el producido de su trabajo normal en los plazos y condiciones estipulados en la presente ley.

En dichos casos excepcionales, el banco someterá al Poder Ejecutivo, para su debida aprobación, el pertinente plan integral de labor.

CAPÍTULO XVIII

De la colonización con las provincias y territorios nacionales

Art. 68. — Las provincias y territorios nacionales que se acojan al régimen de la presente ley gozarán de la participación financiera del banco para sus obras de colonización.

Art. 69. — El acogimiento al régimen de la presente ley, comporta correlativamente las siguientes obligaciones:

- a) Coordinar con el banco para su aprobación, los planes de colonización que se sujetarán a las normas de esta ley;
- b) Establecer con el banco, la unidad de concepción necesaria para unificar la aplicación de los preceptos constitucionales en cuanto a la extinción de latifundios;
- c) Conceder toda exención impositiva al banco, en función de la presente ley, por los actos que realice, contratos que celebre, sellado en actuaciones judiciales o administrativas, inscripciones y actos complementarios;
- d) Conceder la exoneración de impuestos territoriales por los inmuebles que posea y adquiera el banco a los fines de esta ley, mientras permanezcan en su poder;
- e) Disponer la exoneración de impuestos territoriales por el término de cinco años a los adjudicatarios de lotes bajo el régimen de las presentes normas, a partir del otorgamiento de la posesión; y a todos los agricultores que con posterioridad a la ley respectiva, adquieran tierras incultas en extensión no mayor de cien hectáreas con destino a explotaciones hortícolas, granjeras o tamberas, y que vivan en ellas con su familia, trabajándolas directamente, por cuenta propia;
- f) Facilitar la instalación de justicia de paz, policía y escuelas en las colonias, si no las hubiere en la zona o no fueren fácilmente accesibles;
- g) Colaborar en la construcción y conservación de caminos.

CAPÍTULO XIX

De la colonización privada

Art. 70. — Los propietarios que deseen fraccionar sus campos para la venta en unidades económicas a sus ocupantes, con asistencia del crédito oficial, sujetos a la ley de arrendamientos y aparcerías rurales, deberán someter al banco, los estudios técnicos y económicos respectivos, suscritos por un profesional ingeniero agrónomo.

Las operaciones que se realicen conforme a este artículo, quedarán exentas de todo impuesto de sellado e inscripción.

Art. 71. — De conceder el banco los créditos previstos en el artículo anterior, tanto las tierras a colonizar como los productores adquirentes, quedarán incluidos automáticamente en el régimen de la presente ley.

Art. 72. — El banco auspiciará la colonización privada en campos libres de ocupantes, adquiriendo las tierras conforme a las prescripciones de esta ley e incorporándolas a su régimen.

Art. 73. — Los particulares o entidades privadas que colonizaren por su cuenta, no podrán adjudicar más del 25 % de las unidades económicas en que fraccionen sus campos, a extranjeros.

CAPÍTULO XX

De las disposiciones generales

Art. 74. — El banco procederá a instituir en las colonias, consejos locales agrarios presididos por su gerente de zona o de sucursal e integrados por el administrador técnico de aquéllas, los mejores productores elegidos entre los mismos adjudicatarios, el agrónomo regional y el presidente de una cooperativa de la zona.

Art. 75. — Los consejos locales agrarios tendrán por objeto coadyuvar a la acción colonizadora, en procura de la elevación del nivel de vida social, material y cultural de la población rural de las colonias, consolidando el hogar campesino, estimulando la cordial armonía entre todos los participantes del trabajo rural —productores y obreros—, bases esenciales de la economía agraria, a fin de lograr una máxima y mejor producción.

Art. 76. — El banco está exento de todo impuesto nacional en las operaciones que realice conforme a las previsiones de esta ley, quedando libre de derechos de aduana, las maquinarias, equipos, rodados, semillas, abonos, materiales y demás elementos necesarios para la colonización. A estos fines, el Banco Central de la República Argentina acordará preferencia al otorgamiento de las divisas necesarias.

Art. 77. — Los adjudicatarios de lotes quedan exonerados del pago de todo impuesto nacional que grave la propiedad raíz por el término de cinco años a contar desde la fecha en que se les otorgue la posesión.

Art. 78. — El banco gestionará de las municipalidades la exoneración de gravámenes por los inmuebles, construcciones, rodados, semovientes, contratos o actuaciones que realice, en función de la presente ley, mientras permanezcan aquéllos en su poder. Asimismo solicitará que la exención alcance la construcción o ampliación de la vivienda rural que realicen los adjudicatarios.

Art. 79. — Facúltase al banco a proceder sin forma alguna de juicio, al embargo de hasta el 33 % de la renta bruta de cada predio para aplicarla a los pagos que injustificadamente se le adeudaren.

Art. 80. — El banco queda autorizado a recurrir a la vía de apremio para obtener el cobro de sus créditos.

Art. 81. — El producido de la venta y arrendamiento con opción a compra de los inmuebles adquiridos en función de la ley 12.636, y el reembolso de los préstamos autorizados en virtud de la misma, quedarán afectados a la amortización de las sumas anticipadas de acuerdo con el decreto 6.341/48.

Asimismo, la recaudación por concepto de los servicios financieros que abonen los adquirentes de predios de las leyes 12.355 y 13.592 y decreto 18.341/49, se depositarán con destino a cancelar el precio de adquisición de los mismos, y si hubiere remanente, quedará como recurso del banco, con destino al «Fondo de Colonización».

Art. 82. — Declárase de orden público las prescripciones de esta ley, quedando derogadas las leyes 12.636; 12.355 en sus artículos 2º, 4º y 9º; el régimen de fomento especial de colonización del banco y demás normas legales que se opongan a la presente.

Las adjudicaciones sujetas a las leyes y normas que se derogan, continuarán rigiéndose por éstas, con excepción de las disposiciones de los artículos 61, 62, y 63, que regirán para todos aquellos adjudicatarios que no hubieren recibido del banco el título de propiedad respectivo, a la fecha de promulgación de la presente ley.

Art. 83. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Miguel Revestido. — Carlos A. Hogan.

Sr. Presidente (Benítez). — En consideración en general.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Tommasi. — La Honorable Cámara considera el proyecto de ley y mensaje del Poder Ejecutivo venido en revisión del Honorable Senado sobre ley de colonización.

Es evidente que este proyecto es de trascendental importancia para nuestro país, que tiene una vasta extensión de territorio y una población reducida en cuanto a las posibilidades de explotación de nuestra riqueza.

La fijación de una política agraria por el Poder Ejecutivo y las orientaciones dadas por el presidente de la Nación han sido perfectamente definidas desde el comienzo del movimiento revolucionario peronista. El señor presidente ha dicho desde un principio que la tierra no debe ser bien de renta sino un bien de trabajo.

Sobre esa enunciación se ha elaborado el capítulo de Acción Agraria del segundo Plan Quinquenal, donde se determinan las medidas que habrán de tomarse a los efectos de la organización y racionalización de la producción agraria. Ello coincide doctrinariamente con los conceptos de la Constitución Justicialista, que atribuye a la propiedad una función social.

Dentro del régimen de la propiedad, la función social tiene caracteres propios en lo que se refiere a la propiedad rural, y se pueden distinguir en ella dos aspectos. Uno es el aspecto individual de la propiedad en sí, en que el hombre de campo aspira al desarrollo de su personalidad, a la formación de una familia, a la satisfacción de las necesidades de esa familia e inclusive al mejoramiento propio del grupo familiar.

Encontramos también el aspecto de la función social que debe llenar esa propiedad en beneficio de la sociedad para obtener con el trabajo, la producción de bienes de consumo necesarios para la comunidad. Esta función social está definida en forma precisa por nuestra doctrina. Ha dicho el señor presidente de la Nación que la economía no debe estar al servicio del capital, sino el capital al servicio de la economía. Vale decir que estamos dentro de una economía social, y es con ese concepto que la función social de la propiedad rural cumple sus fines dentro de la economía social, en concordancia con la Doctrina Nacional justicialista. (¡Muy bien! ¡Muy bien!)

El proyecto que consideramos enuncia en su capítulo I estas disposiciones de carácter general, y en su capítulo II se refiere al conjunto de las funciones a desarrollar, y a los organismos de aplicación. El Banco de la Nación Argentina, por intermedio de la gerencia de colonización,

es quien tendrá a su cargo la ejecución y el cumplimiento de esta ley. Además, se ha creado, y está ya en funciones, un consejo coordinador. Ese consejo coordinador que se creó por el decreto 7.029/51 estará constituido por representantes de los ministerios que tengan, de acuerdo con las disposiciones de la ley respectiva, atinencia con el problema agropecuario del país. También —y ésta es una novedad en la constitución de ese consejo asesor— está integrado por productores, por auténticos productores que tendrán su palabra en la elaboración y ejecución de todos los planes de colonización, en virtud de la ley que estamos considerando.

Se da así, de acuerdo con las normas de organización que ha fijado el señor presidente de la Nación, ingerencia directa a los interesados en la solución de tan importante y vital problema nacional.

He de hacer, en apretada síntesis, de acuerdo al tiempo de que disponemos, una breve reseña de los capítulos fundamentales del proyecto. Desde ya, la comisión se pone a disposición de la Honorable Cámara para las aclaraciones e interpretaciones que entendiera oportunas.

El capítulo III se refiere a las funciones y deberes de los organismos de aplicación y asesoramiento. Dentro de esta enunciación de tipo general, se establece en forma concreta y precisa, a través de varios incisos del artículo 3º, cuáles serán las funciones y los deberes de los organismos correspondientes. En forma detallada se especifican todas las funciones y obligaciones que deberán cumplir los organismos que se crean por este instrumento legal.

El inciso n) del artículo 3º dice que el Banco de la Nación, a los fines de esta ley, tendrá que «celebrar, con aprobación del Poder Ejecutivo, convenios con grupos de familias de agricultores residentes en el extranjero, para radicarlos en colonias mediante contratos sujetos a las estipulaciones de esta ley». Agrega el mismo inciso que el banco «podrá establecer relaciones con instituciones internacionales, de las que sea signatario el país, a fin de convenir la mejor manera de radicar en zonas de colonización a productores rurales inmigrantes, con intervención de las autoridades nacionales pertinentes».

El artículo 3º está vinculado al 36, que establece que el banco «colaborará con las autoridades nacionales pertinentes en la selección o aptitud profesional de corrientes migratorias rurales con destino a tierras de colonización, y dará preferencia en las adjudicaciones a los inmigrantes campesinos que introduzcan capitales y equipos mecanizados para la explotación adecuada del suelo agrícola».

En la reciente Conferencia Internacional de Río de Janeiro, el señor ministro de Comercio, que representó al gobierno argentino, presentó

una ponencia sobre migraciones, estableciendo que en la programación de referencia, la colonización constituye uno de los factores fundamentales para el desarrollo agrícola de algunos países de Latinoamérica, lo cual implica la necesidad de promover, por parte de los organismos internacionales especializados, migraciones de familias de agricultores, así como la dotación a las mismas de elementos de trabajo que aseguren la continuidad de sus tareas y su más rápida y eficiente incorporación a la actividad productora.

La Conferencia de Río de Janeiro aprobó por unanimidad la ponencia argentina, que recomienda a los países que necesiten inmigración para su desarrollo, que adopten medidas para intensificar especialmente la de personal técnico en la agricultura y en las industrias, y que simplifiquen en lo posible los trámites administrativos para la admisión de esos inmigrantes.

Además, se ha solicitado a la secretaría general de la Organización de los Estados Americanos que se dirija al Comité Intergubernamental de Migraciones Europeas, a fin de señalar la necesidad del estudio en colaboración con otros organismos especializados, en consulta con los países interesados en la orientación de las corrientes migratorias dentro de los programas integrales de colonización, incluyendo la previsión de inversiones de bienes de capital recaudados por los mismos y la financiación correspondiente.

Esta ponencia del gobierno argentino, que fué aprobada por unanimidad, como he dicho, en la Conferencia de Río de Janeiro, también ha sido presentada a la conferencia que se celebró en Ginebra sobre migraciones.

El proyecto de ley que estamos considerando incluye concretamente como lo acabo de señalar, la solución de este aspecto. Vale decir que el gobierno argentino no solamente ha formulado una ponencia de este tipo en la conferencia internacional sino que la concreta en esta ley a fin de darle inmediato cumplimiento, tal cual acostumbra el movimiento peronista, no haciendo proposiciones teóricas en el orden nacional o internacional sino cumpliéndolas efectivamente en la práctica.

El capítulo IV del proyecto de ley que consideramos se refiere a los planes de colonización. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 5º de la ley, estos planes se realizarán teniendo en cuenta un ordenamiento racional de la tierra agraria adecuado a las distintas zonas del país, considerando el consumo regional y demanda de los mercados nacionales e internacionales, el transporte y la ecología zonal.

Es evidente que éstos son los aspectos económicos fundamentales en la elaboración de los planes de colonización, porque todo plan de esta índole debe tender no solamente a la

distribución de tierra a los productores, sino a la organización racional de la producción, a fin de que esa colonización no actúe en forma antieconómica, vale decir que cada zona, de acuerdo a sus características agroecológicas deberá dedicarse a un tipo de producción, conforme a las posibilidades de la tierra en sí, pero siempre atendiendo las necesidades del consumo interno —mercado nacional— y del mercado internacional, produciendo determinados saldos exportables para incorporar su producido a la riqueza nacional.

Ello comprende un conjunto armonioso de circunstancias económicas que se han de traducir no sólo en una producción importante de esas colonias sino también una producción económica, al tener en cuenta los transportes, las posibilidades de los centros de consumo y todos los otros factores que deben conjugarse económicamente.

En cuanto a su orientación, los planes de colonización deberán prever las zonas de riego, las tierras de propiedad fiscal, los latifundios que no cumplan con su función social y las zonas de erosión o erosionables, ya que el Estado, a través de esta ley y de los organismos que por ella se crean, debe cuidar celosamente de la tierra, que es el patrimonio nacional, no sólo de las generaciones presentes, sino de las futuras. En cuanto a sus finalidades, deberá tender a la incorporación de nuevas tierras para la producción, para la transformación de los productores, arrendatarios o aparceros en propietarios, radicándolos definitivamente en la tierra que laboran; a una explotación científica bien orientada, a elevar el nivel de vida y la seguridad social, a promover la expansión de los centros poblados y también a facilitar el acceso de los hijos argentinos de los actuales productores a la actividad rural. Esto es importantísimo, ya que con ello se tiende no sólo a la radicación de la familia, sino a proyectar esa familia, que tiene conciencia agraria, a través de las nuevas generaciones de hijos de productores mediante el fácil acceso de éstos a la tierra, cuando se independicen de la familia a que pertenecen. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*)

No me voy a extender en este aspecto, porque él va a ser considerado por otro miembro de la comisión.

El capítulo V se refiere a las tierras colonizables. La ley establece cuáles son las tierras colonizables, e incluye en la enunciación a las tierras fiscales, las del dominio privado que no cumplan con su función social, las que estén en poder de los ministerios, de los bancos del sistema oficial o cualesquiera de las reparticiones públicas nacionales, las del dominio privado o de las provincias o municipalidades que sean ofrecidas para incorporarlas al régimen de la ley, y las tierras de recuperación, es decir, las de erosión o erosionables.

También establece las condiciones para que un inmueble sea considerado apto para la colonización. Considera en tal caso a aquel cuyas características intrínsecas y extrínsecas puedan aconsejar su fraccionamiento mediante el análisis conjunto de los aspectos económicos y sociales que la técnica agrícola y la vida rural modernas señalen.

Todos los aspectos referentes a las tierras aptas para colonización están, pues, perfectamente definidos en la ley.

El capítulo VI encara un aspecto interesante: la valuación de las tierras colonizables. Así, el artículo 9º establece que el precio de la tierra tendrá en cuenta los rendimientos físicos de los últimos diez años y será fijado conforme al valor productivo promedio del último quinquenio. Vale decir, que el avalúo de las tierras a colonizar debe fundarse en el principio del rendimiento económico y de la productividad de las tierras. Es, tal vez, una forma más equitativa de apreciación y más justa. Además, con alto sentido de equidad, esos valores serán vinculados al avalúo fiscal y al valor venal, apreciados en el mismo lapso que establece la ley.

Quiero destacar especialmente que es muy importante el procedimiento elegido. Si bien cuando se emplea la licitación privada o el remate público no surgen mayores inconvenientes, cuando el organismo que intervendrá en la aplicación de la ley, el Banco de la Nación, se vea precisado a solicitar del Congreso de la Nación, por intermedio del Poder Ejecutivo, la expropiación, habrán de tomarse muy en cuenta estos aspectos que acabo de señalar, a los efectos de la determinación de los valores; o sea que el Tribunal de Tasaciones, que crea la ley general de expropiaciones, tendrá que ajustarse en cierta manera a estos índices de relación y considerar fundamentalmente el aspecto de la productividad de las tierras expropiadas, y, en segundo lugar, un índice de relación o de vinculación de valores, sin apreciar estrictamente, como en algunos casos ha ocurrido, los valores venales, ya que esos valores venales muchas veces no están ajustados a la realidad. Toda vez que el valor de la tierra, a los efectos de la producción agropecuaria, no esté vinculado directa y estrictamente a su rendimiento económico, esos valores no son justos ni pueden ser aceptados de ninguna manera, porque trastornarían todo el sistema de la producción nacional.

También se establece en el proyecto la forma de apreciación de las mejoras. Las mejoras cuando son necesarias —esto es, aquellas mejoras que hacen a la explotación en sí— son apreciadas dentro del valor de los inmuebles que habrán de ser colonizados; pero cuando esas mejoras no tengan el carácter de necesarias, sino un carácter suntuario, y que en algunos casos —como lo dice el artículo 10— puedan tener

un valor superior al 30 % de la tierra en sí, solamente podrán ser adquiridas con autorización expresa del Poder Ejecutivo, que determinará la necesidad de su adquisición por razones sociales y económicas. Esto es muy importante porque, en caso contrario, la adquisición de tierras con mejoras excesivamente valiosas colocaría al productor agrario, al que se le ha de entregar una parcela de esa tierra, en situación de hacer frente a un valor exagerado, y el rendimiento de la tierra no sería nunca proporcionado a la amortización y al interés que tuviera que efectuar; vale decir, que desde el principio ese productor recibiría una tierra que lo esclavizaría a través de los años en que tuviera que cultivarla. En la forma que se establece en este proyecto, se pueden obviar perfectamente todos esos inconvenientes.

El capítulo VII se refiere a las formas de adquirir la tierra para colonizar, y dice que se hará por convenio, por licitación o en remate público. Son tal vez las formas más prácticas, ya que en todo caso de ofrecimiento de tierras o de llamado a licitación para adquirir tierras colonizables, el Banco de la Nación, que tendrá a su cargo la aplicación de la ley, consultará antes que nada a los asesores técnicos, que determinarán la aptitud agrológica de esas tierras y sus posibilidades de producción, y además podrá establecer con el asesoramiento del consejo que crea la ley, en el cual intervienen no sólo los ministerios que tienen vinculación con este problema, sino también directamente los representantes de los productores, la apreciación del valor de los mismos.

Conforme al artículo 12 del proyecto, no podrá considerarse la adquisición de inmuebles en tales condiciones sin que se haya efectuado una valuación previa, mediante inspecciones y tasaciones realizadas por no menos de dos ingenieros agrónomos, con sujeción a lo dispuesto en la ley.

Cuando se trate de tierras pertenecientes a reparticiones públicas, se establece una forma similar de apreciación de valores, que podrá ser de acuerdo al valor que tenga fijado en el patrimonio de la repartición a que pertenezcan, o bien al conjunto de normas establecidas para las otras adquisiciones.

Las provincias, territorios y municipalidades podrán convenir la venta de inmuebles en las mismas condiciones.

El capítulo VIII se refiere al régimen de las expropiaciones. El artículo 15 establece que «en caso de que no se pudiera adquirir tierras suficientes por los medios indicados en el artículo 11 —es decir, del capítulo que acabo de comentar— el Poder Ejecutivo solicitará la autorización del Congreso Nacional para expropiar las que sean necesarias incluir en los planes de colonización, siempre que no fuera objeto de explotación agraria racional».

Este artículo es una consecuencia directa de la orientación en materia de política agraria impresa por el movimiento peronista y enunciada por el señor presidente de la Nación en su discurso pronunciado el año pasado en el teatro Colón.

Dijo el señor presidente de la Nación, refiriéndose al problema de la tierra, que nuestro país afrontaba la reforma agraria con un concepto propio, vale decir que no nos íbamos a copiar de las reformas agrarias que en otros países se hicieron con violencia y con sangre, ni tampoco íbamos a ir al otro extremo; que la reforma agraria se haría de acuerdo con las disposiciones constitucionales y el respeto mutuo en la convivencia nacional.

La Constitución Justicialista de 1949 establece una función social para la propiedad. Dentro de ese enunciado establecido en el artículo 38 de la mencionada Constitución, es que deberá hacerse la reforma agraria. «En ningún momento —dijo el presidente de la Nación— el colono adquirirá u obtendrá tierras colonizables por medio del despojo. Se respetarán siempre los derechos del propietario.» (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Esto ha determinado al Poder Ejecutivo a incluir este artículo, al que también deseo vincular con una expresión concreta del presidente de la Nación en cuanto define el concepto de latifundio. Ha dicho el general Perón que el de latifundio no es un concepto de extensión sino que debe referirse a la productividad de las tierras. Esa es, precisamente, la esencia del concepto de función social de la propiedad. Puede existir una propiedad rural de gran extensión que constituya una explotación racional, y en este caso no es conveniente destruirla dividiéndola en pequeñas explotaciones que, posiblemente, no podrán dar, en su conjunto, un rendimiento similar a la primera.

Ahora bien; siempre con relación al concepto de función social de la propiedad, el artículo 16 del proyecto dispone que la explotación agraria racional de un inmueble próximo a centros urbanos de gran consumo, se apreciará por el tipo de actividad a que se dedique. Esto es así, con el objeto de incrementar la producción de alimentos necesarios para esos grandes centros de consumo. Por eso dice el artículo que se entenderá que un inmueble no es objeto de explotación agraria racional cuando no dedique hasta un 30 por ciento de su superficie apta a producción hortícola, granjera o tampera.

Pero la ley no se limita a imponer esta obligación a los propietarios de inmuebles próximos a los centros urbanos de consumo. A los efectos de que dichos propietarios puedan ajustarse a estas disposiciones, se les acuerda apoyo crediticio, vale decir, que no impone ningún sacrificio y da la posibilidad de realizar esa producción diversificada.

También se podrán expropiar tierras cuando sea necesario para la expansión de los centros urbanos. En nuestro país existen muchos casos en que grandes inmuebles impiden el desarrollo de los centros urbanos.

Quedan así determinadas las causales de expropiación que establece la ley. En cuanto al precio de las expropiaciones, se vincula con la aplicación del capítulo VI del proyecto, que se refiere a la valuación de las tierras colonizables y sus mejoras. En los casos de expropiaciones, el tribunal de tasaciones debe incluir un representante de las partes interesadas. Ese es el organismo que tiene a su cargo el cumplimiento de esta ley.

El capítulo IX se refiere a las colonias. Dice que su organización se hará de acuerdo con los dictados de la economía social, técnica y ciencia agrícola modernas. Esto es muy importante, pues toda colonia deberá estar orientada desde un principio con este concepto integral. Luego se determina que las tierras que se adjudiquen a los respectivos colonos habrán de constituir unidades económicas de explotación.

Este concepto de unidades económicas, que ha introducido el movimiento peronista en el régimen de las tierras colonizables, es importantísimo, ya que es la única forma de radicar familias agrarias permanentemente y hacerlas progresar. Los inconvenientes de la colonización en algunos países han obedecido al minifundio o a la subdivisión en parcelas que no constituyan unidades económicas. Esos colonos, atados a pequeñas parcelas de tierra, no han podido progresar nunca, y todos sus esfuerzos y sacrificios resultaron inútiles.

La ley define el concepto de unidad económica diciendo que se entiende por tal el predio que por su superficie, calidad de la tierra, ubicación, mejoras y demás condiciones de explotación, racionalmente trabajado por una familia agraria que aporte la mayor parte del trabajo necesario, permita subvenir a sus necesidades y a una evolución favorable de la empresa.

Este concepto económicosocial de la ley es una consecuencia de la política agraria enunciada por el señor presidente de la Nación, quien dijo en el discurso pronunciado en el teatro Colón, que aspiramos a crear, no un proletariado campesino, sino agricultores felices que puedan hacerse inclusive de un patrimonio para sí y sus familias. Ese es el sentido de propiedad dentro del concepto de la ley y de la doctrina peronista. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*)

Preocupa también el arraigo del campesino en el agro, el cual no depende exclusivamente del factor económico. Aspiramos a dar al hombre de campo y su familia un medio social y cultural que permita su desenvolvimiento. Anhelamos la unidad de la familia, pues el hombre

de campo no tiene un núcleo familiar. Dentro de la doctrina peronista aspiramos a brindarle esa unidad familiar; para que viva con su familia será necesario crear medios razonables de vida. También al hombre rural le agrada vivir bien, en una casa confortable y no en un rancho, que todavía existen. Necesita escuelas para sus hijos, asistencia médicosocial, elementos culturales. En caso contrario, jamás alcanzaremos la estabilización de la familia rural. Este es uno de los aspectos que tal vez interese más al peronismo en estos momentos. Es necesario estimular el desarrollo y progreso de la economía argentina. Tanto el colono como el obrero rural deben encontrarse en las mismas condiciones de vida. Debemos ir preparando a esa familia de obreros rurales para entregarle las tierras que todos aspiran tener para trabajar, y capacitarlos y organizarlos a ese efecto. Si entregamos la tierra a gente que no se encuentra capacitada para ese desarrollo de tareas rurales dentro de la técnica moderna de la mecanización del agro, el éxito sería imposible. Ese es el concepto doctrinario de nuestro movimiento en cuanto a la organización de la colonia y de la unidad económica que habrá de aplicarse a esas colonias.

Este capítulo establece en general lo que se refiere a las mejoras necesarias para llevar una vida digna y respetable. Hasta ahora ello no se lograba en todas las colonias; el propio colono que aspiraba a tener esas mejoras no podía a veces introducirlas, porque el costo de las mismas iba a incidir sobre la valorización del inmueble que estaba arrendando.

Por el régimen de esta ley, el Banco de la Nación Argentina dará asesoramiento técnico gratuito, así como todos los demás elementos que se necesiten, y también el apoyo crediticio que corresponda, a fin de lograr las mejoras a que me he referido. Además, a los efectos de no incidir en las amortizaciones, prolongará los plazos de amortización en cuanto fuere menester, para hacer que esas amortizaciones no recaigan sobre la producción del inmueble que el colono labora. Se extienden los plazos de amortización, a ese efecto, de 33 a 50 años, a fin de reducir —como he dicho— las cuotas de amortización e interés. Esto es una verdadera conquista del sistema de colonización que establece la ley que estamos considerando, y que posibilitará el afincamiento definitivo de la familia agraria.

Todo el sistema que contiene el capítulo IX, que estoy comentando, tiende a la elevación moral y material de la familia agraria argentina, pero, además, introduce algo importantísimo y novedoso dentro del régimen de la ley, y es la posibilidad de dar también —no solamente a los colonos, sino también a los obreros— una pequeña parcela de tierra. En esa forma, se facilitará, tanto a los obreros rurales

como a los de los centros urbanos, la posesión de una pequeña parcela de tierra donde arraigar su familia en una vivienda digna y confortable. Allí, con un pequeño trabajo familiar, podrá contribuir a la economía de su familia mediante productos hortícolas y de granja, mejorando el régimen alimentario.

Con toda crudeza, debemos decir que el obrero rural, en su mayoría, en estos momentos no dispone de una unidad familiar. El trabaja en el campo durante 10 ó 15 días consecutivos, al cabo de los cuales llega a los centros poblados, donde vive en ranchos, por lo general en barriadas ubicadas a orillas del pueblo, para ver a su mujer e hijos por espacio de un día. Esos niños se crían y desarrollan en un medio pobre y miserable.

No es posible que esas familias de obreros rurales, que con su esfuerzo contribuyen a la grandeza nacional, continúen viviendo en esa forma. Por eso, Perón ha contemplado en esta ley la posibilidad de darles una vivienda digna, que haga a la unidad familiar del obrero. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos prolongados.*)

El capítulo X, que se refiere a la adjudicación de unidades económicas, establece las normas que han de regir para la adjudicación de las mismas. Este capítulo se refiere a los requisitos básicos que debe reunir el productor agropecuario —como límite de edad, condiciones de aptitud para el trabajo, etcétera— para poder lograr una unidad económica.

Se introduce una novedad interesante, en cuanto se posibilita a los técnicos egresados de las universidades nacionales para que puedan obtener una parcela de tierra y cultivarla racionalmente.

También se establece la posibilidad de radicación de los arrendatarios o aparceros que, por el régimen de la ley de arrendamientos, estén comprendidos en sus excepciones, acordándoles prioridad en la adjudicación de los lotes de las colonias.

Desearía poder continuar en el examen de la iniciativa, pero como queda ya muy poco tiempo, voy a abreviar en todo lo posible.

El capítulo XI habla de los derechos y deberes de los arrendatarios. Lógicamente, en la organización y racionalización de estas colonias los adjudicatarios no sólo tienen derechos sino que esta ley también les impone obligaciones. Por supuesto, que también se fijan sanciones para quienes no cumplan con las obligaciones que determina la ley, que pueden llegar hasta la pérdida de la parcela adjudicada.

Voy a hacer un rápido comentario sobre el capítulo XIII que se refiere al fondo de ahorro, interesante institución que incorpora esta ley.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, doctor Juan Ramón Degreef.

Sr. Tommasi. — El fondo de ahorro tiende a fomentar una economía por parte del productor agropecuario. Este fondo se hará en base al rendimiento económico de la parcela que trabaje cada productor. En cuanto a su destino, el proyecto establece que será para servir de reserva en caso de contingencias agrícolas, para solventar gastos de asistencia médica y, además, también para acelerar la amortización de las parcelas adquiridas.

No deseo continuar sin hacer una referencia respecto a esas amortizaciones.

El proyecto de ley establece en el artículo 43, inciso c), un principio social extraordinario como es el de rebajar en un cinco por ciento el valor inicial de la tierra por cada hijo que tenga la familia agraria que está explotando el predio. Se trata, como se ve, de un principio interesantísimo para el desarrollo y arraigo de la familia campesina.

Los títulos de propiedad se entregarán después que se haya dado cumplimiento a lo estipulado en el capítulo XVI, de todas las obligaciones a cargo del adjudicatario y transcurridos diez años desde la posesión del lote.

Además se declara absolutamente inembargable e inejecutable el dominio de los predios de colonización y que las medidas precautorias no podrán afectar el normal desarrollo de la explotación del predio.

En todos los títulos de propiedad que se otorguen de acuerdo a la ley, se establecerán ciertas prohibiciones, como ser la de no subdividir la unidad económica para no caer en el minifundio; no gravar el predio con derechos reales; y no transmitir el dominio del inmueble a terceros sin autorización del organismo encargado de la aplicación de la ley. Además en el caso de transmisión por fallecimiento, se fijan normas precisas a fin de que la partición de la herencia no provoque un parcelamiento que origine el minifundio de esas unidades económicas. Para ese caso, dentro de cada familia la ley establece precisamente quiénes podrán continuar con la explotación de esa unidad económica y que los demás familiares serán indemnizados de acuerdo al valor de la herencia a repartir. Los miembros de esa familia que estén en condiciones de explotar la unidad económica serán considerados siempre preferentemente dentro de los planes de colonización para la adjudicación de nuevas parcelas.

Me referiré brevemente ahora al régimen financiero de la ley.

El artículo 65 se refiere a los bienes adquiridos en función de la ley 12.636, de las leyes especiales de colonización a cargo del banco y los que se adquieran por la presente ley y a los demás bienes e ingresos que integrarán el patrimonio del organismo encargado de la aplicación de la ley.

Ahora bien, debo señalar que el gobierno peronista, a los fines de la colonización está invirtiendo 200 millones de pesos anuales, con lo cual al finalizar el período del segundo Plan Quinquenal se habrán invertido en colonización 1.110 millones de pesos para la adjudicación de colonias.

En el período 1940-46 las tierras adjudicadas sumaron 56.652 hectáreas. En el período 1946-52, se registra una entrega total de 783.775 hectáreas para 36.984 personas. En el lapso comprendido entre la iniciación del segundo Plan Quinquenal —enero de 1953— y el momento actual, se han adjudicado y están en ofrecimiento 1.131.966 hectáreas, incluyendo el problema indígena. Además, se encuentran en proceso de habilitación 210.507 hectáreas, de las cuales 5.537 pertenecen a zonas de riego.

Para terminar, señor presidente, diré que el peronismo tiene una extraordinaria fe en los resultados y en las posibilidades de esta ley. Con toda sinceridad desea su éxito. El presidente de la Nación, como lo ha enunciado reiteradamente, desea el progreso del campo argentino y el desarrollo y el afincamiento definitivo de la familia agraria. Ese concepto es esencial en nuestro movimiento revolucionario. Por otra parte, en la historia de la humanidad, ningún movimiento revolucionario ha tenido proyecciones en el tiempo y en el espacio, si sus raíces no han penetrado en la tierra.

Esa es la aspiración del peronismo, que creemos que con esta ley podemos realizar. Habremos dado así proyección y profundidad al movimiento revolucionario que integramos.

Aspiramos a crear con esta ley la familia agraria con conciencia agraria. Sabemos que los hombres del campo constituyen una extraordinaria reserva humana de nuestra patria. Queremos con esta ley, impulsar su afianzamiento definitivo y su progreso en la tierra que tanto amamos los argentinos. De ello nacerá la consolidación de la grandeza de nuestra patria y del futuro de la nacionalidad. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos. Varios señores diputados rodean y felicitan al orador.*)

Sr. Presidente (Degreef). — Tiene la palabra la señora diputada por Santa Fe.

Sra. Biondi. — Señor presidente: las previsiones de la ley de colonización que considera en estos momentos la Honorable Cámara incluyen también, como debe ser en esta hora de justicia social y de preocupación por el bienestar del pueblo, medidas de previsión y de fomento para el hogar rural.

En primer término, cabe citar el capítulo XIV que se refiere a la vivienda rural, la que exige sea adecuada, higiénica, confortable y económica.

En esta base de un hogar material se instalará el hogar espiritual de un matrimonio de trabajadores rurales, de acuerdo a la preferencia que establece el artículo 3º, juntamente con

los hijos, que habrán de ser eficaces colaboradores para llevar adelante esa empresa familiar.

La ley ha previsto un beneficio en favor de los hogares que van incrementando el núcleo familiar con nuevos hijos, y reduce el valor de los lotes en un 5 por ciento por cada hijo. Este beneficio compensará, en algo al menos, ese bien para la patria que significa un hijo más, un nuevo argentino que habrá de contribuir, con el correr de los años, a aumentar esa grandeza que se va realizando con el esfuerzo de todos.

No se ha dejado de lado tampoco el aspecto cultural que esa familia rural necesita, y por ello, el artículo 23 fija las normas de reserva y construcción de escuelas, centros cívicos y culturales, y establecimientos asistenciales. Por estas circunstancias, encuentro justificado afirmar que esta ley habrá de ser protectora del hogar rural, núcleo esencial y básico de toda la riqueza agropecuaria argentina.

Me parece oportuno señalar la importancia que tiene en esa familia rural el trabajo de la mujer, no sólo en cuanto a esposa y madre, en los que ya tendría una inmensa labor a realizar y un mérito muy elevado, sino también porque es el apoyo del trabajador en sus momentos de desfallecimiento, la compañía amable y estimulante de esa soledad que a veces angustia, la orientadora y educadora de sus hijos, la enfermera irremplazable y la proveedora de cariño y unión para toda la familia; la sacerdotisa del hogar, como se la llamara en la antigüedad.

Además de estos aspectos, quiero señalar la colaboración directa y activa que la mujer realiza en los trabajos del campo: en la atención de los animales domésticos, en la huerta, en las tareas más apremiantes adonde llega también su brazo colaborador y su esfuerzo de leal camarada. Y añadido también a este breve pero sentido elogio a la mujer de nuestro campo, a las esforzadas hijas de los chacareros, porque muchas veces se habla de la esposa y de la madre del hombre de campo, pero a menudo se olvida la gigantesca labor que realizan las hijas de esos chacareros.

Sabemos bien que en muchos hogares rurales, las hijas cumplen tareas similares a sus hermanos o reemplazan a hijos varones que esa familia no tiene. ¡Cuántas mujeres jóvenes, de distintas edades, recorren los campos cumpliendo las diversas tareas rurales con la decisión y la capacidad de avezados agricultores!

En esta Nueva Argentina de Perón y Eva Perón, las mujeres de la patria, dignificadas y alentadas por el espíritu inmortal de la Jefa Espiritual de la Nación, Eva Perón, afrontan valientemente todas las labores que sus obligaciones les imponen y colaboran así, con entusiasmo y patriotismo, en ese impulso constructor de progreso y de producción que ha infundido el movimiento peronista a todos los ámbitos de la patria para aumentar el bienestar del pueblo y afianzar la grandeza de la Nación.

La sanción de esta ley de colonización habrá de constituir indudablemente un nuevo apoyo a la acción bienhechora que está realizando el gobierno del general Perón en favor del campo argentino. Y muy especialmente habrá de constituir una valiosa ayuda a la consolidación y arraigo del hogar rural, de esa familia agraria, instalada en viviendas dignas, propietarias de sus tierras y justicieramente retribuidas en su esforzada labor, factor básico de la primordial riqueza argentina, la riqueza agropecuaria.

La ley que consideramos debe merecer, por ello, el más amplio apoyo de todos los diputados, y al exponer en estas breves palabras mi adhesión a esta magnífica iniciativa del Poder Ejecutivo, estoy segura de interpretar los sentimientos de esa inmensa falange de mujeres argentinas que sienten y piensan en argentino desde todos los rincones de la patria, en los cientos de miles de hogares rurales, en los que se recuerda con cariño y se admira con fervor a nuestra querida e inolvidable Eva Perón. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos. Varios señores diputados rodean y felicitan a la oradora.*)

Sr. Presidente (Degreef). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Weidmann. — Señor presidente: el progreso de los pueblos, su mejoramiento del nivel de vida, el perfeccionamiento social y la posibilidad de que el hombre realice su destino, alcance la culminación de sus aspiraciones, compagine la disponibilidad de los bienes materiales con el perfeccionamiento moral y espiritual, disfrute de todos los bienes de distinto orden que brinda la técnica para emancipar al ser humano de la esclavitud a las cosas del estado de necesidad y de todas las otras opresiones que contrarrestan el curso de su evolución ascendente, reconocen indisputablemente como basamento primario la independencia económica de los pueblos.

La independencia económica exige, como un primer paso, lo que llamaría la reforma patrimonial, que abarca todo el sistema de la economía. Empieza con el problema de la tierra, continúa particularísimamente en nuestro país con la energía del subsuelo y culmina con el de los medios de transportes y de comunicaciones.

A la reforma patrimonial, cuyos grandes ideales iluminaron la mente de los hombres que echaron los cimientos de la Unión Cívica Radical, que me honro en representar en el Congreso de la Nación, debe seguir la reforma obrera, entendiendo por tal la sanción y afianzamiento de una legislación social protectora del hombre, desde la cuna hasta la tumba, que le dé la tan ansiada seguridad social, por la que vienen aspirando desde los albores de la humanidad los hombres que brindan su esfuerzo al servicio de la comunidad. Por último debe venir la reforma educativa, la cultura al servicio del pueblo, para

liberarlo de la ignorancia, que es el más grande contrapeso y el mejor aliado de las tiranías y de los despotismos, y que es el clima en el que proliferan todas las aberraciones que la civilización contemporánea está deparando como una triste paradoja enfrentada al pretendido progreso material y a los grandes adelantos que la técnica hoy exhibe a la consideración del universo.

Ya lo dijo aquel gran visionario que se llamó Hipólito Yrigoyen.

La riqueza nacional, el trabajo y la cultura son los grandes objetivos que debe proponerse todo gobierno que quiere hacer la obra de reparación que aún hoy espera el pueblo argentino. Esa magna tarea iluminó la mente y el espíritu de los hombres que tuvieron a su cargo la heroica gesta de Mayo y que tantas frustraciones tuvo a través de nuestro devenir institucional. Apareció la consigna de la tierra y el petróleo; la tierra en función social, para asegurar la subsistencia y un vivir decoroso y holgado para el hombre que la trabaja, y, a la vez, para subvenir a las necesidades del consumo del pueblo de la Nación y habilitarlo para concurrir a los mercados internacionales en demanda de aquellos bienes de que carece el suelo patrio, asegurando en esa forma su independencia económica, que es, indiscutiblemente, el basamento de la verdadera soberanía nacional.

Ya sabemos lo que ocurrió con estos dos postulados, que no pudieron llegar a concretarse: las fuerzas de la reacción se alzaron en armas, cerraron el acceso del pueblo libre de la República a los sitios del poder político, e instauraron un régimen de regresión y de menoscabo de la libertad, de la dignidad y del bienestar del pueblo de la República.

Al enfrentar un problema como el de la colonización de la tierra, es necesario previamente hacer un examen del concepto de la propiedad agraria. Para ello, podemos remontarnos hacia épocas pretéritas, a fin de desentrañar el concepto de que la tierra es un bien común y que su apropiación privada y su posesión exclusiva por parte del hombre están condicionadas a que la ponga al servicio de la comunidad. Ya Adam Smith nos decía que el trabajo es el fundamento del derecho de propiedad. Lo propio fué sostenido por aquel famoso economista británico que se llamó David Ricardo. Stuart Mill nos dice que, si no es útil, la propiedad privada de la tierra es injusta.

Henry George sostiene que así como el hombre no tiene derecho para apoderarse de un medio natural como el aire o la luz, lo mismo debe ocurrir con la tierra. Este tratadista, al igual que Spencer, estaba en contra de la propiedad privada de la tierra.

El socialismo, con su tesis de la socialización de los medios de producción y de cambio, llega

también a la eliminación de la propiedad privada. Van der Velde, en el *Socialismo moderno*, expresa que la tierra no es el producto del trabajo. Si se puede justificar la posesión individual del suelo, no ocurre lo mismo con la propiedad de la tierra como derecho perpetuo y absoluto.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, doctor Antonio J. Benítez.

Sr. Weidmann. — Santo Tomás de Aquino, ya citado en esta Cámara en el debate sobre propiedad y política agrarias, nos dice que existe un derecho natural de todos a todo bien. En la necesidad, todas las cosas deben hacerse comunes. Admite la propiedad privada por una razón humana, para utilidad del hombre, porque constituye —dice— un estímulo para la producción y una garantía de la paz social. Dios es el único propietario; al hombre le queda el uso.

Gino Arias, en su *Filosofía tomista y la economía política*, dice que Dios concede el dominio al hombre, subordinado, necesariamente, al fin del cual deriva la necesidad racional y social del buen uso.

La propiedad privada, de acuerdo a la concepción tomista, es, pues, aceptada, pero dentro del concepto de la función social. El propietario viene a ser un simple administrador, un cuidador; la propiedad pertenece a Dios, y de ella debe hacerse una distribución. En esa forma es lícito poseer.

Von Ihering, en *El fin en el derecho*, demuestra la importancia del fin social en el derecho, frente al fin del individuo. Es el sujeto hombre social de la concepción actual, frente al individuo del concepto antiguo.

Duguit, en su *Derecho privado*, nos dice que descansa en los fundamentos de la estructura social la necesidad de mantener coherentes entre sí los diferentes elementos sociales, por el cumplimiento de la función social que incumbe a cada individuo, a cada grupo; y, siguiendo a Comte, sostiene que la propiedad es una institución jurídica que se ha formado para responder a una necesidad económica, y ésta ya no es el derecho subjetivo del propietario: es la función social del poseedor de la riqueza.

Hauriou sostiene también el principio de la función social de la propiedad.

Como vemos, el concepto de la función social de la propiedad agraria viene de épocas remotas, y se ha ido afinando en la legislación positiva de los distintos países, a tono con su evolución política, con su perfeccionamiento social y, sobre todo, con el avance de la justicia social, que también trae sus orígenes desde los más remotos tiempos de la humanidad, paralelamente al progreso de las instituciones jurídicas, perfilado en un mayor predominio de las clases desposeídas en la conducción y

el destino de los intereses de las naciones. Es decir, cuando ellas lograron poner un freno a la codicia, a la avaricia y a los afanes utilitaristas de las clases terratenientes, de las clases oligárquicas, que, prevalidas del poderío económico, obturaron la conducción de los destinos políticos de las naciones, poniendo la riqueza y el trabajo del hombre al servicio, no de la comunidad, sino de sus intereses particulares.

Esa lucha en contra del privilegio, en contra del poder económico concentrado en pocas manos y manejado a contramano de los destinos de la comunidad, es la que vienen librando desde hace muchos siglos todos los pueblos de la tierra, y que aun hoy se encuentra en la etapa primera de sus realizaciones últimas, porque en todas partes se opone a su avance, como una muralla, la ceguera del privilegio, el egoísmo de los poderosos y la falta de sensibilidad y de comprensión de todos aquellos que no saben apreciar cuál es el destino último de la comunidad, que no es sino colocar el Estado, la riqueza y todos los bienes materiales al servicio del hombre, para la realización de su destino.

En nuestro país, después de la última guerra, que particularizó en las naciones de Europa el afán de liberarse de los pueblos que habían vertido su sangre en defensa de la libertad y de la dignidad del hombre, también se sintió el soplo renovador de esa ansia de asegurar el destino del hombre, dándole estabilidad en la posesión de la tierra.

El hombre, que en la paz empuñaba el arado en los campos y las herramientas en los talleres y fábricas, fué también el que manejó los cañones y los fusiles en los campos de batalla, el que con su pecho y con su sangre repelió la agresión totalitaria y aseguró la supervivencia del régimen democrático de gobierno. Ese hombre quiso, consciente de su valer, llevar a su hogar los beneficios de esa paz que él había conquistado, y que se le diera también la posibilidad de realizar su destino. De ahí, ese incontenible afán de promover una reforma agraria efectiva, que posibilitara la materialización de tantos sueños frustrados.

La premura, el poco tiempo de que disponemos, me impide hablar de la reforma agraria en distintas naciones del mundo. Hubiera sido esta exposición muy interesante para ir anotando cómo la sucesiva progresión que alcanzó la reforma en los países que la adoptaron con profundidad, con honestidad y con absoluta franqueza, ha sido paralela con su progreso económico y con su tranquilidad social.

Nuestro país, señor presidente, tuvo una magnífica oportunidad después de la última guerra —¡que quién sabe si podemos volver a alcanzar!—, por la gran acumulación de divisas y de medios de pago que se obtuvieron gracias al esfuerzo extraordinario de nuestros hombres de campo, que produjeron tantos bienes de con-

sumo como para subvenir a la alimentación, no sólo del resto de los habitantes del país, sino a las necesidades de los pueblos que estaban en lucha allende los mares.

Desgraciadamente, todo ese enorme potencial de riqueza no fué aplicado para llevar a cabo la riqueza patrimonial en la República, para traer bienes de capital, para incorporar a nuestro potencial de trabajo maquinarias y equipos que tan indispensablemente requerimos. Y eso era indispensable, señor presidente, para poder liberar al hombre del atraso y del vasallaje en el que hoy se encuentra por los medios primitivos y rutinarios de trabajo, por la falta de una maquinaria perfeccionada con todos los adelantos de la técnica, y también para aumentar el rendimiento de nuestra producción, asegurar el abastecimiento de toda la población de la República y contar, a la vez, con disponibilidades para la exportación.

Se siguió una política de industrialización, que yo llamo artificial, porque no fincó en el asentamiento de las industrias agropecuarias. Se llegó al centralismo industrial, y en materia agraria se instauró una política de paliativos, que comienza en el año 1943 con el decreto 14.001, de rebaja de arrendamientos, congelación de precios y suspensión de desalojos, que, si bien llenó una necesidad del momento, no debió detenerse allí, porque, indudablemente, no era sino una solución de emergencia.

El país reclama una reforma agraria substancial. Entendemos por ella la solución efectiva del problema de la tierra, la terminación de esta era de arrendatarios y aparceros en precarias condiciones de estabilidad, porque las sucesivas leyes de prórroga de los regímenes de arrendamientos y aparcerías rurales están siempre libradas a la apreciación discrecional del poder político.

El hombre que trabaja la tierra necesita además del afincamiento, la protección de su trabajo y la garantía del valor de lo que produce. No es posible que el hombre que trabaja la tierra esté supeditada a contingencias de tipo político, que es lo que le ocurre en estas circunstancias, en que aun no ha sido incluido en el período extraordinario de sesiones el proyecto de prórroga y reforma de la ley de arrendamientos rurales.

Entendemos, señor presidente, que la verdadera revolución nacional debe empezar por la solución del problema de la tierra. Es en la tierra donde el hombre encontrará su destino; es en ella donde podrá concretar todas sus aspiraciones y realizar a la vez la prosperidad y la grandeza del país.

Nuestras bases de acción política, aprobadas en la convención nacional del año 1948, establecen claramente la necesidad de organizar una democracia económica: «Control de la economía sobre la base de un planeamiento fijado

por los organismos representativos de la voluntad popular, que coloque la riqueza natural, la producción, el crédito, las industrias, el consumo y el intercambio internacional al servicio del pueblo y no de grupos o minorías, para construir un régimen que subordine la economía a los derechos del hombre y movilice sus recursos, no en el limitado beneficio de los poseedores, sino del desarrollo nacional y del bienestar social.»

La base 7ª agrega: «Reforma agraria inmediata y profunda que coloque a la tierra —que no debe ser una mercancía— al servicio de la sociedad y del trabajo; organización de los agrarios para la utilización en común de las grandes maquinarias y la ubicación de industrias de transformación de materias primas en los mismos centros de producción; comercialización directa de los productos agropecuarios por los productores, con intervención del Estado, para asegurar el valor de la producción, que debe pertenecer a sus creadores.»

En el plan agrario, sancionado por esa misma convención, se establece que «es menester, para la práctica de una política de colonización que asegure la radicación de todos los productores rurales:

«1ª—Reforma de la ley de colonización, propuesta por la representación radical —se refiere a la reforma que aprobó la Cámara de Diputados el 18 de diciembre de 1946, sobre la base de un proyecto presentado por el distinguido y estudioso legislador entrerriano doctor Luis R. Mac Kay, que no tuvo la suerte de que el Senado Nacional comprendiera su trascendencia, muriendo así uno de los tantos buenos propósitos que quedaron sin materialización definitiva—; deflación del valor inmobiliario; expropiación del latifundio, y adjudicación de lotes con sentido social.

«2ª—Revisión del régimen de concesiones de la tierra pública y aplicación del sistema de arrendamiento vitalicio, que preserve el patrimonio nacional, conceda estabilidad al productor y evite ulteriores concentraciones, como etapa inicial de futuras transformaciones del régimen de la tierra.

«3ª—Prohibición a las sociedades anónimas de ser propietarias de latifundios, y liquidación de las actuales que lo sean para la incorporación de sus tierras a un régimen de reforma agraria.

«4ª—Mientras la colonización realice la democratización agraria, vigencia de un régimen de arrendamientos y aparcerías que asegure estabilidad al productor y regule el precio de la locación de acuerdo a la producción, salvaguardando los derechos fundamentales a la vida con decoro y al trabajo compensado.»

Nosotros estamos, señor presidente, por una planificación democrática de la reforma agraria.

Entendemos que es fundamental que los órganos de ejecución que tengan a su cargo la aplicación de estos instrumentos de progreso social estén integrados, «tal como acontecía en el Consejo Agrario Nacional creado por ley 12.636, y mantenido, con algunas reformas, por la ley que sancionó esta Honorable Cámara el 18 de diciembre de 1946», por representantes del Estado y por auténticos productores, no en carácter de furgón de cola como los incluye esta ley —a título de Consejo de Coordinación, cuya única función es de asesoramiento— sino con plenas facultades de dirección y de gobierno del instrumento legal que se pone en sus manos.

Tampoco estamos, en esta planificación democrática, con el concepto de este proyecto del Poder Ejecutivo, que atribuye a él mismo la designación de los representantes de los productores dentro de ese consejo de asesoramiento. Esto implica una regresión. La propia ley 13.246, de arrendamientos y aparcerías rurales, al crear esos verdaderos tribunales agrarios que son las cámaras paritarias de conciliación y de arbitraje obligatorio, estipuló que los representantes de los arrendatarios serían elegidos por las entidades agrarias numéricamente más representativas, confeccionando una terna que luego someterían al Poder Ejecutivo de la Nación.

El problema de la tierra, que indudablemente es el básico porque sobre ella asienta todo el proceso agrario, tropieza en nuestro país para materializarse en la realidad, con grandes inconvenientes —que voy a apuntar ligeramente en un esfuerzo de síntesis— que malograron el éxito en la aplicación de esa magnífica ley que honra a nuestro acervo institucional, llamada de creación del Consejo Agrario Nacional.

La falta de recursos financieros malogró totalmente las perspectivas de esa ley, y la insensibilidad de los gobiernos no reparó que lo que se hubiera invertido en la reforma agraria habría revertido de inmediato, con creces, para beneficio de la comunidad, trayendo el bienestar social.

Esta falta de recursos está conectada con otro problema de extrema gravedad que tampoco soluciona el proyecto que estamos considerando, y que es la extraordinaria inflación de los valores inmobiliarios. A tono con el proceso inflatorio se ha operado en el país un acrecentamiento en el valor nominal de los campos, en parte también debido a la especulación que ha guiado muchas transacciones inmobiliarias, determinando una antinomia, una evidente divergencia entre el rendimiento, el valor de la producción y el costo de adquisición o de explotación de los campos, lo que trae aparejada la circunstancia de que el hombre que debe pagar su campo con el fruto de su trabajo no puede abonar los precios que pagan los especuladores, los hombres que han hecho inmensas fortunas con motivo de la artificial industria

levantada durante la guerra y por muchos otros conductos que quizá algún día lleguen a esclarescerse públicamente, pero que hoy permanecen ignorados para la mayoría de los hombres del campo que ven llegar hasta ellos gentes totalmente desconocidas, poseedoras de cuantiosos medios de fortuna, que compran sin tasa ni medida enormes extensiones de tierra, quizá para asegurar la conservación del valor de ese dinero que, en otra forma, con la inflación monetaria desatada en el país, se vería totalmente desmedrado.

Cuando el hombre de campo tiene que enfrentarse con una especulador o con un mero inversor, está colocado fuera de las posibilidades de adquirir la tierra que trabaja. La desinflación del valor inmobiliario se obtendrá en cierta medida con el arbitrio propuesto por la representación radical al considerarse el proyecto sancionado en 1946, en virtud del cual el valor de las tierras a colonizar se establecerá fundamentalmente sobre la base de la valuación fiscal hecha por estimación jurada del propietario dentro de los seis meses de vigencia de la ley, correlacionada con el rendimiento del fundo, o sea con el valor de su productividad durante los últimos diez años, a los efectos de guardar una relación de equidad.

La otra circunstancia que obturó la aplicación de la ley 12.636 y el desarrollo de una verdadera política de colonización fué la supresión del organismo de aplicación, llamado Consejo Agrario Nacional, al privarlo, primero, de autonomía, y al colocar, a partir del 24 de mayo de 1946, en que se dictó el decreto 14.939, toda la colonización en manos del Banco de la Nación Argentina, según lo dispone el apartado a) del artículo 25 de ese decreto.

En 1948, por otro decreto, el 33.425, a indicación del Consejo Económico Nacional y con el objeto de detener el proceso inflatorio, se dejaron en suspenso todas las expropiaciones de campos, tierras e inmuebles. Esto dió lugar a que no funcionara el mecanismo de la ley, sino en la forma relativamente insignificante de que dan muestras las cifras estadísticas.

El problema agrario no se soluciona con darle la tierra al hombre de campo. No basta, para solucionarlo, la nominalidad del título de poseedor, detentador o propietario de la tierra. Aparte de la detentación y de la estabilidad en la tierra, es indispensable asegurarle el fruto de su trabajo y la disponibilidad de los medios de explotación.

El crédito agrario debe ser otorgado con un sentido económicosocial y no financiero.

Sr. Siboldi. — Así se hace.

Sr. Weidmann. — El crédito agrario debe ser ágil, sencillo y efectivo. Sobre este problema podríamos extendernos —no lo permite el escaso tiempo de que disponemos—, para demostrar que el Banco de la Nación cumple esa función

con un sentido comercial financiero, y no encara en manera alguna la finalidad de fomento que, por esencia, persigue el crédito agrario. No le da dinero al que lo necesita, sino al que ya lo tiene. Hace del otorgamiento de las garantías de solvencia condición esencialísima, cuando hoy, si nosotros queremos estimular al hombre de campo debemos otorgarle fundamentalmente el crédito sobre la base de su capacidad de trabajo, su moral y su conducta.

También es indispensable proteger el trabajo agropecuario mediante una efectiva lucha contra las plagas, y, sobre todo, incorporando a nuestro acervo institucional un precioso elemento de seguridad que aun está en el terreno de los estudios: me refiero al seguro agrícola obligatorio, estatal, o mutuo o cooperativo, en los casos en que pueda ser implantado. Conceptúo que, dada la inmensidad de los riesgos cuya cobertura debe hacer este seguro, y dada, sobre todo, la inestabilidad de los elementos de la naturaleza que se conjuran para conspirar en contra del resultado de la producción agraria, y la magnitud de los volúmenes de riqueza comprometida, debe ser el Estado el que afronte ese seguro, sin que ello signifique no estimular los seguros mutuos o cooperativos que con tanto éxito se están implantando en muchos órdenes de la vida de la República.

Otros factores que deben contemplarse substancialmente son los de la movilización de la producción agropecuaria, el almacenamiento y transporte, las redes de elevadores de granos, que entendemos —y así lo hemos sostenido en los debates sobre esta materia— deben estar en manos de las propias organizaciones cooperativas de productores, que son las más calificadas para manejarlos con gran acierto, para ir en el momento oportuno, con gran agilidad y flexibilidad, a atender las necesidades de los productores; y que tienen un mejor conocimiento de los verdaderos requerimientos del campo.

En cuanto al transporte, es indiscutible que hay que tender a una mayor movilización de las cosechas en los momentos propicios, para evitar todos los riesgos que se ciernen sobre ellas, abaratando en lo posible los fletes, que últimamente han sido aumentados en un 30 por ciento en toda la red del sistema nacional de ferrocarriles.

También es indispensable contemplar la etapa complementaria de la industrialización de la producción agropecuaria. No podemos seguir siendo coloniales, país exportador de materias primas o de productos agropecuarios en especie o semielaborados o semiindustrializados. No pretendemos llegar a una absoluta y total industrialización de nuestra producción agropecuaria, porque ello no estaría de acuerdo con las posibilidades de nuestro intercambio comercial; pero creo que un gran paso de avanzada de nuestra emancipación económica y social, que asegure un mayor resultado del esfuerzo del hombre de

campo y una mejor colocación de la mano de obra nacional, estaría en la industrialización progresiva de la materia prima agropecuaria, colocando los establecimientos fabriles en los centros de producción, o sea haciendo la deseada descentralización industrial. Todos sabemos el daño que está haciendo al país la macrocefalia de la Capital Federal.

En cuanto a la comercialización, nosotros tenemos sentadas claras bases y establecemos que en lugar de hallarse en manos del Estado, como en la actualidad, debe estar a cargo de los organismos de los productores agropecuarios, en los cuales, con intervención del Estado que asegure el valor de la producción, se maneje la colocación comercial destinada a suplir las exigencias del consumo interno, a la vez que las del intercambio internacional con sujeción a los principios de desarrollo nacional y del bienestar social.

Entendemos, señor presidente, que estas etapas deben ser realizadas sucesivamente, y que todo debe hacerse partiendo de la base de que el fin último de esta obra de reforma patrimonial tiene un destinatario que es el hombre, que debe encontrar la realización de su destino en la tierra.

Toda reforma que se haga del régimen de la tierra, de la comercialización e industrialización, debe tender a emancipar al hombre del estado de necesidad, a darle la tan ansiada seguridad social, sobre todo al hombre de campo, que sigue siendo parte de su propia tierra. Debe también asegurarle un mejor destino, posibilitar la constitución de su familia, terminando con el celibato, que es una marca de atraso y de incivilización que nos brinda el interior de la República; muchos lugares son conocidos por la supervivencia de estos modos de vivir que no compaginan con el grado de progreso y bienestar que ha alcanzado el país.

Nosotros creemos que el hombre de campo, con la posibilidad de constituir su familia, de educar y capacitar técnicamente a sus hijos a la vez que darles una instrucción, será la base de la familia agraria. En esa forma, mediante la tierra, los medios materiales y las posibilidades que la legislación del país le brinde, podrá realizarse la verdadera tarea de movilizar una inmensa riqueza que hoy todavía espera el brazo fuerte que la ponga en circulación. Se hará posible así que el país disfrute de ese patrimonio que nos ha legado la divina providencia, y que hoy permanece sumido en el atraso y en la regresión por la falta de una política de fondo que vaya a la raíz de los problemas y hallarle lo que se llaman verdaderas soluciones, poniéndolo al servicio de la comunidad nacional.

Quiero hacer un análisis muy ligero de los resultados de la política agraria bajo este régimen, para llegar a la conclusión de que

durante este transcurso se ha operado la subsistencia y el fortalecimiento del latifundio.

Quiero significar que no comparto la caracterización que se hace hoy del latifundio, o sea el hallazgo de que el mismo también llena una función social que, so capa del cumplimiento de esta exigencia, está liberado totalmente de la intervención estatal y puede sobrevivir como una forma de propiedad de la tierra.

Yo sigo creyendo que, por más capacidad de producción que tenga un inmueble rural, si bien es cierto que desde el punto de vista económico en una situación de emergencia podría justificarse su existencia como tal, él atenta contra el progreso social. Económicamente, con la traducción fría de los números, podría llenar una necesidad, pero está contra el progreso social, porque está contra el principio de la ocupación de la tierra por el hombre que la trabaja. La mayoría de las veces el latifundio está en manos de sociedades comerciales —anónimas o de otro tipo— que se oponen a ese principio que nosotros venimos predicando desde hace muchos años, y que se incorporó en la ley 12.636, de que la tierra es un bien de trabajo y no un bien de renta.

Creo que solamente como excepción, cuando el latifundio tenga incorporado un centro fabril de industrialización de sus propios productos que requiera asegurarse el abastecimiento de materia prima para desarrollar una actividad económicamente provechosa, se podría justificar el mantenimiento de ese latifundio.

Según la memoria del Banco de la Nación Argentina del año 1953, la superficie entregada a la colonización asciende a 477 mil hectáreas, a las que habría que sumar 60 mil hectáreas que ya estaban asignadas bajo el régimen anterior; de manera que el total de la superficie colonizada es de 537 mil hectáreas.

Según un informe del Departamento de Asuntos Sociales de las Naciones Unidas, la tierra cultivable de propiedad privada en la Argentina asciende a 130 millones de hectáreas; y más del 85 por ciento de esa superficie, o sea 110 millones de hectáreas, corresponde a fincas mayores de 500 hectáreas. El 80 por ciento de la población agrícola no posee tierra alguna, sino que trabaja tierra ajena, bajo sistemas de arrendamientos y aparcerías u otros de simple ocupación.

Sr. Siboldi. — Es el criterio del señor diputado. Esas cifras no se ajustan a las estadísticas.

Sr. Weidmann. — Estoy dando una estadística de las Naciones Unidas y he citado la fuente: Departamento de Asuntos Sociales de la UN.

Según el mensaje presidencial leído el 1º de mayo de 1954, el número de arrendatarios inscritos, o sea el número de contratos de arrendamiento que se hallan inscritos en el registro llevado por el ministerio respectivo, ascendía a 211.704 al finalizar el año 1952.

En cuanto a las tierras de propiedad de las sociedades anónimas, se las estima en 26 millones de hectáreas.

Las adjudicaciones que se han hecho en toda esta época han sido sobre la base del valor venal. Las tasaciones que ha hecho el organismo colonizador, en este caso el Banco de la Nación, tuvieron como índice el valor venal de la tierra, con lo cual se ha agravado la inflación inmobiliaria.

Podría hablar extensamente —y lamento que en esta Cámara no se nos brinde la oportunidad debida— sobre el resultado de la política de comercialización de la producción agropecuaria. En la sesión de ayer, mi colega de representación, el señor diputado Alende, explicó cómo mediante la política de negociación de divisas provenientes de la exportación de productos agropecuarios, realizada por el Banco Central, el valor de esa producción agropecuaria no ha ido a manos del hombre que trabaja la tierra. Y, lo que es más grave, tampoco esas divisas se han aplicado para capitalizar la agricultura, ni para hacer la reforma agraria, ni para lograr nuestra tan ansiada independencia en materia de abastecimiento energético, ni tampoco para mejorar y perfeccionar los sistemas de transportes y comunicaciones de la República.

Tendría también, señor presidente, oportunidad de demostrar cómo la política oficial del régimen no es ni solidaria ni anticíclica, sino que, por el contrario, va decreciendo en la medida en que el ritmo de la inflación y el decaimiento de los precios internacionales van restando las posibilidades de provechosa colocación de nuestros productos agropecuarios en el extranjero. Y así podría demostrar, por ejemplo, que el poder adquisitivo de los granos ha bajado en una forma extraordinaria desde 1947 hasta la fecha.

Quiero traer un solo caso para hacer una referencia, que podría ampliar en caso necesario: el poder de compra de los granos en 1928 y 1950; el precio de un tractor en término de granos en aquella fecha y en la actualidad. En 1928 se necesitaban 47 toneladas métricas para comprar un tractor; en 1933, 102; en 1937, 67; en 1940, 146; en 1947, 110, y en 1950, 193 toneladas.

En cuanto al poder adquisitivo de los granos a los precios oficiales establecidos tomando el índice de 100 para el año 1948, relacionándolo con el costo de la vida, llegamos a la conclusión de que en 1949 el precio de los granos era de 110, el costo de la vida, de 131, y el poder de compra de los granos, de 84; en 1950 estos índices eran de 119, 165 y 72; en 1951, de 158, 225 y 70; en 1952, de 184, 285 y 64; y en 1953, de 267, 324 y 82.

Sr. Siboldi. — ¿Quién ha fabricado esa estadística?

Sr. Weidmann. — Esta estadística no ha sido «fabricada». Ha sido hecha por el comité nacio-

nal del partido al que me honro en pertenecer, en base a las propias estadísticas oficiales, sin tener en cuenta...

Sr. Siboldi. — Ha sido hecha con criterio político, y lo que se necesita en estos casos es criterio económico.

Sr. Weidmann. — ...la congelación de los alquileres.

Las estadísticas oficiales, que vienen en las síntesis estadísticas mensuales, es el elemento de información de que disponemos, y sus cifras son las que damos. Por eso hago la referencia expresa de que la estadística citada no tiene el costo actual de los alquileres, o sea, de la vivienda; tiene los alquileres congelados el año 1943. Quiere decir que si tomamos en cuenta el costo real de la vivienda en esta época, el poder de compra actual de los granos está muy por debajo de las cifras que termino de dar.

El reloj va señalando inexorablemente el término de mi exposición. Tendría que hacer un análisis completo de este proyecto de ley; pero en la imposibilidad de llevarlo a cabo, voy a señalar aquellas fallas que, a nuestro juicio, son substanciales, pero que no han impedido, sin embargo, que nuestro bloque haya optado por votar en general en favor de esta iniciativa...

Sr. Siboldi. — Porque es buena.

Sr. Weidmann. — ...entiendo que el régimen de la colonización está completamente frustrado.

Lo lamentable es que la frustración del régimen de la ley 12.636, modificado por el decreto 14.939 del año 1946, que coloca en el Banco de la Nación las funciones de instituto colonizador, va a continuar con el nuevo sistema. Nosotros protestamos contra ese hecho. La incapacidad financiera del régimen de colonización vigente en la actualidad se mantiene y agrava en el nuevo proyecto de ley. La inhabilidad del organismo colonizador se agrava con el sistema que trae a nuestra consideración el Poder Ejecutivo, porque coloca de manera total y absoluta en manos del Banco de la Nación, que es un ente descentralizado dependiente del Ministerio de Finanzas, todo el proceso de la colonización del país.

Sr. Gramajo. — ¿Me permite el señor diputado una brevisima interrupción, con el permiso de la Presidencia?

Sr. Weidmann. — ¡Cómo no!

Sr. Presidente (Benítez). — Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.

Sr. Gramajo. — Quiero demostrar al señor diputado que está en un error, y hacerle notar que también es equivocado lo que dijo respecto a que los productores iban en el vagón de cola.

Como lo demuestra claramente el artículo 74 del proyecto son los mismos productores quienes se dan sus autoridades y quienes gobiernan. De manera que se equivoca el señor diputado

cuando expresa que es el gobierno el que dirige todo.

Sr. Presidente (Benítez). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Weidmann. — El organismo de aplicación de la ley, conforme al artículo 2º, es el Banco de la Nación, con todas las funciones y deberes que le encomienda el artículo 3º. Los productores solamente integran un organismo de coordinación que cumple simples funciones de asesoramiento, y eso en manera alguna significa que el banco tenga que seguir las directivas que ellos impartan.

Lo que nosotros queremos es que sean los propios productores quienes manejen los destinos de este organismo; por supuesto, juntamente con el Estado, ya que a éste le toca una permanente participación en la realización de ese proceso.

Voy a señalar a grandes rasgos las discrepancias fundamentales con este proyecto.

En primer término, contiene muchas disposiciones que son meramente declarativas y no preceptivas, como deben serlo las que forman el contenido de una ley.

Sr. Siboldi. — Solamente el artículo 1º es enunciativo.

Sr. Weidmann. — En segundo lugar, el organismo de aplicación es un ente descentralizado, carente de autarquía, del que no forman parte los productores. Así vemos como, en otro caso, las confederaciones rurales argentinas, el movimiento cooperativo y la Federación Agraria Argentina, que congregan a todos los productores del país, están protestando airadamente porque en la última reforma de las leyes de carnes y de granos, en lugar de dar representación a los verdaderos hombres que laboran la tierra, se da intervención a la Confederación General Económica, que ellos califican como el organismo representativo de la oligarquía y de la regresión, para representar al hombre que trabaja en el agro, haciendo irrisión de esta aspiración de los campesinos.

No estamos tampoco a favor de la enajenación de las tierras fiscales, comprendida en los planes de colonización que contempla el artículo 6º.

Tampoco estamos con la fijación del precio de la tierra en atención al valor venal, como lo establecen los artículos 9º y 10 del proyecto.

Sr. Siboldi. — No es así.

Sr. Weidmann. — El valor venal está incluido entre los índices. Le pido al señor diputado que lea el artículo 9º, que habla de los «valores venales promedios para terrenos similares de la zona».

Tampoco estamos con la contemplación que se hace del latifundio en el artículo 15, so pretexto de una explotación agraria racional.

Tampoco estamos con que se elimine el sistema de las expropiaciones como medio de compra, reduciéndoselo sólo al caso en que no

se puedan adquirir tierras suficientes por los medios indicados en el artículo 11, ni con la exclusión de la compra directa.

Tampoco estamos con que las colonias sean solamente organizadas en base a la ciencia agrícola, como lo establece el artículo 20, olvidando completamente que debemos tender a una diversificación de la producción rural: la granja, el tambo y la pequeña explotación ganadera.

También debemos señalar el olvido de los técnicos egresados de las escuelas provinciales que se hace en el artículo 29, el cual se refiere a la adjudicación de unidades económicas.

Tampoco estamos con la reserva que se hace para los inmigrantes. Creemos que es indispensable ubicar primero a todos los hijos de argentinos que claman por la tierra, y después pensar en la posibilidad de traer hombres extranjeros. Tampoco estamos de acuerdo en la forma como se establece el principio de inembargabilidad. El banco tiene la posibilidad de hacer el embargo sin mayor discriminación. El sistema establecido por el artículo 71 de la ley 12.636, que contempla la tierra, las mejoras, los frutos del suelo arrendado y los equipos de trabajo, tiene un mayor alcance y contenido social.

Tampoco creemos que para construir una mejora deba el colono solicitar permiso al banco; ni que se pueda permitir el arrendamiento ni la cesión de derechos sobre el lote otorgado, y menos que se lo obligue a formar parte de sociedades cooperativas, porque vulnera el principio substancial de estas organizaciones.

Tampoco el banco puede imponer ahorros sin límites. La ley anterior establecía el tope del 4 % y la obligación de invertirlo en títulos nacionales. El fondo de ahorro no debe contemplar sólo contingencias agrarias; cuando la explotación sea diversificada se han de tener en cuenta los riesgos consiguientes.

El banco no puede disponer —como lo establece el artículo 54, inciso b)— la caducidad discrecional de la adjudicación. El sistema de la ley actual establece un previo emplazamiento al adjudicatario y requiere cuatro votos de los miembros que componen el Consejo Agrario Nacional. Creemos que no sólo debe haber emplazamiento al adjudicatario, sino que se le debe dar audiencia y también recursos para el caso en que la resolución resulte lesiva a sus intereses.

Tampoco creemos que el artículo 56 pueda llevarse a la práctica. Habla de la rescisión de un contrato de adjudicación de un lote, y nos dice que el adjudicatario sólo tendrá derecho al reembolso del valor de las mejoras económicamente necesarias que hubiere introducido con aprobación del banco y de las sumas acumuladas en concepto de fondo de ahorro, previa deducción de todo monto que adeudare y del equivalente del 3,25 por ciento sobre el precio de ven-

ta de la unidad económica en concepto de arrendamiento anual. Y yo me pregunto: las amortizaciones de capital que este hombre ha hecho, ¿a título de qué las va a guardar el Instituto Colonizador? Es un verdadero despojo; y, por ende, es inconstitucional.

Tampoco estamos con el artículo 57, vale decir con el pago del valor de reposición como indemnización de mejoras a adjudicatarios que no cumplen. Es éste un beneficio indebido.

Sr. Presidente (Benítez). — La Presidencia hace notar al señor diputado por Santa Fe que su exposición excede el término acordado, y que el mayor tiempo así insumido tendrá que descontarse del que pueda corresponder a las exposiciones de los otros señores diputados de su mismo sector.

Sr. Alende. — Lo restamos del tiempo que nos corresponda al tratarse en particular el proyecto.

Sr. Presidente (Benítez). — La Presidencia no opone objeción alguna a que —dentro de los límites de tiempo acordados para la discusión en general— continúe la exposición del señor diputado por Santa Fe; y si trae al recuerdo la circunstancia de que hay un término acordado, dentro del cual deberá mantenerse esa discusión en general, es al sólo efecto de evitar ulteriores reclamaciones.

Sr. Weidmann. — No veo tampoco en este proyecto la prohibición de adjudicar tierra a las sociedades anónimas y comerciales en general...

Sr. Siboldi. — No hay necesidad de que lo diga, desde que expresamente se señala que la tierra se dará a los auténticos agricultores.

Sr. Weidmann. — ...que ya tenía la ley 12.636 y la 13.995 en su artículo 59, con la salvedad que hago de las sociedades cooperativas.

Tampoco se establece la posibilidad del pago en especies y el arrendamiento vitalicio, que creemos es una magnífica institución incorporada a la legislación relativa a tierras fiscales.

La precariedad del tiempo me ha impedido hacer un desarrollo acorde con la magnitud y trascendencia de los problemas involucrados en la reforma agraria, de ineludible exigencia por parte del máximo organismo representativo de la voluntad popular, que es el Congreso de la Nación.

Termino formulando nuestra aspiración de que el hombre de campo, tan sufrido al través de toda la vida institucional del país, que espera verdadera justicia —económica y social—, que requiere indispensablemente se le respete en su trabajo y en el valor del fruto de su trabajo, que reclama un ámbito de libertad y justicia, encuentre, en las postulaciones de la Unión Cívica Radical —que tiene un sentido ético de la vida y que hace del hombre la finalidad suprema de todas sus formulaciones doctrinarias y programáticas— la tan ansiada seguridad social que le habilite para ser el motor del pro-

greso económico y del perfeccionamiento social de la patria, en un régimen de absoluta garantía para su trabajo y para su libertad política. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos prolongados.*)

Sr. Presidente (Benítez). — Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.

Sr. Siboldi. — Señor presidente: el Poder Ejecutivo ha sometido a la consideración de la Honorable Cámara el proyecto de ley que estamos debatiendo, que tiene por objeto actualizar las normas jurídicas vigentes en materia de colonización sobre tierras de origen privado.

Es evidente que ha llegado el momento de estructurar en un cuerpo legal moderno las concepciones revolucionarias de la Nueva Argentina en materia agraria.

Las reformas agrarias del mundo han tenido por principal finalidad lograr la justa distribución del suelo agrícola y, para ello, han debido afrontar conmociones sociales, llegando en muchos casos a mezclarse la sangre del trabajador rural con la tierra, haciendo causa común.

Afortunadamente nuestra reforma agraria se desarrolla en un ambiente de serenidad y de optimismo, ante un presente cuajado de realidades y un porvenir venturoso, al amparo de un gobierno popular y con sentido agrario.

Es evidente que el Estado se ha preocupado en todo momento de los problemas que hacen a la vida del trabajador rural. Bastaría para ratificar lo expuesto aludir a las leyes de arrendamiento y aparcerías, a la de tierras fiscales, así como también al estatuto del peón.

En esta oportunidad entramos a considerar la ley más fundamental en esta materia; con ella adquiere definitivamente autonomía propia nuestro derecho rural. En la hora presente interesa a todos los gobiernos de países productores la radicación definitiva del trabajador rural. A este respecto se cuenta con un gran acopio de antecedentes en donde se pueden analizar los éxitos y fracasos registrados.

Así, al fijar nuestra vista en América, observamos a Méjico como primer país que ha vivido, a partir de 1910, una sangrienta revolución agraria para enseñar que el hombre no debe explotar al hombre, sino a la tierra, y aun a ésta, en forma racional. En su proceso evolutivo ha quedado como sedimento, entre otros conceptos, el de que «pequeña propiedad no debe significar pequeña economía, sino independencia económica», y, en procura de ello, hoy todavía preocupa la solución de aquel problema que enardecía al trabajador del surco para lograr su dignificación social.

En la República Argentina la acción colonizadora ha sido considerada en la nueva Constitución previendo las necesidades del presente en cuanto a la alimentación local y mundial, explotación racional de la tierra y amparo del núcleo familiar que explota.

Si bien es cierto que he de referirme en líneas generales a los distintos preceptos que caracterizan el proyecto en cuestión, deseo significar que más adelante he de distraer la atención de esta Honorable Cámara, en cuanto a dos problemas concretos que como hombre de campo siento el deber de analizar, es decir, el de la función social de la propiedad y el de la explotación racional de la tierra.

Antes de abordar en forma precisa estos problemas, es mi intención esbozar consideraciones generales del proyecto en debate.

Podemos afirmar, como síntesis de las concepciones modernas que surgen del presente des-pacho, que el nuevo tipo del agricultor que el Justicialismo va forjando no puede conformarse con las satisfacciones materiales únicamente, y, en consecuencia, se antepone al factor netamente económico el factor social, que es fundamental para obtener la radicación efectiva del agricultor en el agro.

Este proyecto contempla todos los aspectos de la vida rural en su vinculación con el régimen de la tierra, desde que armoniza sus preceptos con los de la ley 13.246, con el crédito agrario, con el cooperativismo y con la ciencia agropecuaria, a fin de que se logren, justamente, con la tranquilidad del trabajador del campo, las producciones que los mercados interno e internacional demandan.

El articulado que conforma la iniciativa del Poder Ejecutivo evidencia marcado acierto en el enfoque del problema, serenidad en el dictado de soluciones y preocupación por la dinámica funcional a fin de alcanzar la concreción de sus objetivos a la mayor brevedad.

La experiencia recogida en la aplicación de la ley 12.636 así como las directivas que se imparten sobre la materia en la Constitución nacional de 1949 y en el segundo Plan Quinquenal han servido de base para la estructura de este proyecto, el que, justo es destacarlo, tiene la virtud de cristalizar las directivas de gobierno que reiteradamente expusiera nuestro líder, el general Perón.

Al entrar en materia deseo significar muy especialmente la participación directa de los auténticos productores de nuestro agro en la acción colonizadora del futuro. Corroboran lo expuesto los artículos 2º y 74 del proyecto, por medio de los cuales el trabajador rural inter-vendrá en la concepción de los planes colonizadores así como en la ejecución en campaña de las labores inherentes a la colonización y, por último, en la supervisión de la obra misma.

El artículo 3º impone como funciones y deberes del organismo de aplicación el otorgamiento de préstamos especiales de habilitación e instalación a plazos convenientes para la construcción de la vivienda rural y para toda mejora económicamente necesaria así como para la comercialización e industrialización de los

productos, sin descuidar la compra de elementos indispensables para las explotaciones. Ello significa que el agricultor contará no sólo con la tierra fraccionada en unidades económicas acordes con sus necesidades familiares y posibilidades de productividad, sino con toda la ayuda crediticia que la explotación demande y que la vida diaria imponga.

No se descuida, por cierto, la educación rural en las escuelas, desde que los hijos de los agricultores contarán desde sus primeros años con la preparación orientadora a los efectos de sentirse arraigados a la tierra que les da sustento y bienestar.

Igualmente, entre otros deberes del organismo de ejecución, se impone en el artículo 3º, inciso o), la necesidad de que para la aplicación del presente proyecto se cuente con una repartición técnica especializada.

En cuanto a la orientación de los planes colonizadores que estipula el artículo 6º, inciso c), en el sentido de fraccionar las grandes extensiones que no cumplan con su función social, cabe remitirnos a la doctrina peronista, que precisa el concepto de latifundio, no en función de las superficies, sino del trabajo eficiente como factor de productividad.

Se parte para ello del principio por el cual se han de proteger y fomentar, dentro de la aplicación de las leyes agrarias, los esfuerzos, la inteligencia y la actividad de los hombres de campo que por diversos medios hacen cambiar la estructura de los elementos naturales, a efectos de obtener una explotación del suelo más susceptible de progreso.

En cuanto a las finalidades de los futuros planes de colonización, observamos que, en primer lugar, han de incorporarse nuevas tierras para la explotación agropecuaria, es decir, preferentemente las tierras incultas o irracionalmente trabajadas, a fin de incrementar la producción con relación al consumo regional y a la demanda de los mercados, a la economía de los transportes y a la ecología zonal.

Otra importante finalidad consiste en transformar a los productores arrendatarios o aparceros en propietarios de la tierra que trabajan; elevar el índice de vida y la seguridad social de los agrarios; promover la expansión de centros poblados y facilitar el acceso de los hijos argentinos de los auténticos productores a la actividad y propiedad agrarias.

Es evidente que se desea arraigar el núcleo familiar previendo la perpetuación de la familia agricultora en el campo al brindar a los hijos de los colonos posibilidades de tierras a fin de que sigan las actividades de sus padres.

Señor presidente: un aspecto fundamental que debemos comentar se relaciona con el precio de la tierra para su adquisición. Este tendrá en cuenta los rendimientos físicos de los últimos diez años y será fijado conforme al

valor productivo promedio del quinquenio inmediato pasado, sin descuidar su relación ponderada con la valuación fiscal y valores venales promedios para terrenos similares de la zona en igual período. En definitiva, el valor de productividad decidirá fundamentalmente el precio de la tierra.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, doctor Oscar E. Albrieu.

Sr. Siboldi. — En cuanto a la forma de adquisición de las tierras, me permito señalar que la misma se hará por convenio, licitación o en remate público, no aceptándose la compra directa que venía aplicándose en el régimen estatuido por la reglamentación sobre fomento especial de colonización.

Es oportuno significar calurosamente que un proyecto como el presente, de auténtico sentir revolucionario, dicte normas de respeto por la propiedad que ningún gobierno popular del mundo impusiera. En efecto, las presentes normas no permiten la expropiación por decreto, y sólo aceptan la vía expropiatoria con la intervención de este Honorable Congreso.

En consecuencia, cumplo un deber de peronista al hacer notar esta trascendental medida que ratifica en los hechos el pensamiento de nuestro líder y su firme decisión de respetar la propiedad, es decir, el derecho de los demás, sin por ello demorar la entrega de la tierra a los auténticos productores del agro cuando esa tierra inculta o con un grado de explotación deficiente se haga acreedora al dictado de leyes especiales de expropiación.

Hechos concretos ratifican este deseo que surge del proyecto. La Honorable Cámara ha de recordar la ley 14.272, por la cual se declaran de utilidad pública con fines de colonización y susceptibles de expropiación todas las tierras rurales de la isla de Choele Choel, General Conesa, Frías y Valle de Viedma.

Por el artículo 3º de dicha ley se autoriza al Poder Ejecutivo nacional para que declare la inafectabilidad de los inmuebles rurales que cumplieren con la función social de la propiedad privada. Quiere decir que dentro de las expropiaciones zonales se desafectan y, por lo tanto, no se toma posesión de los inmuebles trabajados, sino solamente de los incultos.

Para ello el Ministerio de Finanzas, previa inspección técnica en todas las propiedades afectadas, ha confeccionado un proyecto de decreto reglamentario de la ley donde se dan las bases de desafectación, atento a las cuales, los propietarios que tienen tierras trabajadas contarán con el amparo del Estado. Así se respetan todas las superficies en explotación hasta 100 hectáreas y siempre que se cuente con superficie bajo cultivo.

En definitiva, a los actuales productores se les respeta y aun se les entregan tierras adicionales siempre que dispongan de cultivos intensivos en sus predios.

Para el supuesto de aquellos propietarios que no han trabajado la tierra, y que esperan que la sociedad se las valore con claro sentido de especulación, contarán —si demuestran condiciones para el trabajo rural— con las ventajas de la colonización y del crédito agrario, desde que se prevé otorgar preferencia en los planes de colonización oficial. En caso contrario las referidas tierras serán expropiadas en favor de los que, si bien no ostentan títulos de propiedad sobre las mismas, cuentan con los conocimientos y los brazos que la zona exige para su incorporación a la riqueza nacional. Cabe destacar que las tierras se entregarán al mismo valor de adquisición por el Estado y costo de las obras hidráulicas.

Dentro del capítulo del régimen de expropiaciones, y con el propósito de asegurar y mejorar el abastecimiento de alimentos protectores, como lo prevé el segundo Plan Quinquenal, se estipula en el artículo 16 del proyecto un porcentaje de superficies aptas sobre predios rurales que, próximos a centros poblados, deben orientarse hacia la producción hortícola, granjera y tambara.

Al respecto es satisfactorio aludir que el artículo 17 facilita la incorporación de esas producciones por parte de los actuales propietarios mediante el otorgamiento de créditos agrarios para la adquisición de todos los elementos necesarios a los fines señalados. Y más aún, se prevé la estipulación de plazos para el debido cumplimiento de la norma, y todo ello en procura de una mejor alimentación de nuestras poblaciones y de una acertada utilización de la tierra rural, con una mayor rentabilidad del suelo agrícola, precisamente en favor de los actuales titulares del dominio. Claro está que si los propietarios afectados han de ser insensibles a los requerimientos de la comunidad, desde que no tendrán justificación aceptable, esta Honorable Cámara tomará intervención para impulsar las expropiaciones que se estimaren oportunas.

Otro aspecto importante a destacar es el que se refiere en el artículo 23 a la participación de las universidades nacionales en la investigación y experimentación agropecuarias, juntamente con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, a fin de implantar en cada colonia institutos de investigaciones, chacras experimentales y demostrativas o estaciones zootécnicas si se estimaren indispensables o necesarias.

Señor presidente: el artículo 28 merece una particular consideración por esta Honorable Cámara, desde que estipula que se estimulará el parcelamiento de tierras suburbanas en procura de radicar obreros que deseen explotar tierras

con su trabajo personal y/o el de su familia en forma subsidiaria o substitutiva de su actividad habitual.

Al mencionar la palabra «obreros» me refiero a obreros del campo y de la industria.

Este tipo de colonización surge como derivado del nuevo ritmo que adquiere la vida económica en los distintos países civilizados del mundo, considerando la agricultura no ya como actividad exclusiva, sino como auxiliar de otras actividades, en algunos casos, o como punto de partida para la transformación del elemento urbano en elemento agricultor.

La superconcentración obrera en las grandes ciudades obliga a pensar en el movimiento de la ciudad hacia la campaña, a los fines de contrarrestar el fenómeno del éxodo rural y también a efectos de proporcionar mayor estabilidad económica al personal de la industria.

Sin embargo, toda redistribución de la población urbana tropieza con serias dificultades. Una de ellas estriba en la casi imposibilidad de trasplantar un elemento a la campaña con carácter estable o definitivo. La mayoría de las personas de la ciudad que se han ido, cambiando de manera brusca su modo de vivir para dedicarse a las faenas rurales, han tenido a la larga que fracasar.

Esto se explica por la marcada diferencia de la vida del campo con la ciudad, en su amplia acepción sociológica.

Ante ello, si esa colonización se efectúa próxima a la ciudad, todos los inconvenientes de la vida aislada desaparecen. Tanto la mujer como el hombre quedan cerca del primitivo eje de sus actividades. El núcleo familiar puede continuar con sus ocupaciones habituales de la ciudad, hasta que sus actividades agrícolas empiecen a rendir lo suficiente como para subsistir y prosperar.

Obreros de las fábricas en los centros industriales y obreros rurales de los pueblos de campaña constituyen un elemento deseable para ser colonizado, pues ésta es la mejor forma de prestarle amparo, especialmente ante paros forzosos como consecuencia de la actividad estacional en el caso de los obreros rurales.

Este sistema constituye el mejor recurso para estabilizar la población obrera de la campaña, evitando su nomadismo por causas de estacionalidad en la producción agrícola y, a la vez, asegurar una permanente fuente de trabajadores en las distintas zonas del agro.

En cuanto a la adjudicación de unidades económicas, me permito observar la preferencia que se les otorga a los arrendatarios o aparceros para que logren el ansiado título de propiedad. Asimismo, por el artículo 35 se prevé la reserva de hasta el 25 % de las unidades económicas para adjudicarlas a corrientes migratorias provenientes de Europa congestionada. En este sentido, es de sumo interés significar la importancia del artículo 36, por el cual el banco

deberá colaborar con las autoridades nacionales pertinentes en la selección por aptitud profesional de los inmigrantes campesinos, dando preferencia a los que introduzcan capitales y equipos mecanizados para la explotación adecuada del suelo agrícola.

A este respecto, es lógico que el Banco de la Nación Argentina, como órgano responsable de la obra colonizadora estatal, tome participación directa en la selección de las corrientes migratorias, desde que igualmente toma participación directa en la selección de los agricultores argentinos. Si es responsable para con los nativos, debe igualmente serlo para con los extranjeros.

Continuando con mi análisis, debo manifestar que alienta nuestro espíritu de peronistas la previsión del artículo 37, por el cual el jefe de familia que contara con seis hijos de cualquier sexo, o cuatro varones mayores de 14 años que colaboren con él en las tareas rurales, podrá solicitar unidades económicas adicionales al predio original otorgado por colonización. Esta medida concurre en apoyo de la familia argentina agricultora y armoniza con el artículo 40, inciso f); por el cual se reducirá del precio de venta del predio el 5 % por el nacimiento de cada hijo del adjudicatario. Por otra parte, adquiere así especial magnitud el artículo 37 de la Constitución, en lo referente a los «derechos de la familia».

El capítulo relativo a la venta y forma de pago de las unidades económicas que se han de entregar a los productores, revela un claro principio sostenido por la doctrina peronista y evidencia la preocupación del gobierno por el trabajador del agro. Tanto el precio de venta de la tierra como sus cuotas de amortización y tasas de interés observarán, a partir del dictado de estas normas jurídicas, directa relación con el real valor de productividad. Quiere decir que el precio de venta está en función del rendimiento de la tierra y acorde con el rendimiento se ha de regular la forma de pago, todo lo cual desplaza cualquier factor de especulación ajeno a la tierra misma. En consecuencia, el productor logra con este artículo una máxima protección, desde que podrá mediante su labor habitual atender con normalidad el pago del predio, seguro de que, al contar con sus brazos de hombre de trabajo, cuenta con su título de propiedad.

Por lo tanto, los años en que habrá de amortizar su deuda dependerán del grado de productividad de la tierra y de la organización agropecuaria que se establezca. Así, a partir de los diez primeros años de su radicación en el inmueble, en cualquier momento, mediante amortizaciones extraordinarias, podrá contar con el anhelado título de dominio.

El capítulo referente al «fondo de ahorro» servirá, entre otros beneficios, para educar al

productor en la tendencia de previsión que el Estado viene fomentando en bien de la familia argentina.

Entiendo que merece un comentario el capítulo referente al título de propiedad y sus caracteres. Al efecto, señalo el artículo 61, en cuanto a la prohibición de que se subdividan las unidades económicas otorgadas en propiedad en el tiempo y en el espacio. Se desea evitar el minifundio, y sólo se podrán autorizar las divisiones del caso cuando a juicio del organismo colonizador, fundadas razones de orden técnico lo aconsejaren.

Es importante aludir al artículo 69, inciso e), por el cual todos los agricultores que adquieran tierras incultas, en extensión no mayor de 100 hectáreas, con destino a explotaciones hortícolas, granjeras o tamberas y que vivan en ellas con sus familiares, trabajándolas directamente por cuenta propia, contarán con la exención de impuestos territoriales por el término de cinco años. Se favorece así al pequeño productor y se alienta la subdivisión de predios particulares en procura de objetivos que la comunidad requiere.

En cuanto a la colonización privada, se la fomentará con la adquisición de los campos que los propietarios deseen fraccionar, y en el caso de que dichos campos estuvieren ocupados, se prevé la inclusión de sus actuales productores en el régimen de la presente ley.

Un aspecto fundamental por el que ha fracasado prácticamente la ley 12.636, se refiere al régimen financiero de la misma. De acuerdo a disposiciones del Ministerio de Finanzas, el Banco de la Nación Argentina cuenta durante el presente Plan Quinquenal con 200 millones de pesos anuales para su obra de colonización. Con esta suma, el banco ha efectuado ya el año pasado una licitación pública para la adquisición de tierras en todo el país y está por anunciar otro nuevo llamado en procura de adquirir tierras aptas para explotaciones hortícolas, granjeras y tamberas. Asimismo, con ese dinero, el banco atiende en estos momentos las obras inherentes a la colonización de las tierras sujetas a riesgo estatal en zonas de Río Negro y Escoba.

Otro problema que se enfoca con espíritu realista es el que se refiere a la colonización con las provincias y territorios nacionales. Por este proyecto, las provincias, además de aplicar sus leyes de colonización y recursos, gozarán de la asistencia técnica y financiera del Banco de la Nación Argentina si se adhieren y desean la ejecución de esta ley.

Señor presidente: surge claramente, luego de este análisis, que la estructura legal que debatimos precisa concretamente la posición del gobierno en la materia. Deseamos, en definitiva, para el productor del agro la propiedad de la tierra, y desplazamos todo sistema ajeno a la

misma, desde que, en definitiva, no lleva la tranquilidad anhelada por la familia rural argentina.

Sin duda, la propiedad en función social es el objetivo de las actuales masas populares de trabajo en el mundo; y ello alcanza máxima ponderación mediante la entrega de la tierra a precios de productividad y no de especulación, con facilidades que caracterizan las obras de fomento.

Las revelaciones estadísticas evidencian celeridad en la ejecución de los planes colonizadores, y ello es también motivo de satisfacción para nosotros. Existe el antecedente que desde 1940 a 1946 fueron adjudicadas en materia de colonización oficial 55.652 hectáreas, en seis años de gobierno. Subrayemos que en los seis años siguientes se registra una entrega total de 783.775 hectáreas, que interesa a unas 36.984 personas. En el lapso comprendido entre la iniciación del segundo Plan Quinquenal (enero de 1953) y septiembre pasado, se han adjudicado y están en ofrecimiento 1.131.966 hectáreas, incluyendo el problema indígena. Además, se encuentran en proceso de habilitación 210.507 hectáreas, de las cuales 5.537 pertenecen a zonas de riego.

Por otra parte, a modo de ilustración con referencia al apoyo del gobierno en favor del agro, corresponde anunciar que el crédito agropecuario del Banco de la Nación Argentina asciende, atento a sus recientes estimaciones, a 6.200 millones de pesos durante el último año agrícola.

Es menester significar, asimismo, que el banco aludido ejecuta la obra colonizadora hasta la fecha, de acuerdo con las atribuciones que le otorga la ley 12.962 de 1947, es decir, su carta orgánica, en los artículos 4º y 25 inciso a). Además, su labor colonizadora se confirma por decreto 21.258, referente a la determinación de la responsabilidad principal del Ministerio de Finanzas, en el cumplimiento del segundo Plan Quinquenal al respecto. Por su parte, la ley 14.184 prevé la materialización de la colonización únicamente con recursos del sistema bancario. Y además, el decreto 13.378 del 11 de agosto de 1954, reglamentario de la ley orgánica de los ministerios, en el artículo 94, inciso 11, le otorga como función específica al Ministerio de Finanzas «la colonización en tierras de origen privado, según los planes vigentes».

Todo ello confirma que las atribuciones que otorgamos al Banco de la Nación Argentina son fruto de su experiencia y preocupación, desde que a partir de 1951 ha creado una gerencia especializada con técnicos del Ministerio de Agricultura y Ganadería de reconocida versación práctica en la materia, según propias manifestaciones públicas de auténticos agricultores del país.

Hasta esta altura he distraído la atención de la Honorable Cámara, refiriéndome en líneas generales a los aspectos más sobresalientes en bien del campo argentino. He reservado dos temas, como dijera al principio de mi exposición, y que considero de especial trascendencia en la reforma agraria que se propicia. Se trata, como ya aludiera, de la función social de la propiedad y de la explotación racional de la tierra. Como legislador peronista, deseo aportar mi pensamiento y reflexión con referencia a tan fundamentales aspectos, a fin de colaborar con esta Honorable Cámara en procura de esclarecer conceptos y apoyar calurosamente las prescripciones del proyecto.

Por lo tanto, paso, con la anuencia de la Honorable Cámara, a considerar la función social de la propiedad según estipulaciones del presente proyecto de ley y normas constitucionales.

Al referirnos concretamente a los principios revolucionarios del artículo 1º del proyecto que nos ocupa, es imprescindible recordar los lineamientos rectores de la Constitución Nacional peronista, como así antecedentes y definiciones que ilustran con referencia a la función social de la propiedad.

La evolución del agro argentino ha superado el estrecho molde que le demarcara la Constitución de 1853, en lo referente a la tendencia individualista de la propiedad, por lo que fué menester la creación de un estatuto legal distinto que responderá a una protección jurídica del elemento humano que puebla la campaña.

Es evidente que la actual Constitución considera integralmente el régimen de la tierra acorde con su creciente socialización.

En consecuencia, el dominio se inclina hacia una función pública, desplazándose la «propiedad especulación» por la «propiedad función», en donde el trabajo traza firmes orientaciones.

Se ha dejado sentir, una vez más, en el nuevo derecho la incidencia de los fenómenos económicos.

Las acciones bélicas han asumido importante papel en el proceso evolutivo de la propiedad función al disponerse medidas de emergencia en bien de la colectividad.

Comentando tales hechos, Salvat expresa: «Evidentemente, no puede decirse que el derecho de propiedad sea un derecho absoluto cuando tantas disposiciones han venido a restringir en forma tan considerable los poderes del propietario.»

Desde tiempos remotos se preconizaba la tendencia de llevar a los hombres hacia una justicia social.

Santo Tomás de Aquino pensaba que: «En la necesidad todas las cosas deben hacerse comunes.» Y San Ambrosio, por su parte: «Nadie puede llamarse propietario de lo que resta después de satisfacer sus necesidades naturales.» En la evolución del concepto encontramos defi-

niciones de Dugüit, Comte y Haurieu, por demás orientadoras, en donde han quedado impresas ideas concretas y claras, como por ejemplo «la propiedad es una institución jurídica que se ha formado para responder a una necesidad económica».

Aun con los viejos moldes de nuestra Constitución pasada, la Corte Suprema de la Nación, acorde con la socialización de la tierra, declaró en una oportunidad: «No puede ponerse en duda que interesa a la comunidad en conjunto la situación económica de los distintos grupos que la constituyen y que, tratándose de la suerte de la mayoría de la población, no son solamente coincidencias de humanidad y de justicia social las que reclaman la intervención (del Estado), sino también su interés directo, ya que es elemental que una situación afligente del mayor número tiene que repercutir desfavorablemente sobre la economía general, dada la vinculación lógica de todos los intereses materiales.»

Asimismo, no faltan valiosas citas en reuniones de estudiosos en Argentina, como la del primer Congreso Nacional de Derecho Civil de mayo de 1927, en el que se expresó: «El concepto individualista absoluto bajo el cual está organizada la institución del dominio debe ser substituído por otro más amplio, que concilie el interés social y particular, garantizando el uso y goce de la propiedad raíz mientras se mantenga en acción conforme a su destino. El Estado debe intervenir para que la propiedad cumpla la función social que le es propia.»

Coincidiendo con las orientaciones expuestas en la tercera conferencia nacional de abogados de 1933, registróse la opinión del doctor Lafaille en el sentido de «que el dominio, cualquiera sea la naturaleza de su objeto y en particular el relativo a los inmuebles, debe ser reglamentado por ley con el criterio de que no sólo envuelve derechos para su titular, sino también obligaciones a cargo de éste frente a la colectividad».

Por otra parte, la «declaración de los Derechos del Trabajador» vino a enriquecer la doctrina sobre defensa económicosocial de la masa laboriosa del agro argentino. Con ella pudo ampararse el desalojo de miles de productores que la ley no contemplaba, imprimiendo real carácter de función social a la propiedad rural.

Lo expuesto nos obliga a citar los artículos 38 y 68, inciso 16), de la Constitución Justicialista, cuyos conceptos animan la portada del presente proyecto de ley, quedando cumplida la promesa del excelentísimo señor presidente general don Juan Perón, cuando dijera: «Los hombres que trabajan la tierra reclaman mejoras, y aspiramos a establecer definitivamente que en este país se considere inaceptable que la tierra sea un bien de renta, sino que debe pertenecer al que la fecunda con su esfuerzo. No podemos realizar este propósito de una sola vez, pero les

prometo que, encarado y resuelto el problema de la tierra, no habrá un solo argentino que no tenga derecho a ser propietario en su propia patria.»

Y en este orden de ideas, reiteró en otra oportunidad: «Aumentar el número de los propietarios es el camino mejor para aumentar el número de los satisfechos.»

Observamos así que ya la legislación social, a raíz de la preocupación de nuestro gobierno, ha dejado de avanzar con sensible predominio de lo urbano postergando al trabajador rural. Se tiende a detener el crecimiento desmesurado de las ciudades, si él ha de realizarse a expensas de la despoblación de la campaña; peligro que se corría si no se amparaba debidamente al campesino, si no se le alentaba y facilitaba una mayor acción, procurando más digna y llevadera su vida de trabajo, creadora en gran parte de la riqueza nacional.

Argentina vive, en consecuencia, horas de profunda transformación. Aquellos principios de justicia económicosocial que hicieran conmover a la masa popular a través del actual gobierno van quedando grabados con letras de pueblo, con proyectos legislativos como el presente, para satisfacción de los que aspiran al bienestar de sus semejantes y a un porvenir venturoso para la patria.

Por último, me permito abordar el tema anunciado sobre la explotación racional de la tierra y la conservación de los recursos naturales.

Un aspecto de fundamental importancia, que entiendo debe ser expuesto con especial detención, es, sin duda, el que se alude en el artículo 69, incisos c) y d), y sus artículos correlativos 41, inciso c), y 63.

En efecto, el artículo 69 aludido se refiere a las previsiones de los planes colonizadores en cuanto a sus finalidades, es decir, obliga en forma concreta: «Explotar científicamente las tierras que se subdividan» y «Conservar los recursos naturales del agro argentino.»

Guarda relación con dichas medidas el citado artículo 41, inciso c), que estipula como obligación de los adjudicatarios: «Realizar la explotación con sujeción a leyes y reglamentos agrícolas y ganaderos, cumpliendo con las normas de explotación que establezca el banco, a fin de que especialmente en el cultivo y manejo del suelo sean aplicados los procedimientos científicos.»

Además, el mencionado artículo 63 especifica que una vez otorgado el título de dominio, el propietario deberá mantener el predio en grado racional de productividad, obligación ésta que regirá para los sucesivos adquirentes sin término de prescripción.

La trascendencia del problema que se aborda me impone, como hombre de campo, hacer ciertas reflexiones que han de servir para ilustrar

sobre el tema que legislamos y, en procura de exponer los aspectos de mayor significación, me referiré especialmente a la erosión en su vinculación con el régimen de la tierra.

Es sabido que la erosión lleva consigo las partes más tiernas de todo terreno constituido por capas de naturaleza diversa, dejando al descubierto —como úlceras— las partes duras que forman, por lo general, figuras caprichosas, como mueca irónica de la naturaleza hacia la impotencia o desidia del hombre.

La erosión agrícola consiste, en pocas palabras, en el «arrastré por el viento y el agua de la capa superficial más valiosa de las tierras de cultivo y que puede llevarlas a una completa esterilidad».

Ya ha demostrado la experiencia cómo se llega a la degradación del suelo agrícola ante constantes cultivos de una misma planta por espacio de años. Esta degradación es el punto de apoyo por el cual el viento y el agua pueden producir, sin mayor resistencia, sus efectos destructivos, y llegamos así a la capa superior del suelo, fácil de ser desplazada, produciéndose como lógica derivada del fenómeno de la erosión ante los ojos asombrados del hombre.

La arqueología ha demostrado al mundo, por serios estudios, que el hombre —más que el clima— ha transformado regiones productivas y pobladas en pobres y abandonadas.

Se dice que quinientas ciudades florecieron antes en lo que ahora son las tierras secas y desiertas de Asia Menor. Sin negar importancia a otros efectos, como guerras, pestes, sequías, etcétera.

El abuso del cultivo o el descuido del mismo parece gravitar en la decadencia de las antiguas civilizaciones.

En nuestros días muchas voces han aclamado la defensa del árbol y de la fauna. Sin duda, estos principios hay que llevarlos no sólo a medidas orientadoras de nuestro derecho rural, sino —y esto quizá sea más efectivo en la vida práctica— a las escuelas, en donde se le enseña al niño el amor a la patria a través de la historia; con ese mismo fervor debe educarse su alma, despertándole el amor hacia la naturaleza, ya que a ésta la concebimos sin fin, siendo su parte esencial las riquezas naturales. Estas, así como las recibimos de anteriores generaciones, tenemos el deber moral de legarlas a las que nos seguirán en condiciones aceptables: ni disminuídas, ni destruídas.

Han llegado a ser tan dramáticos los perjuicios de la erosión en ciertos países y en otros tiempos que se la cita hasta como causa probable de caída de imperios —como el de Roma—, «apresurada por la influencia sobre la agricultura del agotamiento de los suelos superficiales fértiles».

Sin duda, al pisar el hombre blanco tierra americana, estalló un conflicto sordo entre las

reacciones humanas y las creaciones naturales.

Afortunadamente, se ha hecho hoy conciencia de los errores cometidos contra las riquezas de la naturaleza, no dudando ya que el equilibrio de la vida se resiente ante la eliminación irracional de alguno de sus elementos naturales, así como —y esto es fundamental— de que «las tormentas de tierra las levanta la ignorancia» y la explotación irracional del suelo nos lleva a la erosión.

Ese laboreo de la tierra divorciado de la técnica agronómica, como muestra evidente de improvisación y de carencia de legislación adecuada, produce la sorpresa de «la vejez prematura de la tierra».

La conciencia universal condena hoy la devastación de riquezas naturales. Debemos agrandar nuestra patria por el respeto y el amor a la naturaleza.

En asambleas internacionales, cuando América planeaba para la paz en un mundo convulsionado, trazando sendas hacia la prosperidad y persiguiendo objetivos interamericanos, se recomendaba ya la adopción y enseñanza de sistemas para la conservación del suelo y de las aguas, preocupación de gobernados y gobernantes, para alcanzar la máxima eficiencia del suelo agrícola en armonía con sus fuerzas naturales, concurriendo a la superación de la vida del productor tanto como al mejoramiento de la vida misma de la tierra.

Sensible cantidad de agricultores pisan ya subsuelo, sin llegar a percibir que bajo la planta de sus pies ha dejado de existir el suelo. Las pérdidas que esta ulceración de la tierra produce es tan significativa que perturba el espíritu de todo hombre consciente, llevándolo a decisiones firmes para contener este avance de miseria.

Davis, en una publicación oficial, estima que los ríos de Norteamérica llevan por año al mar 870 millones de toneladas de material en suspensión, con lo cual podría cubrirse un kilómetro cuadrado de terreno, con un sedimento de unos 600 metros de espesor.

Estimaciones de Bennett señalan que «más de 20 millones de hectáreas agrícolas han quedado prácticamente devastadas en la parte continental de los Estados Unidos; la productividad de otros 20 millones se ha reducido en forma tal que los ha transformado en terrenos marginales; progresando la erosión en otros 80 millones de hectáreas».

Se calcula que un 63 % del Estado de Alabama se halla con muestras de erosión, y que probablemente un 29 % se halle seriamente afectado. En igual orden de conceptos, el Estado de Iowa presenta el 58 % con evidencia de erosión y el 18 % con afectación definida. El Estado de Nueva York tiene un 34 % de su superficie con señales de erosión, según publicaciones que datan ya de varios años.

El Instituto de Suelos y Agrotecnia de nuestro país llegó en 1943 a la conclusión de que sobre una superficie de 20 millones de hectáreas que cubrió el relevamiento practicado en la zona de suelos arenosos, 4,1 millones de hectáreas presentaban erosión ligera y moderada, 7,2 millones de hectáreas erosión moderada a severa, y 4,6 millones de hectáreas erosión severa a grave. De tales observaciones surgió el cálculo probable de la desvalorización de las tierras ante la pérdida de fertilidad, que se estimó en unos 300 millones de pesos como mínimo.

En nuestro país se ha observado la erosión de suelos arenosos y clima seco dentro de su gran zona semiárida central, presentando intensidad la erosión eólica al Sur de Córdoba, Oeste y Sur de Buenos Aires y especialmente en la provincia de Eva Perón, así como en San Luis, en su departamento Pedernera, hacia el rumbo Sur.

A raíz del problema que presentó una prolongada sequía por dichas zonas, he de aludir a un informe oficial de hace algunos años sobre los factores que provocaron alarma en la productividad agrícola, por la batalla que a ésta le iba ganando la erosión. Me permitiré bosquejar algunos de dichos factores, como lamentable experiencia en el problema, y su vigoroso enfoque en el Plan de Gobierno, que firmemente viene desarrollándose por iniciativa del general Juan Perón, no sólo en bien de mi país sino del continente todo, al tender hacia un acrecentamiento de productos alimenticios que se canalizan en favor de pueblos cuyas necesidades los reclaman, pues en política internacional ha reiterado, en nombre del pueblo argentino: «No somos ricos, pero todo lo que tenemos lo ponemos a disposición de los pueblos que lo necesitan y de los pueblos hermanos a quienes pueda ser de utilidad nuestra ayuda.»

Se dijo en el informe aludido, que la sequía que venía sufriendo esa zona por espacio de una década era muy probable que se relacionara con la actividad del hombre «alterando el equilibrio ecológico natural por la destrucción de los bosques nativos en gran escala y por la destrucción del tapiz vegetal herbáceo de la llanura».

Se señaló, además, entre los factores humanos causales de la erosión, en cuanto a su faz técnica, al desmonte y roturación de praderas nativas, al laboreo del suelo en seco y monocultivo, al pastoreo excesivo de los campos y a la explotación inadecuada, entre otros.

Pero sin duda se recalcó, asimismo, la sensible influencia de los factores económicosociales sobre erosión eólica.

Por lo general, la explotación del suelo por el hombre se hace en relación directa con la obtención del mayor rendimiento productivo, sin interesar la conservación de aquél, desbordándose sus ambiciones hacia el abuso.

Ese abuso tuvo marcado aliado en la colonización inadecuada. El ejemplo más ilustrativo lo representó la provincia de Eva Perón: ahí se exigía a la tierra más de lo que ésta podía dar; no se la protegía ni técnica ni legislativamente.

El régimen de la tierra, basado en el arrendamiento, presentaba la exigencia, por parte de terratenientes y sociedades anónimas, de producir los colonos la cosecha fina, es decir cereales, principalmente trigo, este último con mercado firme, lo que aseguraba la rentabilidad del suelo para su dueño.

El monocultivo que se venía haciendo, con la prohibición de implantar otros cereales o leguminosas, así como con la eliminación de la ganadería, o su limitación por disposiciones contractuales evidentes o soslayadas, sin compensación alguna para el productor progresista cuyo espíritu de trabajo le aconsejaba la plantación de árboles o mejores organizaciones, produjo frente a la carencia de lluvias el cuadro desolador de una tierra rica, pero marcadamente pobre a la vez, por aquellos que ostentaban el derecho de propiedad, para cubrir sus ambiciones personales, sin interesarles la función social del suelo agrícola.

Además, a la colonización privada se la orientó sin asesorar técnicamente al productor, transformándola en simple comercio de un grupo que entendió el negocio y se largó a él, sin sospechar las consecuencias de improvisaciones para aquellos agricultores que anhelaban dejar a sus familiares como herencia un pedazo de tierra que se pudiera acariciar como propia y cuidar como tal, para progreso de ellos y del país.

La derivación inevitable y fácil de prever fué, en cuanto a la física del suelo, su erosión, pues se obligaba al colono a trabajar los campos en períodos secos —con el volado de centenares de miles de hectáreas de tierra, y la formación de médanos—, bajo la excusa ingenua y maligna del terrateniente, de que convenían tales labores ante una posibilidad de lluvia inesperada.

Así perdía el colono sus jornadas, sus semillas, herramientas y, lo peor, sus esperanzas y anhelo de arraigo a la tierra, la que recibía sus lágrimas de dolor, por el juego de la naturaleza y lo cruel de sus explotadores.

Hasta la colonización oficial de otros tiempos lamentamos. Puede citarse el caso típico del Banco Hipotecario Nacional, que con el propósito de facilitar al agricultor el acceso a la tierra implantó sistemas de arraigo mediante facilidades para transformar campos de monte en tierras agrícolas. Se fundaron así unas 300 colonias, su mayor número en la región arenosa, por la provincia de Eva Perón, al Sur y Oeste de Buenos Aires, Sudeste de Córdoba y Sur de San Luis.

Siete mil familias vieron fracasados sus esfuerzos por esos planes que no armonizaron con las leyes que impone la naturaleza. El presidente de la institución llegó a decir sobre la rentabilidad de esas tierras «que en la época de la venta apenas alcanzó a la suma de los servicios hipotecarios del año», habiendo descendido paulatinamente a un grado tal que calificó «de ruina para gran parte de los colonos».

El mal inicial se basó en ignorar la constitución edáfica de las tierras, los factores climáticos característicos de la zona, y en parcelar sin atender magnitudes agropecuarias adecuadas.

Como consecuencia objetiva, dicho Banco registró, en 1934, 2.530 subastas fracasadas, otorgando 4.679 prórrogas y administrando directamente 1.750.000 hectáreas adjudicadas a la institución luego de dos tentativas de remate sin éxito.

Fué necesario más tarde planificar mejores magnitudes de explotación, para establecer organizaciones agrícolas ganaderas acordes con el medio ambiente, estableciendo como medida previa unidades económicas que permitieron en el curso de los últimos años una recuperación de la economía individual, hasta hace poco totalmente fracasada.

Asimismo, el crédito debió orientarse hacia la adquisición de ganado, procurando diversificar la producción.

En resumen, se debió planificar el trabajo y arraigo del productor, sin dar la espalda a las fuerzas de la naturaleza, llegando a comprenderla e interpretarla.

Por la felicidad de sus habitantes, por la prosperidad de sus industrias, por la consolidación de su emancipación económica, el actual gobierno justicialista, interpretando las leyes de la naturaleza y creando la justicia social para todos los que pisan tierra nuestra, promueve legislaciones como la presente, anteponiendo los derechos del pueblo a los derechos individuales.

No olvida por ello a aquel que, amparado por un gobierno protector del débil, desvíe su deber para con la sociedad perjudicándola, al devolverle una tierra estéril, luego de recibirla productiva.

Se tiende a precisar con la técnica y los años de experiencia de los productores lo que debe producir cada zona, para orientar la producción sobre bases estatales y facilitar al trabajador rural una vida mejor, de superación, y a la patria la conservación de sus fuerzas naturales en el espacio y en el tiempo.

Medida de tal significación social nos lleva no sólo a determinar zonas marginales, sino también productores marginales.

Hoy no sólo se prohíbe la explotación indeseable del hombre, sino la explotación irracional, igualmente repudiable, de la tierra.

Por otra parte, aquel agricultor que por desidia, ignorancia o conveniencia mal entendida pretenda extraer de la tierra más de lo que ésta puede dar, ya encuentra firmes directivas que lo desvían de ese camino de destrucción. Así se prevén condiciones técnicas para la continuidad de la explotación y se fijarán labores a realizarse, acorde con la aptitud de la tierra más que con la del hombre. Es la teoría de la utilidad social, en donde el individuo ya no es propietario para sí mismo, sino para la sociedad.

Este tema apasionante es abordado en el proyecto que tratamos con claro sentido de responsabilidad. Legislamos para el presente con la vista puesta en el futuro. Por lo tanto, los artículos que dejo comentados me llevan a concretar el siguiente y firme deseo de legislador peronista: que se cumplan en la acción colonizadora estatal los dos principios que la deben animar:

1º Que las tierras las cultiven quienes se interesen en hacerlas producir; y

2º Que al cultivo y manejo del suelo sean aplicados los procedimientos científicos.

Señor presidente: con humildad, no exenta de orgullo, diré que es hoy para mí, hombre de campo que siente la atracción telúrica en toda su fascinante intensidad, un día jubiloso; el símbolo de nuestro movimiento parece adquirir vida en el efectivo apretón de manos que el conductor, por nuestro intermedio, brinda al sector más esforzado de la patria, al otorgarle con esta ley el instrumento que ensanchará el camino de su liberación. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos prolongados. Varios señores diputados rodean y felicitan al orador.*)

Sr. Presidente (Albrieu). — Tiene la palabra. la señora diputada por Buenos Aires.

Sra. Salaber. — Señor presidente: estamos frente a un proyecto de ley que tiende a actualizar y llevar al campo de los hechos las normas jurídicas vigentes en dicha materia, que, concebidas en épocas oscuras para la nacionalidad, no fueron más que fogonazos teóricos de realizaciones nunca llevadas a la práctica en la forma que plantea este proyecto.

Dichas normas han sido adecuadas a las nuevas concepciones de la Constitución Nacional justicialista y al segundo Plan Quinquenal, y tienden a la racionalización de los medios agropecuarios, tratando de desarrollar e incrementar el rendimiento nacional en interés a toda la comunidad argentina.

Es el Estado el que toma a su cargo dicha fiscalización, distribución y utilización del campo, y lo hace a través del organismo financiero de más alta autoridad moral en el país: el Banco de la Nación Argentina. Este, a su vez, actuará asesorado por un consejo de coordinadores, el que estará integrado por representantes de los organismos específicos en dicha materia por la parte gubernamental, y por auténticos produc-

tores de reconocida capacidad en los problemas agrarios.

Se propone transformar a los productores, arrendatarios o aparceros en propietarios de la tierra que trabajan; afianzar a los mismos a través de la enseñanza de métodos de explotación que permitan el aprovechamiento integral de dichas tierras; facilitar al obrero rural, peregrino de nuestros surcos, la posibilidad de ser dueño de la tierra que trabaja mediante la adjudicación de unidades económicas que le permita una vida más digna y un futuro más cierto y más provechoso.

Pero nuestra voz, cuando tiene que hablar de los humildes, siempre hará un alto en su decir para que sea la acción reflejada a través de la palabra de Eva Perón, la Dama de los Humildes, quien nos ilumine en nuestra oratoria.

Vivíamos los argentinos mirando hacia afuera; a los poderosos les deslumbraban las luces de París y el oro titilante de Wall Street. Pero había luz y tintineo de oro en nuestra patria. Estaban allí ocultos pero reales en nuestros campos ubérrimos, en nuestros magníficos trigales. Eso no era nuestro, desgraciadamente: las caravanas de los chacareros rumbo hacia acopiadores de nombre y acento extranjero nos demostraban que en nuestro país, gobernado por gobiernos que se llamaban democráticos, se trabajaba por la felicidad de unos pocos dueños del poderío de nuestra patria. Hacia el otro lado del mar iban el sudor y el esfuerzo de nuestros hombres y mujeres del campo, que veían partir el producto de su trabajo mientras sus hijos muchas veces tenían que soportar hambre.

Pero, señor presidente, se produjo el milagro, y el milagro se llamó Juan Perón y Eva Perón. (Aplausos.) El campo para los que lo trabajan, fué su consigna; el primer hambre para saciar, el de nuestros hijos, fué el grito de guerra para nuestros líderes, y así comenzó la recuperación del campo para los argentinos, por obra de dos argentinos de verdad.

La mujer argentina no puede substraer su más decidido apoyo a este proyecto, porque hace a la esencia misma de la familia campesina, como esposa, como madre, como hija, como novia del trabajador rural y como trabajadora ella misma, capaz de aportar su propio esfuerzo a la labor del surco y del arado.

La mujer de la Nueva Argentina tiene derecho de hacer oír su voz de apoyo a la sanción de este cuerpo legal que colmará los anhelos del campesino, dando estabilidad y seguridad a la población agraria y, por ende, afirmando el hogar del hombre de campo y dignificando el núcleo familiar. ¿Y cómo no voy a hablar de dignificación rural yo, que he vivido en una zona agraria —quizá una de las más ricas de la provincia de Buenos Aires— y donde se vivía en el agro explotando al hombre por el hombre? Desde niño se empezaba a sufrir: a los

seis años ya se era boyerito, siendo necesario levantarse a las cuatro de la mañana para comenzar las rudas tareas. ¡Felices podían considerarse los hijos de los chacareros que podían ir al colegio y cursar hasta el segundo grado! Mal comidos, mal vestidos y viviendo en miserables viviendas, trabajaban de sol a sol sin más ilusión que la de poder pagar su arrendamiento, pues si no eran arrojados como perros de los campos para constituirse en errantes de los caminos. (Aplausos.)

Hoy, la entrega al trabajador rural de la vivienda digna, juntamente con la tierra, ha de ser factor preponderante para evitar la dispersión de la familia rural y provocar el afincamiento real de la población agraria, creando un nuevo vínculo de apoyo a la tierra y de perpetuación de los núcleos agrarios en el suelo patrio.

El espíritu de la ley, aparte de los beneficios de todo orden que representará para el productor agropecuario, es esencialmente el de vigorizar y consolidar la cooperación y la unidad familiar, como se evidencia particularmente en el capítulo X, cuando se establece un régimen de preferencias en las adjudicaciones de unidades económicas, para los productores que tengan familias numerosas y aptas para colaborar en el trabajo del campo, pues, como lo ha dicho muchas veces el general Perón, el bienestar y la prosperidad de la unión social, que es la familia, debe ser la consecuencia del esfuerzo común de todos sus miembros.

Y no suceda ahora, señor presidente, lo que tantos de nosotros hemos visto: familias de chacareros, con numerosos hijos, radicadas durante más de 30 años —yo lo he visto en mi pueblo—, que hoy tienen que vivir separadas, pues al llegar sus hijos a la mayoría de edad no han tenido campo donde trabajar; cuando el verdadero derecho era el de ellos, no sólo por haber nacido y vivido allí, sino por conocer a fondo el trabajo y el mejoramiento del campo y de la siembra, que hacen la grandeza de esta Nueva Argentina creada por Perón y por Eva Perón.

Hoy la previsión de residencia y trabajo están contenidos en este proyecto de ley, creando así, paralelamente a los lazos afectivos y de sangre, una comunidad de intereses, actividades y tradiciones.

Esta ley de colonización tiene la gran importancia de llevar la tranquilidad a los hombres y mujeres del campo, al abrirles la posibilidad de convertirse en propietarios de la tierra que ellos trabajaron, al asegurarles un nivel de vida honorable y firme que evitará el problema del éxodo del hombre del campo y la desintegración de la familia, tendiendo al mismo tiempo a la desintegración de los grandes latifundios.

Por eso, señor presidente, todas las mujeres peronistas, conociendo los beneficios que esta

ley ha de reportar, daremos nuestro voto como fieles intérpretes de la maravillosa doctrina nacional y fanáticas peronistas de nuestros líderes Perón y Eva Perón. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos prolongados.*)

Sr. Presidente (Albrieu). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Nudelman. — Entramos a debatir este asunto en momentos trascendentales para la vida del país. Graves problemas políticos, económicos y sociales afligen el espíritu argentino.

Nuestra posición en el debate está definida a tenor de un programa de partido que se propone —según ya lo dije alguna vez— una reforma agraria inmediata y profunda que coloque la tierra —que no debe ser una mercancía— al servicio de la sociedad y del trabajo, la organización de los agrarios para la utilización común de las grandes maquinarias, la ubicación de industrias de transformación de materias primas en los mismos centros de producción, y la comercialización directa de los productos agropecuarios por los productores, con intervención del Estado pero al solo efecto de asegurar el valor de la producción, que debe pertenecer a sus creadores.

La preocupación, como es lógico para un partido de gobierno, viene desde muy lejos, desde las horas iniciales de nuestra vida cívica; y adquiere realidad en el orden nacional con el primer gobierno de Hipólito Yrigoyen. En nuestra plataforma anterior —la del año 1937— ya se concretaba: a) Necesidad de crear un Consejo Agrario Nacional; b) Distribución de la tierra entre los productores rurales, con limitación de superficie; c) Normas para evitar los latifundios, las tierras ociosas y la concentración; d) Orientación y formación de capacidad técnica; e) Unión y organización de los agrarios por medio de las cooperativas y otras asociaciones, para resolver el problema de la industrias propias, y de las máquinas, y la mejor colocación de los productos.

La preocupación por el problema está ya en el espíritu justiciero de los fundadores de nuestra nacionalidad, en los próceres de Mayo, en las asambleas de los años 1813, 1816 y 1826, en Paso y en Belgrano —el precursor de la enfiteusis— y en Rivadavia, que propugnó su propio sistema de enfiteusis. No obstante haberse adelantado bastante desde entonces, para muchos sigue siendo verdad la afirmación de Mariano Moreno, que en la «Representación de los hacendados» dijo que el viajero que viera la riqueza que produce el campo se asombraría buscando al labrador opulento y sólo encontraría hombres condenados a morir en la miseria.

Es evidente que no es fácil revolver un problema de tanta complejidad, que va desde la división y distribución de la tierra a la defensa

del valor humano, y comprende todos los ciclos de la producción, comercialización y distribución de los productos que sirven a tantas necesidades inmediatas y dan las divisas necesarias para el progreso del país. No obstante las dificultades, hay que darle solución o por lo menos acercarse a la solución.

Creemos, a tenor de nuestra doctrina, en la evolución transformadora de un mundo en permanente integración. Aspiramos a una comunidad de hombres y de mujeres libres dentro de una sociedad justa y cada vez mejor. Por eso estamos en contra del materialismo dialéctico, que pretende explicar la historia por la sola razón de los fenómenos económicos; y, aunque no desconocemos su importancia, creemos al mismo tiempo en la fuerza constructiva de la idea, en las fuerzas espirituales y morales, que gravitan fundamentalmente en el proceso transformador de la sociedad.

Pensamos que el Estado es un medio solamente, y no un fin en sí mismo. Es por eso, por ser un medio, que no puede cruzarse de brazos frente a la injusticia y la miseria, que aniquilan la voluntad y apocan la esperanza al servicio de los grandes destinos humanos.

Queremos encauzar, sin odios, las fuerzas renovadoras del progreso dentro de la libertad y del derecho sin caer en la demagogia y el desorden. Aspiramos a identificar la libertad con la actividad creadora y el bienestar colectivo.

Cuando hablamos del derecho de propiedad lo hacemos siempre con el concepto de su verdadera función social.

Pero, como lo he dicho alguna vez —contesto al señor diputado miembro informante de la mayoría—, el concepto de la función social de la propiedad es tan viejo como el mundo, está en las Institutas de Justiniano, donde se habla de «la libertad como la facultad de hacer lo que a uno le plazca, a no ser que la ley se lo reprima»; y está también en las Partidas de Alfonso el Sabio. Pero el que mejor precisó ese concepto fué Augusto Comte, cuando dijo que todo ciudadano, cualquiera que sea, «constituye realmente un funcionario público, cuyas obligaciones más o menos definidas determinan a la vez obligaciones y pretensiones»; y que el principio «debía extenderse a la propiedad, en que el positivismo ve toda una indispensable función social —usaba la expresión precisa— destinada a formar y administrar los capitales con los cuales cada generación prepara los trabajos de la siguiente. Concebida esta apreciación normal, ennoblece su posición sin restringir su justa libertad y hasta haciéndola más respetable».

Duguit reconoce esta orientación de Comte diciendo que en el orden subjetivo de las relaciones humanas no existe ninguna categoría de derechos subjetivos.

Sr. Díaz de Vivar. — ¿Me permite una interrupción el señor diputado, con el permiso de la Presidencia?

Sr. Nudelman. — Con mucho gusto.

Sr. Presidente (Albrieu). — Tiene la palabra el señor diputado por Corrientes.

Sr. Díaz de Vivar. — El señor diputado por la Capital está citando la elaboración doctrinaria del ilustre profesor de Burdeos, Leon Duguit.

El profesor Duguit ha sido el primero, en mi opinión, que formuló la dialéctica de la propiedad en función social. Pero para el concepto de nuestra Constitución, la propiedad tiene también una función social aunque no se afirma que es una función social. Por el contrario, y éste es el disenso fundamental que quiero subrayar al señor diputado, la Constitución Nacional vigente reconoce el derecho subjetivo de propiedad y solamente asigna a este derecho subjetivo una función social. En consecuencia, señor presidente, la diferencia entre el criterio sustentado por la Constitución y por Duguit es radical. Nuestra Carta Magna reconoce ese derecho subjetivo de propiedad, asignándole empero una función social, no así la elaboración doctrinaria, muy notoria, del ilustre profesor de Burdeos, que desconoce este derecho subjetivo y le atribuye el sentido exclusivo de una función social.

Termino, señor diputado, porque lo veo impaciente, y le recuerdo que por ese mecanismo dialéctico, por esa propiedad-función social, se han justificado todos los totalitarismos contemporáneos, haciéndose la exaltación de la estatolatría, porque el único remedio a un avance del Estado es el reconocimiento de los derechos subjetivos —los derechos públicos subjetivos con el alcance que le asignó el clásico Jorge Felinek— que amparan la excelencia de la persona humana. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*)

Sr. Presidente (Albrieu). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Nudelman. — El señor diputado por Corrientes no ha hecho sino ratificar su interpretación, ya conocida en esta Cámara, a propósito del problema. Coincidimos en que muchas veces, con el pretexto y en nombre de la función social de la propiedad, se ha acentuado la omnipotencia estatal y cometido muchos atropellos. Pero eso en nada modifica la justicia de la posición doctrinaria. Sólo se trata de vivir con libertad para evitar las desviaciones. Sin libertad no hay, ni puede haber, justicia social, equilibrio justo entre el derecho individual y el derecho social. Es por eso que, frente al desequilibrio de derechos, estamos permanentemente combatiendo las desviaciones de este régimen que abatió la libertad.

En la Constitución de 1853 se reconoce la función social de la propiedad, puesto que sólo

se dice que ella es inviolable. No dice qué clase de propiedad. Permite, pues, todas las reformas, aun las más avanzadas.

En la nota al artículo 2.580 del Código Civil, Vélez Sársfield manifiesta que «el dominio es exclusivo según el concepto romanista, pero con la reserva de que no existe en este carácter sino en los límites y bajo las condiciones determinadas por la ley por una consideración esencial a la sociedad: el predominio por el mayor bien de todos y cada uno de los intereses generales sobre el interés individual. Ese mismo concepto está en el código chileno en el artículo 582, en el suizo en el artículo 641, y en el francés en el artículo 544, entre otros muchos.

Con ese mismo concepto Yrigoyen congeló los alquileres en 1919. Pero esa congelación sólo duró dos años, porque inmediatamente se restablecieron las condiciones económicas del país, desapareció la inflación y se recuperó el equilibrio económico, permitiendo la vuelta a la normalidad económica y jurídica. Esto resultaría totalmente imposible en las condiciones actuales del país, no obstante que ya lleva 10 años la ley que congeló los alquileres.

Como lo he demostrado alguna vez, en caso de descongelarse los alquileres, el setenta por ciento de los jefes de familia no tendrían al día siguiente cómo llevar el pan para sus hijos. En la defensa de la tierra pública y en contra del latifundio, el gran presidente Yrigoyen fijó con claridad su pensamiento.

En el mensaje que envió al gobernador de Santiago del Estero el 17 de septiembre de 1920 decía: «La tierra pública debe ser defendida a toda costa: ella es poderoso factor de civilización. De otra manera se caería en el concepto anacrónico del latifundio, que retarda el progreso porque especula a sus expensas, substrayendo grandes extensiones a toda útil y vigorosa labor colectiva».

En enero de 1930 repetía en un mensaje: «La tierra constituye el sagrado patrimonio de la Nación, de la que sólo mediante un previsor y meditado plan de colonización sería posible obtener los debidos beneficios para el pueblo, pero sin que el Estado se desprenda de un solo adarme de su exclusiva propiedad.» Y termina: «La riqueza de la tierra, como la del subsuelo mineral, no puede ni debe ser objeto de otras explotaciones.»

Es todo lo contrario de lo que se sostiene en este proyecto de ley, que abre las puertas de la inseguridad frente a la necesidad de defender la tierra pública para el futuro; asegura, en cambio, el acaparamiento y la concentración monopolista de las sociedades anónimas y de la nueva oligarquía terrateniente surgida a la sombra del régimen imperante en el país.

Dentro de los distintos sistemas que pretenden resolver con justicia el problema de la tierra,

la democracia —que es siempre perfectible— puede y debe dar la solución anhelada.

Acepto que en un país como el nuestro, que necesita estimular el arraigo del nativo y atraer al inmigrante para poblar nuestras extensas llanuras, montes y selvas impenetrables; de tanta variedad climática; de distinta fertilidad; con diversos regímenes de aguas, lluvias y vientos; de tanta variedad étnica; de diversidad de costos de explotación debido a las distancias, los transportes, la conservación y el almacenamiento; con gran cantidad de tierra fiscal y grandes latifundios y la necesidad de defender la unidad económica y social que exige la ayuda del Estado, así como la gran competencia internacional, no pueden, dentro de nuestra forma de vida y régimen institucional de democracia, resolverse con un criterio uniforme y sistemático problemas de tanta trascendencia para el porvenir económico y social de la República. No puede haber una misma solución para una extensión territorial tan enorme, comprendiendo problemas tan distintos y tan variados. Pero hay puntos de partida —sin duda fundamentales— sobre los que no puede haber duda alguna: la defensa de la tierra pública; abatir las alas a las poderosas sociedades anónimas que poseen en conjunto más de 26 millones de hectáreas distribuidas por todo el país; combatir el latifundio; racionalizar la producción mediante el empleo del progreso técnicomecánico, que hoy está dificultado en el país por falta de divisas para la importación. Junto con ese progreso hay que asegurar la justa retribución, la elevación del standard de vida y hay que favorecer, sobre todo, la colonización ejidal para que puedan funcionar las granjas de abastecimientos de las grandes ciudades, granjas hoy desaparecidas en los loteos con valor de especulación...

—Varios señores diputados hablan simultáneamente.

Sr. Presidente (Albrieu). — Sírvenselos señores diputados no interrumpir al orador que está en el uso de la palabra.

Sr. Nudelman. — Mucho se ha hablado en la doctrina y mucho se ha proyectado. Desde la entrega lisa y llana en propiedad amortizable a largos plazos, hasta el arrendamiento vitalicio.

Eduardo Laurencena, con conocimiento directo de los problemas y con visión de gobernante, en su libro *Debemos salvar nuestras industrias rurales*, sostiene, sin oponerse a ninguno de los ensayos posibles, que la entrega en propiedad mediante el pago de un porcentaje sobre la producción agrícola, que no podrá ser aumentado por ninguna razón, es el sistema que mejor responde a la realidad del país. Aunque una serie de malas cosechas impidiera el pago de la amortización y aun el de los intereses —agrega—, no se aumentaría la obligación de aquéllos; de manera que su única consecuencia

sería la prolongación del contrato, pero el productor tendría la certeza de que su situación no se modificaría por evento alguno y nada podría impedirle continuar en la tierra. Para Laurencena el crédito agrícola, el seguro agrícola, la cooperación agrícola, la ayuda mutua para esa unidad económica y social y la propiedad de la tierra formarían la base fundamental de la defensa agropecuaria argentina.

En el año 1939 el ex diputado Anastasi afirmó que no hay reforma agraria si ella no descansa sobre estos dos principios: consolidar la tierra en su verdadera función social y limitar las facultades del dominio. Pero es evidente que se impone hacer accesible la tierra para quien la trabaja, quitándole el valor especulativo y reduciéndola a su valor de producción para abaratar los productos y posibilitar, después del propio abastecimiento, la competencia internacional.

Hay que combatir el latifundio mediante la expropiación a su valor real, y hay que distribuir la tierra con un plan racional y democrático que tienda a la descentralización económica y social, que favorezca la defensa comunal y el federalismo, y evite esta gran urbe macrocéfala de la ciudad de Buenos Aires, con seis millones de habitantes, y sólo doce millones de habitantes para el resto del país. Tampoco puede resolverse el problema con el mismo criterio para las tierras marginales que para aquellas otras de las zonas ejidales que deben adecuar el abastecimiento de las grandes ciudades. En Nueva Zelandia la distribución racional de la tierra se hace en tres formas: locación con promesa de venta, arrendamiento vitalicio y venta directa en propiedad. En algunos otros países democráticos, junto al arrendamiento vitalicio, se ensaya también la granja colectiva en propiedad comunitaria o de cooperativa.

La ley actual establece el sistema de la entrega de la tierra en propiedad amortizable a largos plazos, y por la enmienda Palacios se establece en caso sucesorio el pago del impuesto con parte de la tierra; también la concesión vitalicia para la tierra fiscal, que luego amplió el decreto 10.837 del año 1946, del gobierno de Farrell, haciéndolo extensivo para la tierra adquirida por el Estado en el resto del país. Todo esto desaparece del proyecto que consideramos.

El sistema del arriendo vitalicio fué ensayado por este gobierno en Colonia Balcarge, a cuyo efecto se expropiaron 14.000 hectáreas, en las que habrían de afincarse —se dijo— de cuatro a cinco mil familias.

Se planeó la distribución en forma radiada, variando el viejo concepto de la distribución rectangular que —se decía— obstaculizaba el adelanto cultural, social y económico; mediante el cobro del canon establecido por licitación, se devolvería en obras para bien colectivo el resultado de la valorización social.

El ensayo del sistema por este gobierno, realizado en 1947, a tenor del cual se hizo mucha propaganda, fracasó: nunca se supo por qué, como tampoco se supo el resultado de muchas expropiaciones, verdaderas confiscaciones en función de venganzas, y sobre las que habría mucho para hablar, como hay mucho que hablar del enriquecimiento fácil e ilegítimo de muchos allegados a la nueva oligarquía industrial y terrateniente.

—Hablan varios señores diputados a la vez.

Sr. Nudelman. — En alguna oportunidad ya hablaremos sobre el asunto con pelos y señales. Volviendo al tema, quiero decir que este ensayo de arrendamiento vitalicio realizado en Colonia Balcarce por el gobierno de la revolución que venía a hacer una reforma agraria profunda, terminó con la distribución de esas 14.000 hectáreas expropiadas entre sólo 180 familias, en vez de las 4 ó 5 mil que se anunciaban dentro del plan, mediante amortización basada en el viejo criterio conservador de 50 años de plazo. Ese ha sido el resultado de la tan mentada revolución agraria que sirvió para el engaño político en la campaña del 24 de febrero de 1946.

Algunos autores han sostenido, como base de la reforma agraria, el cobro de un impuesto al valor de las tierras con exclusión de mejoras. Es sólo la valorización social de la tierra la que debería volver con el impuesto al beneficio colectivo en forma de caminos, obras sanitarias, escuelas, etcétera, en tanto que el resultado individual debía seguir beneficiando exclusivamente al productor de la riqueza.

Este principio, basado en la doctrina de Henry George, con vistas a la afectación del privilegio territorial y simplificación tributaria, tuvo repercusión en nuestro país en época del presidente Roque Sáenz Peña, que proyectó el impuesto al mayor valor, diciendo en su mensaje que había que disminuir las gabelas que afectan al trabajador y procurar que las necesidades del Estado graviten con preferencia sobre el capital y la fortuna representados por la tierra y los enormes latifundios que asombran al europeo.

Joaquín Llambías, el primer intendente radical, y más tarde Carlos M. Noel, con la secretaría de Hacienda de don Emilio Ravignani, figuras que prestigiaron con su capacidad y talento la función pública, hicieron sancionar por primera vez en América, el 24 de julio de 1923, un impuesto que afectaba el privilegio sobre el alumbrado, barrido y limpieza, tomando en cuenta el valor de la tierra clasificada en zonas y excluyendo las mejoras.

También durante el gobierno del doctor Amadeo Sabattini, figura ejemplar de nuestra democracia, se creó en 1938 el impuesto progresivo a la tierra, cuya tasa oscilaba entre el 6 y el 20 por ciento. Decía Sabattini en su men-

saje: «Las leyes impositivas no son, no pueden ser, meras fuentes de recursos para el Estado; no deben responder tan sólo a un fin fiscal, sino también a una verdadera justicia social, lo que reclama empeñosamente la ayuda y el mejoramiento del que nada posee, con la contribución y auxilio del que todo lo tiene.»

Con ese mismo concepto de avanzada, durante los magníficos gobiernos de Valentín Vergara en la provincia de Buenos Aires y de Maricó en Entre Ríos, en 1921 se sancionaron leyes análogas que afectaban el privilegio, creaban el impuesto al ausentismo y combatían la especulación y el monopolio de la tierra.

Vale la pena señalar que, según algunos autores, el valor de la tierra nada tiene que ver con su capacidad de producción ni con su utilidad. La ley de la renta, llamada ley de Ricardo, sostiene que la renta de la tierra es determinada por el exceso de producción sobre la que, con la misma aplicación de capital y trabajo, puede obtenerse de la tierra menos productiva en uso.

Con la autoridad de su conducta de siempre y la obra desde el gobierno, los representantes de la Unión Cívica Radical afirmamos que este proyecto que considera la Cámara viene a terminar con una ley que en su momento los expositores de todas las tendencias en el Parlamento coincidieron en afirmar que era una ley que significaba un gran aliento inicial, aunque no se la consideraba una solución definitiva. Este es un proyecto reaccionario y conservador en su esencia, y compromete el porvenir argentino en materia de tierra fiscal, sin afectar en cambio el gran monopolio terrateniente.

—Hablan varios señores diputados a la vez.

Sr. Nudelman. — Respecto a la política agraria del actual gobierno, hemos demostrado más de una vez el grave perjuicio ocasionado por ella en el desarrollo de la economía. Ratifico ahora totalmente aquellas apreciaciones, coincidentes con las que ha expuesto mi compañero de representación, el señor diputado Weidmann. Trataré de dar algunos elementos concretos.

Durante los años 1951-1952 no se han llegado a sembrar ocho millones de hectáreas entre trigo, maíz y lino. El segundo Plan Quinquenal, la gran panacea, prevé obtener una siembra de ocho millones de hectáreas de trigo, siete millones de hectáreas de maíz y dos de lino; es decir, un total de diecisiete millones de hectáreas.

Durante el período 1929 a 1934 —es decir, veinte años atrás— se sembraron 16.884.000 hectáreas de esos productos, o sea casi los 17 millones de promedio que se quieren alcanzar ahora.

La siembra de trigo supera esas cifras en los años 1927, 28, 29, 30, 32 y 33; el maíz, en los

años 34, 35 y 39; el lino, todos los años desde 1923 a 1944.

Sr. Gramajo. — Hable de los precios.

Sr. Nudelman. — Voy a complacer en seguir a al señor diputado, hablando de los precios y del IAPI.

Fueron superados los 3.000.000 de toneladas en 1930, 31, 34, 36 y 39. Ahora se quiere menos lino y más maíz porque, debido a la gran crisis de la industria, el lino, que es industrializable, es lo que sobra, en tanto que el maíz, que se exporta en bruto, es lo que falta para obtener divisas que se necesitan. Por eso es que el elenco oficial aconseja sembrar más maíz.

Para corroborar con cifras concretas estos conceptos, solicito que a esta altura del debate se incluya esta planilla, tomada de estadísticas oficiales, que demuestra los resultados desastrosos de una política agraria que despobló el campo con el pretexto de favorecer la industria. Ahora, con la industria en crisis, se aconseja volver otra vez al campo.

Sr. Camus. — ¿Cuál es la fuente de esa estadística, señor diputado?

Sr. Nudelman. — Síntesis Estadística Mensual y Boletín del Ministerio de Comercio Exterior, entre otras.

El problema es grave: 2.500.000 personas dependen de la ganadería; 1.900.000, aproximadamente, están comprometidas en la cosecha fina y del maíz; es decir, 4.400 000 personas que viven de la economía rural. Ese es un gran privilegio que orgullosamente podemos exhibir.

— Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 2º de la Honorable Cámara, don José V. Tesorieri.

Sr. Nudelman. — Mientras la ganadería y la agricultura tienen vida propia, la industria necesita de la producción rural —que le permite obtener recursos del extranjero y muchas materias primas— y de la protección del Estado para competir con el extranjero.

Los que despoblaron el campo para industrializar sin base seria advierten hoy el error y por eso aconsejan volver al campo.

Las cifras son elocuentes. En 1946 se exportaron 8.189.000 toneladas en total. De eso corresponden a productos agropecuarios 7.627.000 toneladas, lo que representa —para un total de ventas de exportación de \$ 3 933 000.000— por productos agropecuarios \$ 3.408.000 000. En 1950, sobre un total de 7.474.000.000 de toneladas, corresponden a agricultura y ganadería 7.187.000.000 de toneladas, por valor de 4.821 millones y 3.627 millones, respectivamente. En 1952 se exportaron 7.285.000.000 de toneladas por \$ 7.189.000.000. Es decir que, tanto en valor como en volumen físico, los productos agricolaganaderos forman más del 90 % de nuestras exportaciones, y es en esa proporción

que contribuyen a pagar las importaciones de nuestro país.

Sobre la exportación de 1950 el IAPI fué el negociante intermedio de 5.570.000 toneladas, y en 1953 de 7.946.000 toneladas, representando en el primer caso la suma de pesos 3.784.2000.000 y en el segundo, 5.055.000.000.

¿Qué importancia tiene esto? Que el IAPI fué, con ese termómetro, el pulpo que succionó la sangre del trabajador rural, comprometiendo las posibilidades de la ganadería y agricultura argentinas.

Sr. Gramajo. — Bunge y Born, y Bemberg...

Sr. Nudelman. — Bunge y Born, y Dreyfus siguen siendo los explotadores del agro, porque ellos son los intermediarios principales que compran al productor, y además exportan; actualmente ganan más que nunca.

Además, han aparecido nuevos personajes. Deben saber los señores diputados que los últimos dos millones de toneladas de trigo exportados lo han sido por nuevos exportadores y por una sociedad denominada FABAR S.A. Según nuestros informes, allí detrás de ese personaje de leyenda, de nombre Jorge Antonio, que tiene en sus manos aspectos fundamentales de la economía del país. La importancia de ese personaje meteórico —que ganaba \$ 600 mensuales en 1946— está en que no sólo controla la economía y las finanzas del país y las principales industrias, sino que también es el agente financiero del gobierno para la entrega del petróleo argentino, según sus recientes declaraciones en Estados Unidos, avaladas por Mr. Odlum y Mr. Colle de la Atlas Corporation.

Repito lo que ya dije otra vez con toda responsabilidad: los gobiernos que surjan de la Unión Cívica Radical no reconocerán ninguna clase de contratos en los que se hipoteque el porvenir del petróleo argentino.

Sr. Alonso. — Ese desconocimiento no le hace mella al pueblo.

Sr. Nudelman. — No hubo protección al campo; todo lo contrario: es el campo quien protegió al gobierno y a las tres cuartas partes del país con la diferencia de cambio, que sigue constituyendo un verdadero despojo al productor rural en más 2.300 millones anuales.

La producción agrícola, por sus características especiales, no puede trabajar sólo en relación al costo y producción, porque se trata de materias perecederas que requieren rápida colocación en los mercados. Vive en su ámbito la familia. Es la casa de la mujer y de los hijos; por eso necesita de reservas para ampliar el confort de la vivienda y para estimular el arraigo del agricultor expuesto a las pérdidas por factores climáticos. Por eso es indispensable que el productor goce plenamente del producto de su esfuerzo para poder sobrellevar las épocas malas. El gobierno se interpuso desde el primer momento entre los precios y el produc-

tor para quedarse con la mayor parte del resultado de su esfuerzo.

No desconocemos que el mercado internacional de productos rurales ha tenido alternativas durante los primeros años del actual gobierno. En 1946 y primeros meses de 1948 los precios fueron favorables al IAPI y había gran demanda de los países devastados por la guerra. Todavía en enero de 1948 el bushel de maíz se cotizaba a 2,808 dólares y el del trigo, a 3,065. En pesos argentinos, resulta que se vendía el maíz entre 40 y 45 pesos el quintal, mientras el IAPI lo había pagado a 14; y se vendía a 60 pesos el trigo que el IAPI había pagado a 20 pesos moneda nacional.

En abril de 1948 los precios internacionales bajaron, y el IAPI vendió a 101,24 dólares la tonelada FOB, lo que equivale a 34 pesos el quintal, el maíz que había pagado al chacarero a razón de 14 pesos; de manera que se quedaba con más del 59 por ciento del precio.

En la actualidad los precios internacionales siguen siendo muy superiores al precio pagado por el gobierno. El precio real se disimula además cargando el precio de las compras de importación por los convenios bilaterales.

—Hablan varios señores diputados a la vez.

Sr. Nudelman. — Puede comprobarse lo que afirmo a través de la cotización de los mercados mundiales; haciendo la correspondiente determinación del valor del dólar por el libre poder de compra de otras divisas, no por el precio convencional del control de cambios. De ese cálculo resulta la cifra que he señalado como despojo al agricultor rural: 2.300 millones de pesos anuales, repartidos entre el IAPI y el Banco Central.

Sr. Alonso. — ¿Cuánto se paga ahora el trigo, señor diputado?

Sr. Nudelman. — Siempre queda margen para el gobierno. Lo prueba este solo hecho, señor diputado: no obstante que el gobierno ha declarado que con los nuevos tipos de cambio desaparecerá la ganancia oficial, por el artículo 23 de la ley de presupuesto que votó esta Honorable Cámara en 1952 se autoriza a ingresar a rentas generales hasta la suma de \$ 600.000.000 en concepto de fondo de beneficio de cambio del ejercicio financiero 1951/52. Y en el proyecto de presupuesto para los años 1953/54 también se establece el mismo ingreso por ese concepto de \$ 500.000.000. ¿Dónde está, pues, la previsión en favor del trabajador rural? Esos millones salen del despojo a su esfuerzo.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, doctor Antonio J. Benítez.

Sr. Nudelman. — Es decir que, además del impuesto que debe abonar como cualquier contribuyente, el trabajador rural debe contribuir

al sostenimiento del IAPI, del presupuesto de la Nación y de las importaciones argentinas.

El resultado de esa política está a la vista: se despobló el campo, arruinando la economía agropecuaria, fuente fundamental de nuestra riqueza. Esto ocasiona la falta de divisas, la desocupación y todas las secuelas de la falta del equilibrio que padecemos y que costará muchos años restablecer.

Mientras tanto se organizó una enorme burocracia. Los antiguos exportadores están de parabienes: actúan como intermediarios, compradores nacionales o internacionales, y también como exportadores, con mayores garantías que nunca; los Bunge y los Dreyfus —como ya dije— ganan como nunca. Hay también más evasión de divisas, según se demostró ante la justicia en hechos no muy lejanos. Pero, además, junto con esto, la nueva oligarquía privilegiada compra, almacena y vende en nombre del IAPI, repartiéndose con él las ganancias del despojo, a costa del sufrido trabajador rural, mientras pululan los negociados que reiteradamente hemos denunciado en esta Cámara y en todas las tribunas del país, sin que hayamos tenido la suerte de que se constituyera tan siquiera una sola comisión investigadora.

Las instituciones oficiales de Canadá, Estados Unidos y Australia ayudan al agricultor, pero sólo prestándole dinero y dejándole vender al precio libre o garantizando el precio sin quedarse con la parte del león.

Frente a la corriente bajista de lana, los gobiernos de Australia, Inglaterra, Sud Africa y Nueva Zelandia crearon un fondo y fijaron precios mínimos, defendiendo al productor con un precio remunerador. Y cuando Estados Unidos en tales condiciones se decidía a intervenir el precio de la lana y a reducirlo a un 60 % del valor, pero compensando con el fondo al productor, el gobierno argentino ordenaba el cierre de la exportación, cargando al productor con la espera de la reapertura del mercado.

—Hablan varios señores diputados a la vez.

Sr. Nudelman. — La intervención del Estado con fines lucrativos costó a los productores —repito— más de 2.300 millones de pesos anuales; ahora, un poco menos, porque bajó el precio internacional. Se habló de mejorar el precio en la producción futura; pero la realidad muestra el cierre de los mercados que, con la caída del precio, agrava la situación y malogra muchas promesas y esperanzas. En su tiempo se liquidaron muchos elementos de trabajo; y abandonaron el campo auténticos agricultores e hijos de agricultores y obreros deslumbrados por el falso espejismo de la ciudad, que se quería industrializar; y empeoraron su vida física y espiritual por la falta de vivienda, de aire, de sol y de higiene en el conventillo de la ciudad, y por las malas condiciones de adaptación or-

gánica individual al ritmo de la población industrial de la gran ciudad.

Todo eso de que la tierra no sería más un bien de renta sino un medio de trabajo fué pura ilusión y propaganda. No se resolvió el problema de la tierra ni se mecanizó el campo, en una época de posibilidades con los buenos precios; se malgastaron las divisas; no se arraigaron las industrias en los centros de producción de materia prima; se empeoraron los transportes; no mejoró el consumo y, por el contrario, por primera vez en la historia del país, después de casi 70 años, tuvo que importarse trigo para que pudiera comer pan —y malo— la población argentina.

Sr. Miel Asquía. — Pero no se vieron las cosas para la olla popular ni tampoco hubo desocupación.

Sr. Nudelman. — Todo eso, señor presidente, fué a tenor de una política que sólo consiguió comprometer el patrimonio efectivo de la Nación y las reservas del porvenir.

El proyecto que consideramos reproduce parte del texto de la ley 12.636, empeorada con criterio de retroceso. Sobre el articulado en particular ya se han señalado por nuestro sector las objeciones que formulamos concretamente.

Allí se insiste en hacer desaparecer el Consejo Agrario Nacional como entidad autónoma, así como también los consejos agrarios regionales integrados por agricultores, para pasar a depender todo el problema agrario de una sección del Banco de la Nación Argentina que abordará su tarea con el mismo criterio con que lo hace actualmente: con criterio de lucro y burocracia. Con ese concepto la tierra seguirá manteniendo su valor especulativo, inabordable para la propiedad y arraigo del verdadero trabajador rural. La experiencia ha enseñado que el Banco de la Nación vende —y es lógico, de acuerdo con su función— sin analizar si el que compra la tierra es agricultor, comerciante o profesional...

—Hablan varios señores diputados a la vez.

Sr. Nudelman. — ... entrega al que paga más; y éste no es, generalmente, el agricultor.

Sr. Gramajo. — Se distribuye la tierra previo concurso; y de acuerdo con la capacidad de cada uno de los agricultores, se da la propiedad.

Sr. Nudelman. — ¡Cómo se va a hacer concurso de capacidad! ¿Dónde ha visto que se haga? Es una enormidad lo que dice el señor diputado. Se hará competencia de precios, que es una cosa distinta. Eso es precisamente lo que critico.

Sr. Gramajo. — Si, señor diputado; se tiene en cuenta la capacidad de los agricultores.

Sr. Nudelman. — Aseguro al señor diputado que para la entrega de la tierra no se hacen

concursos de competencia de capacidad. Puede comprobarse eso en cualquier momento.

Continúo, señor presidente. De este modo se facilita la inversión capitalista y la concentración terrateniente, esperando el aumento especulativo en el valor de la tierra. Compran tierras, según ha ocurrido no hace mucho, capitales de origen dudoso o capitales extranjeros favorecidos por la desvalorización de la moneda argentina, lo que les permite esperar con comodidad mejores posibilidades de futuro a costa de una auténtica especulación sobre la tierra argentina. El señor diputado Santucho, en una gran exposición, demostró en otra oportunidad cómo el desequilibrio de nuestra economía rural ha gravitado en la desmecanización del campo y cómo el tractor del año 1943 ha llegado a precios que lo hacen inaccesible al agricultor argentino.

Por este proyecto se va, además, a la centralización del crédito bancario. La mejor solución, por el contrario, está en la descentralización, fomentando la constitución de cajas de cooperativas libres —aun con ayuda económica oficial, si hiciera falta— formadas por los mismos productores rurales, cajas que pueden ser incluso las que acuerden el crédito agrario, conociendo el ambiente, la condición personal y el destino controlado del préstamo. Además, el ensayo que se proponía en la vieja ley en el artículo 63 desaparece en este proyecto que consideramos, no obstante haber sido uno de los «caballitos de batalla» con que se inflamó a los ingenuos y buenos productores agrarios haciéndoles creer que la tierra iba a ser repartida entre los auténticos agricultores.

Sr. Gramajo. — Eso se ha convertido en realidad.

Sr. Nudelman. — La reforma agraria prometida ha dado, en síntesis: despoblación del campo, latifundio, especulación, nueva oligarquía terrateniente y ruina de la economía agropecuaria, base fundamental de nuestra riqueza...

—Suena la campanilla indicadora de que ha vencido el término de que dispone el orador para su exposición.

Sr. Presidente (Benítez). — Ha vencido el término de que disponía el señor diputado por la Capital para usar de la palabra.

Sr. Nudelman. — Concluyo, entonces, señor presidente.

Ahora se busca la solución por vía de la entrega del petróleo y del uranio.

Lamento que la falta de tiempo no me permita abordar algunos otros aspectos de este fundamental problema de la vida del país. Sin duda, la mayoría cumplirá inexorablemente su decisión votando afirmativamente este proyecto. Pero no importa; nosotros estamos trabajando también para el porvenir, para las reservas morales y espirituales que obtendrán la victoria

en el gran día de la reparación nacional, que ha de llegar sin duda alguna. No será ésa la hora de las grandes masas informes encendidas por el sensualismo y la propaganda, sino, como lo quiere Maritain, la hora del pueblo y de la humanidad, consciente de la dignidad de la persona humana, constructora de un mundo más humano, y orientada hacia el ideal histórico de fraternidad, de libertad y de igualdad. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos. Varios señores diputados rodean y felicitan al orador.*)

Sr. Presidente (Benítez).— Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Osella Muñoz.— La Cámara termina de escuchar atónita los conceptos y las afirmaciones inexactas del señor representante del sector radical. Y ha visto con pena que sea el desenfado, la oposición sistemática, la que haya regido una vez más su conducta frente a un proyecto de tanta trascendencia como el que considera la Honorable Cámara.

Para negar las virtudes de esta ley, respondiendo a su posición política, el señor diputado por la Capital se ha visto constreñido a desvirtuar los hechos, pretendiendo hacernos olvidar que hasta el advenimiento de la revolución peronista fué la del agricultor argentino la situación de un paria en su propia tierra. (*Aplausos.*) Enriqueciendo a los demás fué peregrino de su propia pobreza, y deambuló por los campos ofreciendo sus brazos generosos a la explotación inicua de los terratenientes y al tratamiento cruel de los mayordomos. Así lo conocimos nosotros, azorado, sin deseo siquiera de transmitir su oficio a sus propios descendientes. Así lo vimos, turista de su propia miseria, no obstante haber pasado por el gobierno todos los partidos políticos existentes en el país hasta 1943. Lo vimos decepcionado, cansado de las promesas de los demagogos, y si alguna ley existía, no se cumplió para su beneficio, porque cayó abrumada por el peso de los intereses creados de la oligarquía.

En esa tragedia en que vivió el trabajador rural, la obra del gobierno, la acción legislativa y el ordenamiento jurídico, todo en torno a él fué estático y tradicionalmente acomodado a la explotación oligárquica y a una mentalidad burguesa de acentuado origen medieval. Desfilando sin encontrar justicia, y cuando ya esperaba contra toda esperanza, escuchó la voz de su redención a través del axioma incontrovertible e inalterable de Perón de que «la tierra no es un bien de renta sino un bien de trabajo». (*Aplausos.*)

Era la voz revolucionaria y argentina del general Perón, que anunciaba en 1946: «Sabemos que los hombres que trabajan la tierra reclaman mejoras, y aspiramos a establecer definitivamente que en este país se considere inaceptable que la tierra sea un bien de renta, ya que debe pertenecer al que la fecunda con su

esfuerzo. No podemos realizar este propósito de una sola vez, pero les prometo que, encarado y resuelto el problema de la tierra, no habrá un solo argentino que no tenga derecho a ser propietario en su propia patria.» Como Perón siempre cumple, señor presidente, está aquí, en la Cámara de los representantes populares, la ley de colonización, que facilita, por primera vez en la historia del agro argentino, el acceso a la propiedad de los auténticos trabajadores. (*Aplausos.*)

El término breve con que contamos para nuestra exposición nos obliga, por una razón de trabajo fecundo, a no refutar las capciosas aseveraciones del miembro opositor y a destacar cómo la función social de la tierra campea en este proyecto de colonización. Ya que no podemos examinar analíticamente su articulado, nos referiremos al aspecto trascendental del acceso a la propiedad rural de los hijos de agricultores con familia constituida o a constituir.

Esta es una de las más grandes conquistas que nuestra incruenta revolución entrega a la familia agraria del futuro. Recién ha sido posible lograrla merced al alejamiento definitivo de los hombres explotadores de los hombres, aventados ya los monopolios internacionales que usufructuaron el trabajo de los hombres del campo y les negaron retribución justa y compensatoria de sus esfuerzos. No había aspiraciones en el agro argentino de que los hijos fueran también agricultores como sus progenitores, porque rodeados de miseria, olvido y desengaño, no querían los padres legar una herencia que consideraban maldita.

Por eso, frente al advenimiento de la reforma agraria del peronismo, los hijos de los agricultores han llegado hasta la Comisión de Legislación Agraria para expresar que esperan ansiosos el momento de incorporarse con sus familias constituidas o a constituirse al futuro núcleo labriego argentino que ha de comenzar su tradición partiendo de este momento en que ha encontrado justicia. (*Aplausos.*)

Si continuamos discriminando el amparo que ofrece a la familia el articulado respectivo, pensamos que el hombre de conciencia agraria, amante de la tierra, a quien arranca sus frutos e imbuido de cierta religión que da nacimiento, precisamente, a ese amor que siente por la tierra, en franca comunión de hombre y naturaleza, sabe que ha llegado el momento en que todos esos esfuerzos no solamente van a contribuir a su bienestar personal, sino que, puesta la tierra en función social, se armonizará los intereses del individuo con los de la comunidad.

Por eso, señor presidente, vamos a votar jubilosos este proyecto del Poder Ejecutivo, porque Perón nos ha dado con ello la gran oportunidad de honrarnos dándole fuerza legal a un instrumento que significa la redención definitiva del auténtico trabajador agrario.

La escasez del tiempo no me permite el análisis de los distintos artículos que ya, por otra parte, fueron expuestas en forma medulosa por el señor miembro informante. Pero, evidentemente, es necesario que nosotros y ellos, propios y extraños, pertenecientes al movimiento peronista u opositores, comprendamos que este proyecto que pronto ha de ser ley, es el corolario de toda la reforma agraria, realizada pacíficamente. Algún día, más tarde o más temprano, los pudientes de la República, los terratenientes insensibles y los oligarcas que aun croan en las charcas de sus propios odios, tendrán que agradecer a Perón el que haya realizado una revolución tan profunda, y de tanta trascendencia, dentro de medios pacíficos y de persuasión, evitando la violencia frente a un pueblo justamente lleno de rebeldía.

Como digo, señor presidente, vamos a votar jubilosos este proyecto de ley, y esperamos que los organismos que han de aplicarla, imbuídos también de la Doctrina Nacional, han de saber ponerla en ejecución de acuerdo a las preocupaciones de su creador y a los enunciados de su doctrina. Y el agricultor, el hombre que trabaja la tierra, no está ya a la vera de la espera, ni al borde de la esperanza; está encima de la conquista, junto a la más alta concreción de sus aspiraciones y de sus sueños. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos prolongados. Varios señores diputados rodean y felicitan al orador.*)

Sr. Presidente (Benítez). — Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.

Sr. Marcó. — En torno al apasionante problema de la tierra se han forjado, a través de los años, las más variadas doctrinas que van desde la comunidad originaria hasta el derecho de propiedad absoluta enunciado por el derecho romano. Lo cierto es, señor presidente, que el hombre, fiel al instinto del derecho de propiedad, se ha sentido en todo momento dueño de la tierra en que nació y trabajó, y que también fecundó con el sudor de su frente.

Lamento, señor presidente, que el escaso tiempo con que debemos afrontar este trascendental debate me impida incursionar sobre el ancho y fecundo campo de la doctrina, aunque ya lo han hecho con precisión y brillantez mis compañeros de sector.

Se ha dicho, y con razón, que la base de nuestra riqueza es todavía —y lo será por muchos años— la producción agricolagánadera. Los productos alimenticios nuestros constituyen, indudablemente, las fuentes de divisas fuertes que han permitido financiar la adquisición de equipos y elementos necesarios para impulsar el desarrollo del país.

No es exagerado, entonces, afirmar que toda nuestra economía depende, en forma directa o indirecta, del campo argentino.

Casi sin excepción —justo es decirlo— todos nuestros gobernantes han reconocido ese hecho; y digo casi, porque en alguna oportunidad se han levantado voces y precisamente en este régimen, para menospreciar estas fuentes de producción. Lo grave es que esas voces provenían de hombres que durante años dirigieron en forma dictatorial las fuentes de la economía argentina. Muy pronto el campo, y no sólo el campo sino toda la producción del país, tuvieron que sufrir la consecuencias de esa política, que aun estamos sintiendo.

Los problemas agrarios han preocupado hondamente a nuestros gobernantes y a nuestros estudiosos desde los orígenes mismos de la nacionalidad. Ya Mariano Moreno, citado por el diputado Nudelman, en su célebre alegato formulado en la *Representación de los hacendados*, expuso con precisión la situación angustiosa de las incipientes industrias rurales a la política absorbente de la metrópoli.

Ha habido desde entonces muchas iniciativas, algunas de ellas originales, desde cierto punto de vista, como la enfiteusis rivadaviana, que han tendido a resolver el problema de los productores.

La cuestión de la posesión de la tierra, como elemento primordial de nuestra riqueza nacional, no ha sido ignorada en ningún momento por nuestros gobernantes que, en mayor o en menor grado, siempre han hecho algo en pro de su solución. Sin embargo, debemos señalar aquí también una excepción de del tirano Rosas, que dilapidó o vendió a vil precio grandes extensiones de tierra fiscal en la provincia de Buenos Aires, lo que determinó la formación de grandes latifundios, que tanto han gravitado y gravitan aun hoy en la vida política y económica del país.

Cabe consignar, con un estricto sentido de justicia histórica, la obra civilizadora y fecunda del general Urquiza en esta materia, durante cuyo gobierno se fundó en Santa Fe la colonia Esperanza, la primera en el país, en el año 1856, por Aarón Castellanos. De inmediato, también durante el gobierno de Urquiza, se crearon en Entre Ríos las colonias San José, Primero de Mayo, del Carmen y muchas otras. Esas colonias fueron en su hora verdaderos modelos de organización como con toda propiedad lo destaca en un folleto titulado «Tierra y colonización», el ingeniero Martín Olegario Saldías, en estos términos: «A cada familia, además de la tierra, se le proporcionaban 100 pesos para adquirir objetos de primera necesidad y semillas; 4 bueyes, 2 lecheras, madera, leña y manutención al precio del día y a pagar con facilidades. Los colonos debían permanecer en la colonia y cultivar su parcela de tierra y contribuir, con no más de veinte días, a los trabajos de interés colectivo. Estaba prohibida la venta de bebidas alcohólicas y la instalación

de cualquier comercio. El lote sólo podía ser vendido al precio corriente y a una familia previamente aceptada por la administración, la cual, además, tenía el derecho de eliminar a quien, por su mal comportamiento, daba motivo a esa medida.»

Fueron esas colonias, nacidas bajo el auspicio de tan sabias disposiciones legales, modelos de organización.

Esa primera colonización oficial, inspirada, como puede verse, en las mismas normas fundamentales que aun hoy inspiran los proyectos sobre esta materia, tuvo un franco y acabado éxito al permitir que muchas familias de inmigrantes adquirieran la propiedad de la tierra que trabajaban e hicieran de esas colonias un verdadero emporio de riqueza y prosperidad.

A cien años de aquellas y otras iniciativas posteriores también coronadas por el éxito, podemos apreciar, sin embargo, que muchas otras, con seguridad las más, no obstante estar inspiradas en los mismos principios, han fracasado en la práctica y el problema de la división de la tierra continúa hoy sin solución.

¿Por qué —cabe preguntarse— si en su esencia las distintas leyes sancionadas son análogas, muchas de ellas no han dado los frutos que los antecedentes citados hacían esperar?

He ahí, señor presidente, un interrogante que debiera, necesariamente, hacer meditar profundamente a los hombres de gobierno.

Es esencial, para apreciar un aspecto importante de esta cuestión, establecer que el pago de la tierra en este tipo de colonización debe hacerse por el adquirente con el producto mismo de la tierra. Para ello es condición indispensable que las industrias rurales sean económicamente reductantes.

Vale decir, entonces, que la colonización no constituye sino uno de los aspectos, por más fundamental que se quiera, de los problemas agrarios, que no puede ser estudiado ni resuelto en forma parcial.

No se pueden considerar estos problemas con un criterio simplista y pensar que porque el Estado le diga a un agricultor: ésta es su tierra, desde ese momento el agricultor desposeído se convertirá en poseedor y en hombre económicamente independiente.

Fué así, señor presidente, que cuando el Senado de la Nación debatió la actual ley de colonización, 12.636, que concitaba en su torno las esperanzas de muchos, se levantó en ese cuerpo la voz del doctor Eduardo Laurencena, a la sazón senador radical por Entre Ríos, para vaticinar, con verdadera visión de estadista, su fracaso irremediable.

El reducido tiempo con que debemos considerar este asunto me impide detenerme a analizar como corresponde cada uno de los distintos factores que inciden en los problemas del agro, desde el punto de vista económico y que enu-

merara en aquella oportunidad el doctor Laurencena para fundar sus conclusiones. No obstante, haré de ellos una enunciación sintética para demostrar cómo permanecen aún sin solución, cuando no agravados por imperio de circunstancias especiales, muchos de esos problemas.

Desde luego, la cuestión primera y principal es la defensa del precio de la producción. Normalmente, toda explotación agrícola debe dejar un margen de utilidad que en un ciclo determinado debe alcanzar para cubrir los quebrantos inevitables de los malos años, compensar el trabajo empleado y reeditar el capital invertido, sin cuyos requisitos no existe propiedad agrícola ni es posible su expansión y progreso.

Como aquéllos fluctúan de acuerdo con el mercado internacional, donde, como en la actualidad, suelen ocurrir bajas periódicas, incumbe al Estado concurrir en defensa de los productores agrarios por vía indirecta, vale decir, disminuyendo el costo de producción mediante los siguientes arbitrios: mecanización del campo, sistema de comercialización, manipuleo a granel que economice la bolsa y el transporte.

Y bien, señor presidente: es indudable que el panorama que en tal sentido se ofrece al trabajador del agro está muy lejos de ser satisfactorio en ese sentido, debido justamente a la ineptitud e imprevisión del gobierno para resolver estas cuestiones. El precio del trigo, por ejemplo, que es nuestro renglón principal de producción agrícola, permanece actualmente en el mismo nivel del año 1952, o sea \$ 50 la fanega, que ya ha dejado de ser retributivo en virtud de que el costo de producción, como consecuencia del envilecimiento de nuestra moneda, se ha elevado de entonces a ahora en más de un 30 %, siendo también factores de incidencia directa en este momento el mayor costo de la mano de obra, que en virtud de los últimos convenios incide en el 35 al 41 %; el aumento de los fletes de los transportes en manos del Estado, de las contribuciones directas, de los combustibles, de los repuestos de las máquinas agrícolas, que hacen imposible la mecanización del campo, a la que los agricultores sólo tienen acceso en reducido número y mediante elevadísimos y antieconómicos créditos que tarde o temprano tendrán inexorablemente que devolver al Banco de la Nación con sus grandes intereses.

A todo ello deberá agregarse la apreciable baja en los precios de la ganadería, renglón que hasta ahora ha mantenido la tónica de la economía agraria, ya que la mayoría de los colonos, mediante la explotación mixta compensaban con ésta las pérdidas de la agricultura.

Estamos, pues, frente a un período de aguda crisis agraria, con los agricultores descapitalizados. Muy otras hubieran sido las perspectivas que este momento nos depara si se hubiera

contado, a la terminación de la guerra, con un gobierno previsor y ordenado que no hubiese gastado sin sentido los saldos acumulados como consecuencia de la exportación de productos agrarios, adquiriendo mediante ellos máquinas agrícolas y repuestos, lo que hubiera permitido a nuestros chacareros colocarse a la altura de los países competidores en esta materia, y si hubiera mantenido en gran parte la famosa suma de \$ 4.000.000.000 que el IAPI obtuvo como beneficio de la comercialización de las cosechas. Entonces el agro argentino hubiera adquirido un extraordinario impulso, y los chacareros hubieran podido comprar las tierras que trabajan sin necesidad de endeudarse para toda su vida, pudiendo estar en condiciones de afrontar ahora la crisis inevitable que se cierne sobre el campo.

Vale decir entonces que el gobierno, lejos de contribuir a solucionar los problemas de la producción agraria, los ha agravado. Más aún: continúa todavía bajo un pésimo régimen agrario. Esto no se soluciona con créditos más o menos liberales que no hacen más que prolongar la agonía.

Están aún por resolverse muchas de las cuestiones fundamentales, como el fomento del cooperativismo, el seguro agrícola, que aun carece de la legislación adecuada; el crédito agrícola, cuya organización ha sido proyectada muchas veces pero que todavía está bajo un régimen transitorio a cargo del Banco de la Nación, en virtud de que el país no cuenta todavía con un banco agrario con misión específica, como la del Banco Industrial; el seguro de las cosechas, sobre el cual se han hecho valiosos estudios que deben ser concretados en una ley. Y, por fin, la construcción de elevadores de granos y silos en cantidad suficiente para el almacenamiento de todas nuestras cosechas a granel en buenas condiciones, ahorrando al Estado las cuantiosas pérdidas provenientes del almacenamiento en malos depósitos, lo que determina, como ocurre actualmente, que mucho del trigo de la última cosecha tenga que ser vendido a precio muy inferior al costo, para alimento de los animales, por no estar en condiciones de servir para la panificación.

Temo que este nuevo esfuerzo que se propone realizar el Estado en pro de la colonización, invirtiendo para ello cuantiosas sumas, se resuelva en la realidad en un nuevo fracaso como los anteriores, si previamente no se solucionan aquellos problemas básicos a fin de que el productor esté en condiciones de pagar la tierra que compra con el producido de su trabajo.

Para terminar esta rápida exposición que he hecho de los errores cometidos por el gobierno en la conducción de la política agraria, quiero referirme, por ser altamente ilustrativo, al caso concreto del girasol, comentado por el dia-

rio «La Nación» el 14 de septiembre del corriente año, en estos términos: «Para que el habitante de la ciudad pueda consumir aceite barato se le ha fijado un precio de venta que no compensa los costos de una industria que ha sido tan útil para la agricultura.

«El precio pagado por el gobierno al agricultor es, a su vez, juzgado por éste insuficiente y no lo estimula a seguir sembrando girasol. El consumo nacional de aceites comestibles es de 180 mil toneladas; la producción ha bajado a 120 mil y estamos tratando de importar aceite de algodón de los Estados Unidos. Si por los diez litros anuales de aceite que consume, el habitante de la ciudad hubiera tenido que pagar algo más, ello no habría sido, creemos, demasiado gravoso para su presupuesto; en cambio, la actual fijación de precios parece haber causado un hondo desequilibrio en la economía del campo y la ciudad con las consecuencias antes anotadas.»

Esta es, señor presidente, una prueba concreta de cómo se racionaliza el cultivo en esta era del gobierno justicialista.

Como veo que el tiempo de que dispongo está próximo a vencer, entraré directamente a la consideración del proyecto que se discute.

Nuestras discrepancias fundamentales con él han sido establecidas ya por los señores diputados Weidmann y Nudelman. Quiero, por mi parte, señalar que este proyecto acusa una aguda tendencia a la estatización, que no podemos compartir, al establecer que la aplicación de la ley estará a cargo del Banco de la Nación, que no es en la actualidad sino una mera dependencia del Ministerio de Finanzas y que, como se ha dicho, procede con criterio típicamente comercial. Entendemos que no hay ninguna razón valedera que justifique ese criterio, pues no conceptuamos como tal la de orden financiero que se ha dado en el mensaje que acompaña al proyecto. El inconveniente que en tal sentido se apunta se solucionaría con sólo poner a disposición del organismo técnico que se creara, los fondos que se reputaran necesarios, en la misma medida en que se lo hará con el Banco de la Nación, en virtud del artículo 66 del proyecto.

Por otra parte, el aspecto financiero, si bien importante, no es el único que juega en materia tan compleja como la colonización.

Hubiera sido desde todo punto de vista más conveniente que la colonización fuera puesta en manos de un organismo especializado e integrado, como lo dispone la ley 12.636, por representantes de las cooperativas y de dos adjudicatarios. Se daría así cumplimiento, de una manera práctica, a los fines plausibles del artículo 3º, inciso f), del proyecto, en el sentido de promover la participación de las cooperativas en el proceso colonizador y de redistribución de la tierra.

Hay un antecedente interesante al respecto en la provincia de Entre Ríos, donde se dictó una ley sobre transformación agraria durante los gobiernos radicales, en virtud de la cual se incorporó al organismo encargado de su aplicación un representante de las cooperativas y otro de los adjudicatarios, elegidos directamente por la Federación Entrerriana de Cooperativas y por los consejos locales de agricultores, respectivamente. Vale decir, que se ponía en práctica un principio democrático y se daba forma a un organismo descentralizado y no burocrático, que no dependía exclusivamente del Estado, para que él dirigiera la política de colonización en la provincia.

Hay en el proyecto otros artículos a los que también quiero referirme, aunque sea ligeramente, para dejar sentada nuestra discrepancia.

El capítulo I, como ya puntualizó el señor diputado Nudelman, es teórico y carece de todo valor práctico.

El artículo 99 adopta un sistema que conceptúo malo. La frase «valor productivo promedio del último quinquenio» es oscura y de difícil interpretación. ¿Se refiere a la productividad de la tierra, como lo establece el artículo 13, o quiere decir otra cosa?

Por otra parte, establece un tipo de relación entre la productividad con la valuación fiscal y el valor venal, que estimo carece en realidad de sentido.

El artículo 16, en cuanto fija hasta un 30 % de la superficie de los inmuebles próximos a las ciudades y centros urbanos para ser destinados a la explotación granjera, es, a mi juicio, arbitrario. El área que podría o debería destinarse a esa forma de explotación tiene que ser variable, de acuerdo con las distintas necesidades de unas ciudades respecto de otras, y no debe, en consecuencia, ser establecida de una manera uniforme para todos los casos.

El artículo 41, inciso c), es muy loable en cuanto procura la explotación científica, pero no depende de las reglamentaciones y de las directivas que se den, sino de la posibilidad de adquirir máquinas e instalaciones. Esto puede coartar la práctica de la libertad efectiva del adjudicatario, dando origen a arbitrariedades.

Por otra parte, lo de la explotación científica es una mera frase. En materia de explotación agraria, sobre todo entre nosotros, en que todos los problemas fundamentales están a medio estudio, con mucha frecuencia las soluciones prácticas suelen dar mejor resultado que las llamadas científicas, que suelen ser meramente teóricas. Podría citar numerosos casos en que las directivas oficiales y científicas han fracasado lamentablemente.

El artículo 29, *in fine*, tiene, para mí, un error de carácter jurídico en cuanto establece, como una de las condiciones para ser adjudicatario, la de tener 20 años de edad, por lo menos. Un

hombre de 20 años, de acuerdo con nuestras leyes, es menor de edad, y en principio está sujeto a interdicciones para contraer obligaciones de tipo contractual, como será la emergente del compromiso de compraventa que deberá ineludiblemente subscribir. No veo, entonces, cómo podría conciliarse la disposición del Código Civil sobre esta cuestión, con la de la ley que estamos considerando.

Paso por alto algunas otras objeciones, para concretarme a una que considero de fundamental importancia: me refiero a la disposición del artículo 43, que establece la forma de pago de las unidades económicas, determinando que el precio será abonado mediante un servicio anual de hasta el 5 %, incluyendo amortización e interés.

La forma de pago de la tierra constituye, sin lugar a dudas, el aspecto más importante de la colonización, y, en muchos casos, la causa principal y eficiente del fracaso de muchas empresas colonizadoras y aun del propio Estado. Es indudable que el agricultor que se acoja a los beneficios de este tipo de leyes deberá hacer frente a los servicios con los recursos obtenidos de la misma tierra. Partiendo de esa base, es necesario destacar que el resultado de la agricultura es absolutamente aleatorio. No es posible, como en otro tipo de empresas, realizar ninguna clase de previsión inmediata, ya que en ella juegan factores naturales imprevisibles e inevitables.

De ello se desprende que exigir a los agricultores una cuota fija anual en dinero, en concepto de amortización e interés —por prudente y exigua que ella sea—, va contra toda lógica.

El proyecto que consideramos mitiga en parte uno de los más serios inconvenientes derivados del sistema adoptado y que consiste en la acumulación de las cuotas atrasadas, mediante la disposición del artículo 46, que tiene su complemento en la formación del fondo de ahorro previsto por el artículo 48 y siguientes. No obstante la rigidez de la obligación, que es lo que se debe evitar para posibilitar al máximo el éxito definitivo de este tipo de empresas, subsiste plenamente como factor de perturbación.

Es por todo ello que considero que una solución, para evitar tales inconvenientes, consiste en establecer la cuota anual en un tanto por ciento de la producción. De esta manera la obligación se gradúa de acuerdo con los resultados obtenidos. Ese porcentaje sólo se cobraría sobre el producido de la cosecha, excluyéndose, en consecuencia, la producción de tambo, de granja, ganadera, etcétera, lo que importaría un estímulo para el colono, que podría dedicarse a estos últimos tipos de explotación, tan necesarios para satisfacer las necesidades de nuestra población. Para ello bastaría establecer un porcentaje sobre una extensión determinada, y su aumento proporcional a medida que se re-

duce la extensión sembrada, fijándose, desde luego, en un mínimo prudencial.

Lamento tener que reducir al máximo esta exposición por la forma inadecuada como está considerando esta Honorable Cámara un proyecto de tanta importancia. Esta forma de trabajo no prestigia al Parlamento, dado que nos impide, a pesar de estar animados de los mejores propósitos, aportar con la amplitud adecuada a la importancia de este tipo de leyes, nuestro pensamiento y nuestras observaciones.

Habiendo finalizado el tiempo de que disponía termino expresando nuestro anhelo de que junto con la tierra, a los hombres del campo debe dárseles libertad, porque sin ésta nunca habrá en el país prosperidad ni bienestar económico. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Presidente (Benítez). — Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.

Sr. Gramajo. — Señor presidente: no deseo distraer la atención de esta Honorable Cámara, con una exposición referente a los temas que ya han sido abordados con acierto por mis compañeros de banca que me precedieron. Prácticamente, se consideraron todos los aspectos que surgen del proyecto; no obstante, entiendo de interés esbozar, a título ilustrativo, ciertas apreciaciones sobre el problema de la inmigración rural.

En esta materia el gobierno peronista ha recibido amplias satisfacciones de países afectados por excesos de población y de entidades internacionales como la UNESCO. En efecto, con referencia al tema, esta organización internacional hizo público recientemente su reconocimiento ante la obra del general Perón, por haber organizado la primera planta piloto, escuela modelo de selección y adaptación del inmigrante rural europeo en el mundo.

Ahora, al analizar el presente proyecto observo que señala el problema migratorio rural; y es justo significar al respecto que se siguen los lineamientos del segundo Plan Quinquenal.

Una de las finalidades expresadas en este proyecto es la de «orientar la radicación de familias campesinas de origen inmigratorio» (artículo 6º, inciso h). Por otra parte, el artículo 35 enuncia que «el banco podrá reservar en tierras de colonización hasta el 25 % de las unidades económicas, para adjudicarlas a inmigrantes campesinos que lleguen al país en virtud de los tratados que se celebren de conformidad con lo dispuesto en la presente ley».

Voy a referirme a la importancia que este aspecto reviste para el desarrollo social y económico del país.

En estos países de América el problema de la inmigración se vincula al de la formación de su población, puesto que de su composición étnica dependen, en gran parte, su evolución, adelanto, progreso y civilización.

Durante la época colonial las tierras de América estuvieron prácticamente cerradas a la inmigración. Solamente podían entrar en ellas los que tenían un permiso especial del rey, de acuerdo a las leyes de Indias. Fué el período de la emancipación y organización nacional el que prácticamente constituye el punto de partida de la inmigración en el país. Uno de los primeros años de la Junta Revolucionaria de 1810 fué abrir las puertas del país a los extranjeros.

Tal política migratoria fué seguida por Rivadavia —promotor de la creación de la Comisión Nacional de Inmigración en 1824—, por Urquiza, por Mitre, por Alberdi y por otros destacados hombres de gobierno, lo que determinó que se sancionase en 1876 la ley de inmigración aun en vigencia, que contenía también normas legales referentes a la colonización.

La inmigración cobra un rápido incremento a partir de esta época, y simultáneamente el país comienza a convertirse en exportador de sus productos.

En 1857, en que se inicia la estadística, entraron al país 4.951 inmigrantes. En los 30 años subsiguientes, esta cifra se incrementa hasta alcanzar una entrada anual de más de 100.000 personas.

Dos fueron las tendencias que orientaron el problema: la inmigración espontánea —defendida por Mitre, Alberdi, Sarmiento y otros destacados estadistas— en contraposición a la inmigración artificial o contratada, que protege y da toda clase de ventajas para los que emigran. Ni una ni otra posición han dado resultados totalmente satisfactorios.

Ya no es posible pensar en una inmigración esencialmente individual o indiscriminada. Como muy acertadamente señalara Joaquín V. González, «la buena inmigración no se dirige a los campos para ser vasallos de latifundistas, y entonces abarota las ciudades más grandes». Y así ha ocurrido; muchos inmigrantes, además, han vuelto a sus países de origen con dinero ganado en estas tierras.

La concepción peronista, al establecer la selección y encauzamiento de la mano de obra, ha inaugurado el período realmente humano de la inmigración.

Pensamos que para que cumpla su verdadera finalidad hay que preparar el ambiente propicio: subdividir la tierra para que los que vengan arraiguen en ella, como ocurrió con los primeros colonos que vinieron a este suelo. Es necesario a la vez orientar y distribuir bien las corrientes migratorias, a fin de corregir el desequilibrio que se nota entre la población de las ciudades y del campo.

La iniciativa privada tiene, sin duda, su importancia; pero ha de ser el Estado el que efectúe los planteamientos básicos, provea lo indis-

pensable y fije una política que asegure, junto con el buen éxito, la permanencia de las familias trabajadoras en los lugares de radicación.

Un país con escasa población es un país pobre. Nosotros formamos un país pobre en ese sentido, a pesar de todas nuestras riquezas naturales y de la inmensa extensión territorial. El crecimiento vegetativo es insuficiente. Hay que introducir inmigrantes buenos, útiles, seleccionados, pero sin pretensiones absurdas, que son contrarias por otra parte a nuestra Constitución y a los principios de la doctrina peronista.

En este sentido es interesante destacar el inciso n) del artículo 3º de la ley en estudio, que faculta al organismo de aplicación, es decir al Banco de la Nación, para «celebrar, con aprobación del Poder Ejecutivo, convenios con grupos de familias de agricultores residentes en el extranjero para radicarlos en colonias mediante contratos sujetos a las estipulaciones de esta ley. También podrá establecer relaciones con instituciones internacionales de las que sea signatario el país, a fin de convenir la mejor manera de radicar en zonas de colonización a productores rurales inmigrantes con la intervención de las autoridades nacionales pertinentes».

A este respecto cabe significar que se está llevando a cabo un interesante programa, en virtud de los convenios suscritos oportunamente por nuestro país con la República de Italia y el Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas, conforme han tenido conocimiento los señores legisladores en oportunidad de ser aprobada por unanimidad la ratificación de su constitución.

Estamos persuadidos de que «el mundo del futuro será patrimonio de los que detentan las virtudes que Dios inspiró como norte de la vida de los hombres, y para ello, hemos de observar celosamente los principios de colaboración social, por pertenecer a una Nueva Argentina, tan profundamente cristiana como humanista».

Nuestro país, de puertas abiertas, ha ofrecido al mundo un oasis de paz y de bienaventuranza. Ha cobijado a los hombres de distintas latitudes que buscaron refugio espiritual y material; y los ha recibido en un ambiente de tranquilidad, con calor de hogar, de justicia y de libertad.

Por otra parte, se observa, concretamente, durante el quinquenio 1953/57, la orientación de la inmigración, según los siguientes objetivos:

Selección del aporte inmigratorio; adecuación de la inmigración a las posibilidades reales de absorción y grado de ocupación, es decir, que el número de los inmigrantes dependerá de su incorporación gradual; facilidad para que el inmigrante introduzca sus propios elementos de trabajo, en particular aquellos de carácter agrario; reactivación de las corrientes inmigratorias que se dirijan hacia los puertos del interior, y en particular a Rosario y Bahía Blanca.

De lo expuesto surgen los lineamientos de una política inmigratoria rural que ya tiene realizaciones efectivas en nuestro país, con claras concepciones que al respecto innovan, por sobre lo realizado hasta la fecha.

Consecuente con los principios expuestos, se elaboró un interesante acuerdo entre el Banco de la Nación Argentina y la Universidad Nacional de la Ciudad Eva Perón, a fin de llevar a cabo un plan de migraciones europeas calificadas de tipo social, vinculado directamente a la colonización oficial en tierras de origen privado. Este plan, en plena ejecución, procura entre otros objetivos capacitar técnicamente al inmigrante, adaptándolo al medio agrario, con vistas a la incrementación de explotaciones hortícolas, granjeras y tamberas. Simultáneamente tiende a la promoción de las vocaciones rurales y a la capacitación profesional de los hijos argentinos de agricultores, con el objeto de elevar la cultura social de la población agraria y su nivel general de vida.

Además, la investigación y la experimentación contribuyen al perfeccionamiento tecnológico agropecuario del país, desde que hay un cuerpo de profesores universitarios que son asistidos en dichas tareas específicas mediante financiación del Banco de la Nación Argentina.

Se prevé que la permanencia de los agricultores inmigrantes en la referida planta-piloto-escuela es transitoria; y una vez aprobado el ciclo básico elemental, no menor de seis meses, pueden los propios interesados, y de conformidad a las necesidades reales del momento, contratar sus servicios en el orden agropecuario, o bien, cuando el banco lo considere oportuno, radicarse en tierras de colonización oficial.

Establecido en forma permanente el agricultor inmigrado, tiene derecho a llamar a los miembros de su familia radicados en el exterior, y sólo por excepción puede integrarse la familia en la planta-piloto-escuela, previo consentimiento expreso de la universidad y el banco.

Cabe significar que el aporte de la universidad, en cuanto a los bienes materiales, representa la cifra aproximada de 86.000.000 de pesos moneda nacional, sin contar el cuerpo de profesores de idiomas, agricultura, mecanización, cooperativismo, conservación de suelos, etcétera. Por su parte, el banco ha comprometido una inversión inicial de unos 5.000.000 de pesos moneda nacional para poner en marcha la empresa.

Esta iniciativa revolucionaria en los planes migratorios vinculados a la colonización, que por primera vez en la historia argentina penetra en el campo universitario, será objeto de reproducción en las restantes zonas universitarias del país y en tierras del Estado, a fin de interesar a familias trabajadoras extranjeras, acorde con nuestras exigencias y características regionales. Así, no se descuidan los lineamientos esbozados, en el sentido de atender los requere-

rimientos de mano de obra especializada, propia de una agricultura intensiva, en base a huerta, granja y tambo, incluyendo la explotación frutícola y cultivos industriales.

Al plan esbozado adhirió el Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas, adelantando a fondo perdido en 1953 la cantidad de 100.000 dólares, y 1.000.000 de pesos en 1954; y por su intermedio contamos actualmente en la planta-piloto-escuela de Santa Catalina, en estación Llavallol de la provincia de Buenos Aires, con inmigrantes horticultores que están finalizando su curso semestral de adaptación y capacitación.

Para dichos inmigrantes se han reservado lotes constitutivos de unidades económicas dentro del Gran Buenos Aires, y se les están construyendo las viviendas rurales y todas las mejoras productivas necesarias para poner en explotación inmediata la tierra concedida bajo el régimen de propiedad, en igualdad de condiciones con los argentinos. Es por tal motivo que, una vez en marcha esta última etapa y completadas las mejoras en la escuela-piloto, se estará en condiciones de realizar un ciclo migratorio de mayor volumen en forma periódica. Cabe anotar que la única garantía que el Banco de la Nación Argentina recibe de dichos inmigrantes rurales es su trabajo, desde que —faltos de recursos— no están en situación de adelantar suma alguna.

La capacidad máxima de la planta piloto escuela aceptará unos setecientos inmigrantes en constante rotación, puesto que entre otras modalidades se subraya su carácter de bolsa de trabajo permanente y especializado, para atender futuras demandas de particulares.

Otra interesante perspectiva se abrió a este problema en la Tercera Reunión Regional de la FAO, efectuada en Buenos Aires en septiembre de este año, al contemplar el aspecto migratorio vinculado al de los excedentes agrícolas. Una de las recomendaciones en dicha conferencia subraya la importancia para los países de Latinoamérica de promover una colonización agrícola planificada, a fin de incrementar aquellos cultivos cuyos productos tienen demanda en el mercado internacional y no aquellos que son motivo de excedentes.

Por otra parte, la reciente conferencia económica celebrada en Río de Janeiro ha recomendado la conveniencia de solicitar al Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas el estudio de planes de colonización agrícola en países latinoamericanos y su posible financiación por fuentes internacionales.

Por último quiero referirme a la VIII Reunión del Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas, que se acaba de celebrar en Ginebra (en diciembre de 1954) y en la cual se ha destacado la importancia de la colonización agrícola con inmigrantes en nues-

tro país, habiéndose iniciado las gestiones para obtener la participación internacional en la financiación de estos planes de colonización.

Partimos del principio de que la colaboración y la cooperación de todos perfecciona la obra común y que es menester trabajar hermanados en el espíritu, en la inteligencia y en las realizaciones prácticas. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*)

De este modo, en primer grado se favorecerá a la Europa congestionada, en segundo a la humanidad toda atendiendo las demandas del mercado internacional, y en tercer grado al país de inmigración.

Estamos seguros de que sobre el dolor y la miseria nada se construye, y que el ideal forjado en los siglos de la historia se nutre con el noble afán de ensanchar el cauce fecundo de la solidaridad social. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*)

Para ratificar lo expuesto, he escogido las palabras del excelentísimo señor presidente, general Juan Perón, en su mensaje a los ciudadanos del mundo por la cooperación económica y la paz mundial, al decir: «Es demasiado duro el clima de la injusticia para condenar al hombre a vivir en él. La injusticia está en la alteración de todo lo que sirve para consolidar la altivez humana, dar forma a sus anhelos y colmar sus esperanzas. Cuando se agitan las masas vivientes, persiguiendo ideales de tranquilidad social y económica, el mundo es el que se conmueve y el que percibe las proyecciones de esas agitaciones. Y si debemos perfeccionar la vida, hemos de fortalecer la existencia de esos núcleos sociales, haciendo que nuestros esfuerzos coincidan en el cooperativismo positivo y humano, sensible y protector.» (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos. Varios señores diputados rodean y felicitan al orador.*)

Sr. Presidente (Benítez). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Balbi. — Señor presidente: antes de comenzar mi exposición, debo manifestar que como las palabras del señor diputado Marcó no han sido nítidamente audibles, nos vemos en la imposibilidad de contestar las afirmaciones que haya hecho.

Es con verdadera satisfacción, señor presidente, que intervengo en este debate que tiene por objeto proporcionar una de las herramientas sociales de mayor trascendencia histórica, no sólo en esta Nueva Argentina peronista, sino en el propio continente americano.

Se trata de la ley de colonización que habrá de proporcionar a los trabajadores del agro la unidad económica indispensable para que en armonía familiar vean cristalizados sus anhelos, gracias al esfuerzo, abnegación y sacrificio del hombre sobre cuyo estandarte habrá de inscribirse con letras indelebles: La tierra para el que la trabaja. (*Aplausos.*)

Y así, en forma escalonada, se va cumpliendo el programa señalado por Perón, que nos viene ofreciendo un conjunto de normas legales de ejecución inmediata. Tal, señor presidente, esta ley de colonización que estamos examinando y que está imbuída del pensamiento y orientación dados por el señor presidente de la República en discursos pronunciados por el mismo, antes del 24 de febrero de 1946; en disposiciones posteriores, y ahora ante una experiencia de perfeccionamiento continuo, nos ofrece una ley de tipo integral, que contempla los numerosos aspectos y necesidades del trabajador del agro y su familia.

Es el nuevo concepto de la solidaridad social que se extiende por todo el territorio argentino, a fin de que cada núcleo familiar, cualquiera sea el lugar en que habite, sienta el apoyo básico del Estado, que fortalece al débil económicamente, y lo coloca en un plano de igualdad con los demás.

Señor presidente: mis colegas de sector, que me han precedido en el uso de la palabra, analizaron ya las distintas facetas de esta ley. Yo, con la exigüidad del horario, voy a hacer un rápido examen de la misma, con esta base: el cooperativismo frente a la ley de colonización.

No está en mi ánimo hacer la historia del cooperativismo argentino, puesto que ello demandaría más tiempo del que tengo asignado para mi exposición, pero sí debo decir que en el pasado, al cooperativismo se lo veía con dudas por sus resultados y con desconfianza por su actividad.

Si bien hubo muchas iniciativas y plataformas electorales en el gobierno, los que llevaron en sus plataformas electorales esas iniciativas, llegados al gobierno, nunca contaron con el apoyo franco que necesitaban las cooperativas para poder desenvolverse. De ahí que sabiamente dijera Perón: «El cooperativismo ha fracasado porque nunca fué apoyado por los gobiernos y ha sido combatido por los monopolios. Por eso, en el régimen capitalista el cooperativismo ha muerto, pero en el régimen justicialista, lo que ha muerto son los monopolios.» (¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.) Y agregaba el líder de la argentinidad, en otra ocasión: «Las cooperativas agrarias han merecido nuestro total apoyo, porque ellas son para la economía social de la doctrina peronista, unidades de acción económica que realizan el acceso de los hombres que trabajan a la posesión total del instrumento y del fruto de sus esfuerzos.»

Con este total y desinteresado apoyo gubernamental del Estado peronista, llega el cooperativismo argentino a alcanzar en pocos años el mismo nivel que tienen las organizaciones cooperativas, algunas casi centenarias.

Se vienen cumpliendo, señor presidente, matemáticamente, los enunciados establecidos en el segundo Plan Quinquenal. Los objetivos espe-

ciales del capítulo X, Acción Agraria, se encuentran ampliamente cumplidos en esta ley de colonización que aparece en el escenario nacional en beneficio de todos los que quieren trabajar la tierra y hacerse propietarios. También se llevan a cabo los postulados del segundo Plan Quinquenal en cuanto a la acción cooperativa agraria, y puedo asegurar que uno de esos puntos y de los más importantes, está considerado en este proyecto de ley que trata la Honorable Cámara.

Un somero examen permitirá confirmar mis manifestaciones. Los procesos de productividad, comercialización, industrialización, exportación e importación, han sido superados en estos últimos cuatro años. Ha llegado el movimiento cooperativo agrario, con la ayuda estatal, a comercializar el 58 por ciento de la última cosecha, representando un aumento de un 300 por ciento con relación a 1950. Se habla de que las cooperativas no industrializan. Puedo decir que por el sistema cooperativo el año pasado se industrializó el 50 por ciento de oleaginosos producidos por sus asociados. También ha exportado el año anterior el 30 por ciento de sus acopios. El sistema cooperativo argentino tiene el 72 por ciento de los graneros y elevadores que existen en el país.

El sistema cooperativo ha hecho los primeros ensayos de importación en forma de compensación con productos nacionales y de importaciones directas.

Quiere decir, señor presidente, que con la ayuda estatal el movimiento cooperativo argentino ha avanzado a pasos tan agigantados en este último quinquenio, que ha superado lo que se hizo en toda una vida, cuando los gobiernos anteriores veían en el cooperativismo un movimiento de izquierda y no un medio que contribuye a lograr la independencia económica del pueblo, motivo por el cual facilita la acción gubernamental para obtener una nación socialmente justa, pilar básico para la defensa de su soberanía. (¡Muy bien! ¡Muy bien!)

¿Qué faltaba para que ese sabio decálogo cooperativo del segundo Plan Quinquenal estuviese totalmente cumplido? La participación cooperativa en el proceso colonizador.

¿Qué dice el artículo 39, inciso f), de esta ley de colonización? «El banco, a los fines de esta ley, tendrá las funciones y deberes que se indican...: inciso f) promover la participación de las cooperativas en el proceso colonizador y especialmente en la redistribución de la tierra.»

¿Qué significado tiene para el cooperativismo el enunciado que termino de leer? Es el anhelo más ferviente, en la gran batalla ganada sin derramamiento de sangre, es la defensa de la tierra por el mismo cooperativista que la tiene a su cargo, ya que se encargará él de evitar todo abuso, todo acaparamiento de unidades econó-

micas, y en su acción vigilante evitará que los logreros obtengan ventajas desmedidas o se valgan de interpósitas personas para acrecentar sus bienes, en violación del precepto constitucional que la ley incorpora en su texto cuando, en el segundo apartado del artículo 1º expresa: «La propiedad privada tiene una función social, y está sometida a las obligaciones que se determinan en esta ley, acorde con el bien común.»

Esta norma, al igual que las precedentes del artículo 1º de la ley, tiene su origen en la Constitución Justicialista, y han sido puestos en forma intencionada y deliberada, porque traduce en esa vanguardia legal lo que podría llamarse «el espíritu de Perón», que es lo mismo que decir: la solidaridad social entre hermanos argentinos deseosos de confundir, en un mismo abrazo fraterno, a todos los trabajadores y sus familias que, en cualquier lugar del universo, ansían gozar de un amparo similar. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*)

Al llegar a comentar este inciso f) del artículo 3º de la ley, séame permitido manifestar, señor presidente, que hasta este proceso colonizador y de redistribución de la tierra, ha sido también superado en la Nueva Argentina por las cooperativas, que siguen la línea trazada por Perón.

La Asociación Justicialista de Cooperativas Agrarias, que me honro en presidir, ha adquirido en el mes de octubre próximo pasado un campo de 7.500 hectáreas en la provincia de Buenos Aires, para ser entregado a auténticos productores socios de nuestras cooperativas; el campo ha sido adquirido a mucho menos de la mitad de su valor y será entregado al mismo precio a los productores. Y en el día de ayer ha adquirido una nueva fracción de campo de 3.000 hectáreas, en la provincia de Santa Fe, en iguales condiciones de precio que la anterior y para el mismo fin: dar la tierra en propiedad y a bajo precio al auténtico productor que la trabaja. Así como cumple Perón, seguimos su camino los peronistas. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Al actuar de esta manera, creemos que se procede a la defensa del país, de todos sus habitantes, cualquiera fuera su pensamiento, de la sociedad en general, y afirmando la democracia argentina, tal como lo establece la Constitución peronista en su artículo 1º.

El proyecto que trata la Honorable Cámara considera, en los artículos 23, 25, 26, 30, 41, 74 y 77, otros aspectos cooperativos aplicables en la colonización por el organismo encargado de ella, que es el Banco de la Nación Argentina.

Sobre la formación de cooperativas donde no las hubiere próximas a las colonias, o asociación de los colonos en las existentes, trata el artículo 25. Se reconoce así, con este artículo, el mérito y esfuerzo de los que se organizaron con anterioridad a la colonia. De ahí que el

mismo banco colaborará para que los nuevos propietarios formen parte de la cooperativa existente.

El inciso f) del artículo 30 confiere prioridad al socio de la cooperativa agropecuaria. Es de destacar esta novedad en la ley, ya que viene a fortificar el movimiento cooperativo, que se verá cada día más grande y más organizado por auténticos productores, como lo quiere el general Perón; y para ir separando, si los hubiere, a quienes creen que aun en esta época, a diez años de la revolución peronista, se puede vivir sin trabajar o a costa del trabajo ajeno. Los auténticos productores sabrán organizarse y dirigir sus propias cooperativas sin necesidad de intermediarios o consejeros.

Sin perjuicio del examen de los puntos concretos en materia de cooperativas, corresponde expresar que a través del texto de la ley de colonización, numerosas disposiciones de aplicación general tienen relación directa con el tema cooperativo.

Se trata con ello de «cooperativizar» las colonias para que, a través de este sistema económico, se humanice el capital, se solidaricen los trabajadores del agro alrededor de problemas comunes y estén en condiciones de defender sus intereses contra todos aquellos que esperan algún momento difícil en la vida del trabajador, ya sea por malas cosechas, infortunios inesperados o pérdidas familiares. Es indispensable evitar que aprovechen de esas desgracias los explotadores de una sociedad laboriosa, que con su acción inhumana agravarían el problema de las familias indefensas.

La acción cooperativa tiene el deber de preparar, por medio de sus dirigentes, al hombre del campo para recibir los beneficios que le ofrece el Estado. No bastará el acatamiento a las disposiciones que dicte el gobierno en función de su cometido, concordantes con esos beneficios, puesto que no podemos creernos nuevos privilegiados en un movimiento revolucionario que llegó al país contra la injusticia gobernante y por la justicia del productor oprimido. Tenemos que ser actores útiles del movimiento emancipador de los derechos de la familia agraria.

Señor presidente: voy a terminar solicitando a todos los legisladores que actuemos unidos frente a esta ley de colonización, en procura de un mismo ideal, cual es el de dar la tierra en propiedad al que la trabaja, facilitando para ello los elementos que el Estado pone a disposición de todos los que quieran trabajarla. Colaboremos junto al primer magistrado en pro del engrandecimiento del país, afincando a sus moradores, pues así, a medida que quede arraigado el concepto de la propiedad, en cada una de las mismas se establecerá un bastión que habrá de defender, por todos los tiempos, a la democracia de esta Nueva Argentina de Perón.

Señor presidente: no estamos solamente los legisladores dando nuestro voto favorable a esta nueva realidad peronista; no, señor presidente: están con nosotros, de nuestro brazo, las 1.100 cooperativas del país, que votan favorablemente la ley de colonización, porque ven en ella, por primera vez en el país, el reconocimiento de este movimiento que viene trabajando denodadamente por la independencia económica del país.

Y a los colonos cooperativistas, beneficiarios directos de esta ley, lleguen estas sabias palabras de Perón: «El gobierno no solamente espera del trabajo y del tesón de los agricultores, sino que también espera de su alma, de su corazón y de sus sentimientos de argentinos. No habrá esfuerzo que no realicemos para ayudar al agro, para ayudarlo en todas las formas, sin limitaciones, esperando de ustedes, como buenos argentinos, que colaboren con nosotros para labrar una nueva patria libre, justa y soberana.» (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos prolongados. Varios señores diputados rodean y felicitan al orador.*)

Sr. Presidente (Benítez). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Tommasi. — Señor presidente: muy pocas palabras voy a decir para terminar este debate. Algunas apreciaciones de la oposición me obligan a ello, especialmente una hecha por el señor diputado Nudelman, que ha pretendido dirigir sus tiros a la colonia de Balcarce, mi pueblo.

Creo que el señor diputado Nudelman ha metido el dedo en el ventilador porque no conoce en absoluto el problema agrario de la colonia de Balcarce. Ha pretendido que 14.000 hectáreas fueran distribuidas entre 4.800 familias agrarias, vale decir, que a esos beneficiarios les corresponderían tres hectáreas por familia, más o menos.

Por la ubicación geográfica de Balcarce, la distancia de los centros de consumo, las características agroecológicas de la tierra, la pretensión del señor diputado Nudelman es sencillamente absurda, porque con la superficie asignada esas 4.800 familias se morirían de hambre.

Le contesto al señor diputado Nudelman con las palabras rectoras del señor presidente de la Nación en materia de política agraria: «No queremos hacer un proletariado campesino, sino agricultores felices y prósperos.» (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

La colonia de Balcarce ha sido adjudicada en 180 lotes, con superficies que varían de 46 a 193 hectáreas, según las características de cada una de las parcelas. Esas superficies constituyen unidades económicas. Puedo asegurar a esta Cámara, con absoluta verdad, de que la colonia más próspera del país en este momento es la colonia de Balcarce, y que hay en ella colonos que han hecho su propia vivienda, de un costo de hasta 170 mil pesos, con recursos propios, sin pedir un solo peso al Banco de la Nación.

Esto le demuestra al señor diputado que los lotes han sido adjudicados con el alto concepto de la unidad económica; no para que vegeten y se mueran de hambre los colonos, sino para que progrese la familia agrícola argentina y para que los habitantes del campo sean felices. Sería de desear que todas las colonias del país pudieran ofrecernos tan alto ejemplo.

Actualmente, las pequeñas reservas que tienen esas colonias se utilizarán para aumentar algunas unidades económicas que por el crecimiento familiar lo exigen, asunto que se está estudiando.

En cuanto al sistema radial a que se refería el señor diputado, evidentemente le ha gustado mucho como dibujito, pero el señor diputado no tiene conocimiento de las explotaciones agropecuarias. En el sistema carcelario, el sistema radial será admisible para poner en el centro la torre de control para vigilar a los presos; pero en una colonia la triangulación significa la pérdida de una enorme cantidad de tierra, distancias demasiado largas y un esfuerzo innecesario para el colono. Por eso, tal distribución se dejó sin efecto y se demostró el acierto del banco en esta materia.

Sr. Nudelman. — ¿Me permite una interrupción el señor diputado, con el permiso de la Presidencia?

Sr. Tommasi. — ¡Cómo no!

Sr. Presidente (Benítez). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Nudelman. — Lamento que el señor diputado, variando su habitual característica, haya hecho una afirmación tan temeraria, revelando que es él quien desconoce el problema.

Demostraré la verdad de lo que afirmé con la base de un documento proveniente de órganos oficiales.

La edición del 23 de mayo de 1946 del periódico «Hombres de Campo» menciona la colonia con la que se hizo propaganda política.

—Varios señores diputados hablan simultáneamente.

Sr. Nudelman. — Allí se asegura que la colonización radial es la mejor solución técnica, aconsejada por el director de Planificación del Consejo Agrario Nacional. Sobre esa base debió hacerse la parcelación de la colonia Balcarce.

El final del asunto es lo que afirmé: el concepto capitalista de entrega en propiedad, a cincuenta años de plazo, en las condiciones en que se hacía en todas las épocas conservadoras. No hay, pues, tal revolución agraria de la que blasonaba la propaganda peronista el 24 de febrero.

Sr. Presidente (Benítez). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Tommasi. — El radicalismo vive de historia antigua: habla de 1947, cuando se comenzó

a adjudicar lotes. Puedo asegurar que siete años después las cosas han cambiado.

—Varios señores diputados hablan simultáneamente, y suena la campana.

Sr. Tommasi. — Ningún señor diputado ha hecho observaciones que merezcan nuestra réplica y la verdad es que si el radicalismo quiere hacer justicia tendrá que votar favorablemente el proyecto de ley que consideramos.

Sr. Alende. — ¿Me permite una interrupción, el señor diputado, con autorización de la Presidencia?

Sr. Tommasi. — Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Benítez). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Alende. — El señor diputado por Buenos Aires ha hecho algunas apreciaciones vinculadas a la situación de los colonos, con muy flaca memoria. Le recuerdo las asambleas realizadas en la localidad de Balcarce con motivo de problemas relacionados con la comercialización y distribución de la papa. Allí en marzo de este año se hizo una asamblea, en la que, por la protesta de los colonos, ni el señor diputado Tommasi ni el señor Plá pudieron hacer uso de la palabra porque sus voces se vieron acalladas ante los reclamos y las protestas crecientes de los colonos balcarceños. Como ejemplo de cómo se quiere manejarlos, denunciaron que todas las leyendas que cubrían los palcos, en las que se aludía a adhesiones al señor presidente de la República, habían sido puestas por los organismos oficiales y no por ellos mismos.

Muy poco tiempo después —y el señor diputado por Buenos Aires lo sabe perfectamente—, en junio, la policía impidió las deliberaciones de los mismos colonos y de los paperos balcarceños que se congregaron en un acto de protesta en la plaza central de la ciudad de Balcarce.

Estoy bien seguro que la política ruinosa seguida por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, e incluso inconstitucional en materia de política de distribución de la papa, que es uno de los productos que más se cultivan en esa rica zona de la provincia, está en contra del pensamiento de esos colonos y corresponde expresar esta protesta incluso en este tema de la colonización.

Tengo en mi poder la prueba concreta demostrativa de la falacia con que se expresan de toda la literatura que vierten los diputados de la mayoría acerca del problema de la colonización. Obra en mi poder el detalle del remate habido en un extraordinario campo de la ciudad de Arrecifes, colonia San Marcos, ex propiedad del consorcio Bemberg. Se trata de un campo de 2.000 hectáreas de tierras privilegiadas, ubicadas tan sólo a seis kilómetros de la localidad mencionada. Los diputados del radicalismo en la legislatura de Buenos Aires, señores Blanco, Marino y Zubiarre entre otros, demostraron

cómo, violándose todo principio elemental colonizador, esa tierra fué puesta en remate en bloque, sin tenerse en cuenta para nada a quienes la han estado ocupando desde hace 15 y 25 años. Los colonos que actualmente ocupan 1.900 hectáreas de ese campo no han sido tenidos en cuenta al efectuarse la venta. Se ha producido el remate judicial de este campo, que fuera utilizado en un negociado presumible, porque ha sido comprado por elementos vinculados a la reventa de automotores; así, las ganancias ilegales de la reventa de automóviles de la nueva oligarquía se vuelcan en la compra de los campos de la sucesión Bemberg, lo que pone en evidencia toda una política en detrimento del hombre de trabajo, en beneficio de los bolsillos de los favoritos de este gobierno.

—Hablan varios señores diputados a la vez, y suena la campana.

Sr. Presidente (Benítez). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Tommasi. — El señor diputado por Buenos Aires ha hecho una referencia inexacta.

Los señores diputados, que siempre claman por la libertad de expresión, por la libertad de reunión, tendrán que reconocer que en el gobierno justicialista del general Perón los productores asociados a cooperativas tienen absoluta libertad, como lo demuestra la asamblea a que ha hecho referencia el señor diputado.

—Varios señores diputados hablan a la vez, y suena la campana.

Sr. Tommasi. — He escuchado serenamente al señor diputado por Buenos Aires, y le ruego me permita responderle, ya que le concedí una interrupción.

Es evidente que esa asamblea fué una demostración efectiva y real de la absoluta libertad de los productores de Balcarce, donde ellos expusieron sus problemas. Fueron escuchados porque el gobierno peronista, señor diputado por Buenos Aires, ha apoyado y protegido la producción papera de esa zona como no lo ha hecho nunca ningún gobierno argentino. Lo puedo manifestar con absoluta verdad porque soy hijo de chacarero de papa. Antes del advenimiento del peronismo, después de extraerla de la tierra había que abandonar la producción porque no tenía mercado. Actualmente existe un excedente de producción, y el gobierno nacional prestará el debido apoyo, como hace dos años, en que destinó 50 millones de pesos para incrementar esa producción y favorecer a los productores de Balcarce. Esto es real, y no puede ignorarlo nadie que conozca el problema. (Aplausos.)

Ya se han exportado tres millones de bolsas de papa, y el área sembrada será mayor que la del año pasado.

En cuanto a las otras apreciaciones del señor diputado por Buenos Aires, relacionadas con

la colonización, debo manifestar que está equivocado. Olvida que muchas de las propiedades de Bemberg han sido liquidadas por lo dispuesto en una ley, y otras han sido llevadas a subasta pública en la provincia de Buenos Aires. Ayer, la Asociación de Cooperativas Bonaerenses —no se trata de ningún oligarca—, ha adquirido en tres millones de pesos, en Villa Cañas, Santa Fe, una colonia de tres mil hectáreas en remate judicial, para entregarla a los productores que la están trabajando.

Sr. Alende. — ¿Y la de San Marcos, quién la compró?

Sr. Tommasi. — Mis afirmaciones demuestran que las palabras del señor diputado eran completamente inexactas.

—Varios señores diputados hablan a la vez, y suena la campana.

Sr. Tommasi. — Creo haber demostrado también a la Honorable Cámara y, en especial, a los señores diputados de la minoría, que no se pueden lanzar así, en el aire, acusaciones sin pruebas concretas. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Alende. — No son acusaciones en el aire.

Sr. Presidente (Benítez). — Se va a votar en general el despacho de la Comisión de Legislación Agraria.

—Resulta afirmativa de 94 votos; votan 102 señores diputados.

Sr. Miel Asquía. — Debe haber una deficiencia del registro en los aparatos mecánicos que computan los votos; solicito que la votación se rectifique nominalmente.

Sr. Presidente (Benítez). — La Presidencia desea saber si está suficientemente apoyado el pedido de votación nominal.

—Resulta suficientemente apoyado.

Sr. Presidente (Benítez). — Se va a votar nominalmente.

—Se practica la votación nominal.

Sr. Secretario (Oliver). — Ha resultado afirmativa unánime de 110 votos. (*Aplausos.*)

—Votan por la afirmativa los señores diputados Acosta, Acuña, Agüero, Albarellos, Albertelli, Albrieu, Alende, Alonso, Alvaredo de Blanco Silva, Alvarez, Arias, Astorgano, Balbi, Bidegain, Biondi, Blasi, Brigada de Gómez, Brizuela, Bustos Fierro, Campano, Cámpora, Camus, Cantore, Carballido, Carrizo, Castagnino, Casuccio, Clement, Chalup, Dacunda, Da Rocha, Degliuomini de Parodi, Degreef, Deimundo, Del Río, De Prisco, Diskin, D'Jorge, Domínguez (C. J.), Domínguez (R.), Dussaut, Fassi, Fernández (E.), Fernández (H. S.), Ferrer Zanchi, Flores, Fontana, Forteza, García, Gianola, Gobello, Goitia, Gómez, Gomis, Gramajo, Hermida, Idománico, Labanca,

Lanfossi, Loguercio, López (G.), López (N.), López (P.), López (P. G.), Luna, Macabate, Maestro, Marcó, Merlo, Messina, Miel Asquía, Miguel de Tubío, Montes, Moreshi, Moya, Musacchio, Ordóñez Pardo, Orlandi, Osella Muñoz, Pallanza, Parino, Pellerano, Peralta, Pérez Otero, Pericás, Picerno, Piovano de De Castro, Posada, Pracánico, Presta, Preste, Rinaldi, Roche, Rodríguez (M. F.), Rodríguez de Copa, Rouggier, Rumbo, Salaber, Santucho, Spachessi, Tejada (B. M.), Tejada (M. U.), Tesorieri, Tofanelli, Tommasi, Torterola de Roselli, Vergara, Villa Maciel de Cano, Weidmann y Zerega.

Sr. Presidente (Benítez). — En consideración en particular.

Por Secretaría se va a dar lectura del artículo 19.

Sr. Vergara. — Hago indicación de que se suprima la lectura del texto de los artículos, ya que el proyecto impreso se encuentra en las bancas de los señores diputados.

Sr. Presidente (Benítez). — Si hay asentimiento, así se hará.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Benítez). — Se prescindirá de la lectura del texto de los artículos.

Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Miel Asquía. — Hago indicación de que la votación se haga por capítulos, limitándose la Secretaría a enunciar el número correspondiente, y aprobándose los capítulos que no sean objeto de observación.

Sr. Presidente (Benítez). — Si hay asentimiento, así se hará.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Benítez). — Se votará por capítulos, y se darán por aprobados los que no sean observados.

Sr. Wiedmann. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Benítez). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Weidmann. — Sin perjuicio de exteriorizar nuestra disconformidad con el procedimiento de no tratar en particular un proyecto de esta magnitud, me voy a limitar a indicar, constreñido por la posición de la mayoría, los artículos respecto de los cuales nuestro voto es negativo en base a las razones que diéramos en nuestra exposición en general. Son ellos: artículos 2º, 3º, inciso b); 4º; 6º, inciso c); 9º; 15; 20; 35; 40, inciso e) in fine; 41, incisos d), g) y h); 48; 51, inciso a); 52; 54, inciso b); 56; 57 y 66.

Sr. Presidente (Benítez). — Quedará constancia de las manifestaciones del señor diputado por Santa Fe.

En consideración el capítulo I del proyecto de ley.

—Se aprueba.

Sr. Presidente (Benítez). — En consideración el capítulo II.

—Se aprueba.

Sr. Presidente (Benítez). — En consideración el capítulo III.

—Se aprueba.

Sr. Presidente (Benítez). — En consideración el capítulo IV.

—Se aprueba.

Sr. Presidente (Benítez). — En consideración el capítulo V.

—Se aprueba.

Sr. Presidente (Benítez). — En consideración el capítulo VI.

—Se aprueba.

Sr. Presidente (Benítez). — En consideración el capítulo VII.

—Se aprueba.

Sr. Presidente (Benítez). — En consideración el capítulo VIII.

—Se aprueba.

Sr. Presidente (Benítez). — En consideración el capítulo IX.

—Se aprueba.

Sr. Presidente (Benítez). — En consideración el capítulo X.

—Se aprueba.

Sr. Presidente (Benítez). — En consideración el capítulo XI.

—Se aprueba.

Sr. Presidente (Benítez). — En consideración el capítulo XII.

—Se aprueba.

Sr. Presidente (Benítez). — En consideración el capítulo XIII.

—Se aprueba.

Sr. Presidente (Benítez). — En consideración el capítulo XIV.

—Se aprueba.

Sr. Presidente (Benítez). — En consideración el capítulo XV.

—Se aprueba.

Sr. Presidente (Benítez). — En consideración el capítulo XVI.

—Se aprueba.

Sr. Presidente (Benítez). — En consideración el capítulo XVII.

—Se aprueba.

Sr. Presidente (Benítez). — En consideración el capítulo XVIII.

—Se aprueba.

Sr. Presidente (Benítez). — En consideración el capítulo XIX.

—Se aprueba.

Sr. Presidente (Benítez). — En consideración el capítulo XX.

—Se aprueba.

Sr. Presidente (Benítez). — Queda sancionado el proyecto de ley (1).

Sr. Presidente (Benítez). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Alonso. — Como el día lunes por la mañana debe reunirse la Comisión de Presupuesto y Hacienda —que es la más numerosa de la Honorable Cámara—, a la cual han de concurrir los señores ministros del Poder Ejecutivo para informar sobre el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la Nación, hago moción de que se pase a cuarto intermedio, para reanudar la sesión el lunes a la hora 15 y 30.

Sr. Presidente (Benítez). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Alende. — No tenemos inconveniente en que se sesione el lunes por la tarde; pero hacemos moción de que se levante la presente sesión.

Sr. Presidente (Benítez). — Se va a votar la moción de orden, formulada por el señor diputado por Buenos Aires, de que se levante la sesión.

—Resulta negativa de 76 votos; votan 97 señores diputados.

Sr. Presidente (Benítez). — Se va a votar la moción de orden, formulada por el señor diputado por la Capital, de que se pase a cuarto intermedio.

—Resulta afirmativa de 87 votos; votan 98 señores diputados.

Sr. Presidente (Benítez). — Invito a la Honorable Cámara a pasar a cuarto intermedio.

—Se pasa a cuarto intermedio a la hora 13 y 55.

(1) Véase el texto de la sanción en la página 2707.